





Economía y política 1

*Escritos coyunturales para comprender problemas
estructurales (2012)*

Título: Economía y política
Subtítulo: Escritos coyunturales para comprender problemas estructurales
Autor: Julio C. Gambina

©FISyP, Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas
Montevideo 31 - 2º 3
(CP1042AAB) Buenos Aires - Argentina
Tel Fax: 4381-5574 / 6088-9949
mail: fisyp@fisyp.org.ar
web: www.fisyp.org.ar

Corrección y edición: Julián Chappa • Soluciones Editoriales
Diseño de cubierta: Julián Chappa
jceditor2002@yahoo.com.ar • www.julianchappaeditor.com

Tapa y maquetación interior: José Luis Bournasell
jlournasell@gmail.com

La Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas es una entidad sin fines de lucro, dedicada a la actividad de investigación, docencia y difusión en diversas áreas de Ciencias Sociales.

Esta publicación puede ser reproducida libremente por cualquier medio publicando fuente y autor.

Gambina, Julio César
Economía y política : escritos coyunturales para comprender problemas estructurales .
- 1a ed. - Buenos Aires : Fundación Investigaciones Sociales y Políticas - FISyP, 2013.
246 p. ; 16x26 cm.
ISBN 978-987-45275-0-9
1. Economía Política.
CDD 320.1
Fecha de catalogación: 03/12/2013

Economía y política 1

**Escritos coyunturales para comprender problemas
estructurales (2012)**

Julio C. Gambina



INDICE

Presentación	1
Nota del Editor	3
PRIMERA PARTE	5
Introducción	7
Foro Social Mundial 2012 (Porto Alegre)	9
Declaraciones del autor en el marco del Foro Social Mundial 2012 en Brasil, inaugurado formalmente por la presidenta Dilma Rousseff	
Los debates en los foros mundiales	11
Declaración de la Asamblea de movimientos sociales 2012 (Porto Alegre, Brasil)	17
¿Fin del consenso privatizador?	21
Apertura de sesiones en el Parlamento	25
Sobre el 1º de Mayo de 2012	29
El debate es por los ingresos de los trabajadores	35
Salarios mínimos y relaciones laborales	39
Golpe de Estado Parlamentario en Paraguay	43
Ajuste en el salario mínimo	47
El proyecto político en busca del sujeto	51
Se ajustaron las Asignaciones Familiares	55

Las Elecciones venezolanas y el debate económico en Nuestramérica	59
Saqueos, pobreza y disputa política	63
Declaración de la “Corriente en la CTA”	67
Por la construcción de alternativa política desde la movilización de los trabajadores	
SEGUNDA PARTE	73
Introducción	75
Salarios y petróleo en el debate actual	77
Sobre las concesiones petroleras	83
Inserción de Argentina en el mundo (Cumbre de Cartagena y caso YPF)	87
La expropiación de YPF y los debates habilitados	91
“La gente de la pampa sojera busca emigrar”	95
Luego de la expropiación: ¿petróleo para qué?	101
Declaración de Mar del Plata: “Soberanía energética, un desafío para Nuestramérica”	105
Problemas fiscales en las provincias	109
Situación fiscal y conflicto social y político	113
Expectativas y debates entre la deuda y la integración	117
Producción agraria: entre los alimentos y la energía	121
Anuncios petroleros	125
La deuda y la pérdida de soberanía	129
Vuelve el condicionante económico: ¡la deuda pública!	133
petróleo, gas y deuda pública en debate	135
TERCERA PARTE	139
Introducción	141
Los temas económicos a comienzos de 2012	143
Liberalización económica y empleo	147
Importaciones y divisas en la discusión económica	153
Acerca del crecimiento económico de la Argentina	157
Datos sobre los ingresos en EE.UU.	159

La política en el debate sobre la crisis mundial	161
La Economía argentina en el contexto de la crisis mundial	165
Entrevista de Mario Hernández a Julio Gambina	
Anuncios económicos y cumbres globales	169
Resoluciones del G20 en Los Cabos (México)	173
Entre la crisis mundial y las tensiones políticas: datos para una semana turbulenta	179
La crisis mundial también se siente en la economía local	185
Cancelación del Boden 12. Algunas referencias y reflexiones	191
Notas sobre el Presupuesto 2013 para la Argentina	195
Cruces dialécticos con el FMI y los acuerdos con las transnacionales	199
Actualización sobre la crisis mundial	205
Anuncios de cambios para el mercado de capitales en Argentina	209
Economía y política detrás del 8N	213
Suspensión del fallo Griesa: ¿y ahora qué?	217
La economía argentina entre 2012 y 2013	221



PRESENTACIÓN

Hace ya un tiempo que recibo consultas de diversos medios periodísticos de la Argentina y el exterior. Con el transcurso del tiempo, dichas consultas fueron transformándose naturalmente en artículos periodísticos, muchos de los cuales circulan en redes sociales y en medios de prensa de organizaciones populares, de trabajadores, territoriales, sindicales, estudiantiles, etc. Esa producción circula por la red de redes con acceso libre. No obstante ello, y a raíz de diversas peticiones, hemos decidido presentar los artículos en formato libro, con la sola reubicación en tres secciones, con epicentro en la situación y propuestas de los trabajadores la primera, en la producción material la segunda, y en el sistema mundial, la crisis y la economía la tercera.

La temática es variada pero centrada en un enfoque de crítica de la economía política y considerando al sistema económico como mundial, ya que estamos convencidos de la imposibilidad de aislar un acontecimiento nacional de la coyuntura mundial, aunque somos plenamente conscientes de que existen especificidades nacionales. Al pensar y difundir opinión desde la crítica de la economía política, emergen temas considerados sociales, políticos, económicos, culturales, etc., que nunca considero de forma aislada, sino como parte de un todo conceptual que se define en el orden capitalista contemporáneo. Así, el golpe de Estado en Paraguay, las elecciones venezolanas, la realización del Foro Social Mundial o las consideraciones más diversas sobre la crisis mundial del capitalismo en curso son ejes de mis comentarios semanales y a veces diarios (en general en medios de comunicación alternativos).

Por cierto, los temas nacionales se hallan siempre asociados a la coyuntura global, y así las demandas de los trabajadores no se analizan

sino en el marco de la ofensiva global del capital sobre el trabajo; o el proceso de privatizaciones se considera desde la promoción de la iniciativa privada que estimulan las políticas neoliberales en estos años de liberalización, o la integración desde la discusión entre integración subordinada y alternativa, tal como se ensaya entre algunos procesos de cambio político en Nuestramérica, tal el caso del ALBA-TCP.

Se incluyen declaraciones colectivas que me involucran como firmante o interviniente en su redacción y otras que mejor explican el sentido de las comunicaciones propias. Son expresión de una inserción personal en el movimiento popular que lucha por la emancipación social. Como sostuve en otras ocasiones, escribir desde una posición «clasista» supone tomar partido por los intereses de los trabajadores y de los pueblos, de quienes cosecho información y experiencias que intentan ser expuestas como síntesis teóricas o políticas para seguir avanzando en la producción de conocimiento emancipador.

Esperamos que los textos que siguen –crónicas de 2012– contribuyan a una mejor comprensión de la dinámica de la lucha de clases en Argentina, Nuestramérica y el mundo.

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2013.

NOTA DEL EDITOR

El presente libro se nutre de un *corpus* de artículos que el autor ha escrito y publicado en su blog personal a lo largo del año 2012. En cuanto a la exposición del material, el criterio que hemos adoptado ha sido dividirlo en tres partes o bloques temáticos, dentro de los cuales el orden de aparición de cada artículo obedece a su fecha de publicación original en el blog del autor.

La *Primera parte* consta de quince textos –entre ellos dos entrevistas–, aglutinados en torno a la política, desarrollando temas tales como la situación de los trabajadores argentinos, la política local y regional en el marco del Mercosur y el papel del Foro Social Mundial.

La *Segunda parte* reúne otros quince artículos –entre ellos una entrevista– con eje en la producción, específicamente en artículos que giran en torno a la deuda pública y la situación fiscal en Argentina, la soberanía energética centrada en el petróleo y la producción agraria.

La *Tercera parte*, a través de diecinueve textos –entre ellos una entrevista, información estadística y un texto a pedido– aborda específicamente la economía argentina y sus interacciones con la economía mundial en la actual coyuntura de crisis del capitalismo global, de la que emerge el concepto clave de *economía glocal*.

Párrafo aparte merece la mención de la altamente gratificante experiencia que ha significado trabajar con Julio C. Gambina, profesional comprometido con su tiempo y una causa concreta, pero sobre todo cálido y muy generoso ser humano que ha permitido que la tarea de un servidor logre fluir con naturalidad.

Julián Chappa · Editor.



PRIMERA PARTE



INTRODUCCIÓN

El acontecimiento más importante en la lucha de clases de la Argentina durante 2012 fue la movilización resultante de una convocatoria conjunta entre la CTA y la CGT, algo que tratamos en el interior de la presente sección.

El por qué una afirmación tan aventurada remite a la importancia que tiene el papel de los trabajadores como sujeto social y político en las condiciones del desarrollo capitalista, especialmente en la Argentina, país con temprano desarrollo sindical y político de los trabajadores. La fuerza social y política de los trabajadores en la Argentina fue destacada en los albores del capitalismo local, con camadas de tradición socialista, anarquista y comunista, para luego ser hegemonizado desde 1945 con el peronismo y el papel asignado por Perón y sus gobiernos a la organización y demandas de los trabajadores. Con el Golpe genocida de 1976, el principal afectado fue el movimiento obrero –con mayoría de desaparecidos, torturados y asesinados– infligiendo un duro revés a la clase obrera, su organización y capacidad de intervención como clase en el proceso político cotidiano. El paro del 20/11/12 constituye uno de esos momentos de recuperación de la capacidad de acción e iniciativa política de los trabajadores y por ello merece destacarse.

Los artículos recogidos en esta sección tratan desde diversos ángulos la situación de los trabajadores, sus luchas, demandas y perspectivas, al tiempo que nutren un debate importante por el nuevo modelo sindical que requiere la circunstancia de la nueva modalidad de explotación de la fuerza de trabajo.

Esperamos que los textos contribuyan a mejor interpretar la situación actual de los trabajadores y sus perspectivas de lucha.



FORO SOCIAL MUNDIAL 2012 (PORTO ALEGRE)¹

DECLARACIONES DEL AUTOR EN EL MARCO DEL FORO SOCIAL MUNDIAL
2012 EN BRASIL, INAUGURADO FORMALMENTE POR LA PRESIDENTA
DILMA ROUSSEFF.

Porto Alegre - Julio Gambina dijo que el desafío de los movimientos populares es determinar la sociedad en la que vivir, ya que «no se puede seguir depredando los recursos naturales».

Una multitudinaria marcha marcó el inicio en la ciudad brasileña de Porto Alegre del Foro Social Mundial 2012, que será inaugurado formalmente el jueves por la presidenta Dilma Rousseff. El foro tiene como tema «Crisis capitalista, justicia social y ambiental», y prepara la Cumbre de los Pueblos, que se celebrará paralelamente a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río+20), a realizarse en junio en Río de Janeiro.

El economista Julio Gambina, quien participó de todas cumbres que se realizaron en Brasil, sostuvo que el espacio de debate atraviesa una etapa de fuerte discusión debido a que nació como «una gran iniciativa política de los movimientos populares en enero de 2001, donde recogía toda la resistencia de las décadas del ochenta y noventa».

Explicó por Radio Provincia que «esos movimientos de resistencia se constituyeron en gobiernos en muchos países de América Latina y, cuando se confunden con el Estado, pasan de una política de movilización social a defender las políticas públicas».

Ejemplificó que en la Argentina hay muchas organizaciones populares que quedaron «atrapadas» en la aprobación de la Ley Antiterrorista,

¹ Programa radial Mate Amargo (AM 1270), entrevista emitida el miércoles 25 de enero de 2012.

ya que «todos los legisladores del gobierno disciplinadamente votaron la ley, lo que genera mucho ruido en los movimientos sociales», ya que se trata de una ley represiva que «se sancionó condicionada por el GAFI, un organismo de segunda que no tiene incidencias a nivel mundial». Sin embargo, Gambina señaló que «si Argentina quiere ser parte de los que toman decisiones de la liberalización de la economía a nivel mundial, tiene que cumplir con algunas normas y reglas».

El economista repudió que la Argentina y Brasil participen del G20, debido a que «se trata del ámbito de promoción del neoliberalismo a escala mundial, donde se alientan las políticas de ajuste ante la crisis europea». En ese marco, pidió «imaginarse la reacción de los movimientos sociales que han empujado la presidencia de Lula Da Silva al ver cómo sus gobiernos coparticipan de las reuniones que definen los ajustes mundiales». Y agregó que «Brasil ha dado préstamos prácticamente sin intereses al FMI a cambio de mayores cuotas de poder dentro del organismo».

Asimismo, recordó que en diciembre de 2007 se anunció que en tres meses se crearía el Banco del Sur pero resaltó que «todavía no lo tenemos por falta de decisión de la Argentina y Brasil». Gambina precisó que el nuevo Foro Social Mundial se realiza en este contexto y que el desafío de los movimientos populares ante la crisis del capitalismo mundial y la crisis de alternativas es determinar la nueva sociedad en la que vivir, por cuanto «no puede seguir transitando estas sociedades depredadoras de los recursos naturales, donde hay un déficit de 64 millones de puestos de trabajo».

LOS DEBATES EN LOS FOROS MUNDIALES

Es un hecho desde 2001 la confrontación anual de dos lógicas de análisis de la realidad económica mundial. Hace más de 10 años que surgió el Foro Social Mundial (FSM), en paralelo y en réplica al Foro Económico Mundial (FEM), surgido en 1971, hace cuarenta años. Uno expresa el debate de la élite mundial, con más del doble de guardias que lo custodian de la resistencia popular que rodea los cónclaves del poder. El otro, desde la autogestión, convoca a decenas de miles que desde la subalternidad debaten y construyen una búsqueda por organizar alternativas al orden vigente.

En ambos se procesan interrogantes, dudas y controversias. Unos por restablecer el orden capitalista y por ende la ganancia, el crecimiento y el consenso social de que otro mundo es imposible. Ese es el razonamiento que los lleva a discutir el capitalismo en el siglo XXI. En los otros, la búsqueda se empecina en darle carnadura y visibilidad a «otro» orden económico, social, político y cultural para transformar la realidad. Es una mirada desde los de abajo, sin edulcorarla, puesto que los debates apuntan a rumbos a veces contrapuestos, sin síntesis superadoras en la experiencia del decenio transcurrido.

Lo concreto es la continuidad por una década de un debate en contraposición, manifestando la existencia de sujetos en pugna y de proyectos en discusión en uno y otro de los Foros, dando cuenta de un tiempo de crisis que anima una agenda que puede construir nuestro futuro, en el sentido que propone el frío de Davos o en la calidez de Porto Alegre.

EL FORO DE DAVOS, FORO DEL PODER MUNDIAL

Las motivaciones del FEM aludían a la necesidad de los capitales más concentrados, en pleno despliegue de la crisis capitalista de esos años, manifestada como crisis monetaria, energética, ecológica; importante recesión, inflación, con reducción de las ganancias e importante poder de los trabajadores, con un difundido imaginario por el socialismo y el cambio social anticapitalista. A comienzos de los setenta hacía falta renovar el discurso del poder económico y contrarrestar la hegemonía del orden «keynesiano» emergente a la salida de la segunda posguerra y que fuera la fundamentación teórica de los treinta años gloriosos entre 1945 y 1975.

En 1971, en Davos (Suiza) se concentraron propietarios, ejecutivos, gerentes, jefes de Estado e intelectuales orgánicos del poder para discutir el programa necesario para reinstalar el orden económico y social bajo el paradigma del libre comercio, que había sido soterrado por la bipolaridad de un desarrollo capitalista de Estado del Bienestar y el intento de organización socialista en el Este de Europa y otras latitudes del planeta (China, Cuba, Vietnam). Ese programa fue ensayado en Chile y en las dictaduras del terrorismo de Estado del Cono Sur americano, para instalarse en el Norte desarrollado con la restauración conservadora con Margaret Thatcher en 1979 y con Ronald Reagan en 1980, en Inglaterra y EE.UU. respectivamente.

Esa fue la plataforma de lanzamiento de la política neoliberal que una y otra vez fue discutida por cuarenta años en Davos y que sirvió de inspiración para políticas globales aplicadas por gobiernos nacionales y supervisados por organismos supranacionales, todos bajo el interés de los capitales transnacionales; todos los cuales se han constituido en sujetos históricos de este tiempo del capitalismo. El debate inicial sirvió para construir la realidad de las décadas transcurridas, y el resultado es el funcionamiento del capitalismo con mayor nivel de inequidad, de desigualdad, con fortunas inverosímiles que conviven con 1.000 millones de hambrientos.

La cuestión es el agotamiento del «modelo» definido en este trayecto de cuatro décadas, y la necesidad de redefinir el presente y el futuro para retomar la «normalidad» de la explotación capitalista. Es el desafío planteado en la versión 2012 del FEM. En ese sentido, Klaus Schwab –fundador del Foro de Davos– señaló que «No se pueden resolver los problemas con modelos superados», convocando a superar recetas que sirvieron para dismantelar el orden criticado a comienzos de los setenta y pensar con las

claves del capitalismo de esta época, que lo imaginan bajo la batuta de la «economía verde», una suerte de privatización de la naturaleza.

El primer interrogante que se les suscitó a los miles de dirigentes empresarios y representantes de gobiernos de 40 países remitió a si el capitalismo del siglo XXI le está fallando a la sociedad del siglo XXI, en clara alusión a la larga crisis iniciada en 2007 y que se prolonga sin final a la vista en las principales potencias del capitalismo mundial. La desazón de una recesión inacabada, de impactos sociales que se generalizan con sus respectivos conflictos de «indignados» por doquier, desde África a Europa, Israel o EE.UU., suma un mapa de rebelión que solo atinaba a expresarse en los noventa en Nuestramérica.

El lema en discusión por estas horas reza «La gran transformación. Dando forma a nuevos modelos», en el mismo momento donde los pronósticos de la ONU y los Organismos Internacionales son poco alentadores sobre el panorama económico de mediano plazo, es decir, más allá aún de 2012.

En la sesión inaugural la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, demandó por más Unión Europea, en lo que debe leerse mayor subordinación de los miembros al dictado del imperialismo alemán y sus empresas, con ajustes y desmantelamiento de los remanentes del Estado de Bienestar en el Viejo Continente.

Ya no se discuten los eufemismos de la «Cooperación para el desarrollo» que poblaban anteriores encuentros, como una dádiva de los ricos a los pobres. El problema se concentra en la «solución» de la crisis de los grandes de la economía mundial. A los más débiles se les propone el «ajuste» más crudo junto al recetario de apertura y liberalización. Ni hablar de las dimensiones alimentarias, energéticas o medioambientales de la crisis contemporánea.

Se trata de salvar empresas y bancos transnacionales en problemas. La insignia alemana preside las «soluciones» de época en la vieja Europa, intentando sostener una moneda, el euro, en disputa con el dólar, moneda de su rival en la dominación capitalista. Ni el euro logró emerger en la década de existencia como moneda global hegemónica, y el dólar sufre las consecuencias del debilitamiento estructural de la economía estadounidense y las experiencias de autonomía monetaria en el comercio mundial que empuja China y otros «emergentes». Son variados los países del mundo que suscriben acuerdos *swap* con China para intercambiar y garantizarse mutuamente con monedas locales (Argentina y otros países de la región latinoamericana, de Asia y de África lo vienen realizando).

EL FORO POR EL «OTRO» MUNDO POSIBLE

No puede pensarse en la convocatoria de 2001 sin las resistencias populares de los años ochenta y noventa en Nuestramérica, contra el ajuste y las reformas estructurales, de privatización, descentralización, precarización del empleo, sobreexplotación y liberalización de la economía.

Por eso la cita fue en Porto Alegre, gobernada entonces por el Partido de los Trabajadores, entonces un Partido de Izquierda, de bandera roja y con un líder obrero metalúrgico, que reconocía como principal aporte la construcción de un «presupuesto participativo» que expresaba las banderas de la democracia participativa enarbolada por la izquierda luego de la caída del Este de Europa y la pérdida del imaginario socialista en el movimiento popular mundial.

El encuentro de variadas expresiones de la institucionalidad popular construida en la resistencia animó las discusiones en el FSM y habilitó el camino de la transformación de movimientos populares en lucha contra el neoliberalismo y el capitalismo en soportes de nuevos gobiernos que discutían la argumentación hegemónica de las políticas de los años previos. El FSM es producto de la lucha que contribuyó a modificar el mapa político de la región en la primera década del siglo XXI. Cada uno de los gobiernos de la región latinoamericana que generaron y aún generan expectativas en los pueblos del mundo tiene sustento de origen en aquella resistencia y en el ideario crítico, con matices, sustentado en la historia del FSM. Uno de los temas en debate en la presente versión y aún en las últimas se asocia a la cooptación de varios de los movimientos, o de sus lideranzas por los gobiernos, en una fusión entre movimientos y gobiernos, o movimientos y Estados.

El debate se convoca bajo el lema de «Crisis capitalista, justicia social y ambiental», preparando las condiciones de movilización y debate para la Cumbre +20 a realizarse en Río de Janeiro en junio próximo, a veinte años de la Cumbre de la Tierra, donde se hizo evidente la dimensión ecológica de una crisis que se profundiza en el presente. Es que el modelo productivo asentado en la depredación de los bienes comunes se potenció en nuestra región, haciendo ampliamente funcional a Nuestramérica a la demanda de petróleo, gas, cobre, litio, tierra, agua, de las principales potencias económicas del capitalismo mundial. Convengamos que uno de los límites del FSM transcurre entre quienes imaginan la posibilidad de cambios sin modificar el sistema capitalista, que los lleva a propuestas dentro de lo posible, de lo permitido, sin apuntar a discutir a fondo el orden capitalista, posición sostenida por aquellos que animan al interior del FSM la asamblea de movimientos y que empujan un cronograma de acciones que

pueda pasar de la defensiva a la ofensiva por otro mundo posible. Entre otras iniciativas se piensa en una campaña continental contra la «economía verde», un nuevo ALCA que requiere ser contrarrestado.

La cita de 2012 reúne experiencias de los trabajadores, campesinos, pueblos originarios, mujeres, estudiantes; de la economía solidaria, cooperativa, autogestionaria; como iniciativas de educación popular, resistencias contra el negocio inmobiliario y por el hábitat popular, por el empleo. Siendo un clásico, la inauguración se realizó con una gran movilización por las calles de la ciudad, en lo que anticipa la gran manifestación en la cumbre popular sobre los problemas de la tierra en la ciudad carioca a mediados de año.

El escenario está montado. Ya no existe el pensamiento único imperante en décadas pasadas. Sin síntesis, el debate se reanima entre visiones de avanzar por el camino de lo posible o ir más allá, extendiendo la mirada del otro mundo posible por la senda de la alternativa al capitalismo en crisis. Lo novedoso son los indignados, paso inicial de una protesta que se inscribe en la búsqueda de construcción de alternativas. En ese rumbo se construyen sujetos que proyectan rumbos de transformaciones sociales y fuerzas político-sociales que asuman la iniciativa necesaria del cambio social por otro mundo posible.

Buenos Aires, 27 de enero de 2012.



DECLARACIÓN DE LA ASAMBLEA DE MOVIMIENTOS SOCIALES 2012 (PORTO ALEGRE, BRASIL)

Nosotros, pueblos de todos los continentes, reunidos en la Asamblea de movimientos sociales durante el Foro Social temático Crisis capitalista, Justicia social y ambiental, luchamos contra las causas de una crisis sistémica que se expresa en una crisis económica, financiera, política, alimentaria y ambiental, colocando en riesgo la propia sobrevivencia de la humanidad. La descolonización de los pueblos oprimidos y el enfrentamiento al imperialismo es el principal desafío de los movimientos sociales de todo el mundo.

En este espacio nos reunimos desde nuestra diversidad, para construir juntos agendas y acciones comunes contra el capitalismo, el patriarcado, el racismo y todo tipo de discriminación y explotación. Por eso, reafirmamos nuestros ejes comunes de lucha, adoptados en nuestra Asamblea en Dakar, en 2011.

- Lucha contra las transnacionales.
- Lucha por la justicia climática y por la soberanía alimentaria.
- Lucha por la eliminación de la violencia hacia la mujer.
- Lucha por la paz, contra la guerra, el colonialismo, las ocupaciones y la militarización de nuestros territorios.

Los pueblos de todo el mundo sufren hoy los efectos del agravamiento de una profunda crisis del capitalismo, en la cual sus agentes (bancos, transnacionales, conglomerados mediáticos, instituciones internacionales y gobiernos a su servicio) buscan potenciar sus beneficios a costa de una política intervencionista y neocolonialista. Guerras, ocupaciones

militares, tratados neoliberales de libre comercio y «medidas de austeridad» expresadas en paquetes económicos que privatizan bienes, rebajan salarios, reducen derechos, multiplican el desempleo y explotan recursos naturales. Estas políticas afectan con intensidad a los países más ricos del Norte, aumentan las migraciones, los desplazamientos forzados, los desalojos, el endeudamiento y las desigualdades sociales.

La lógica excluyente de este modelo sirve solamente para enriquecer a una pequeña élite, tanto en los países del Norte como en los del Sur, en detrimento de la gran mayoría de la población. La defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, la justicia económica, ambiental y de género, son la llave para el enfrentamiento y la superación de la crisis, fortaleciendo el protagonismo de un Estado libre de las corporaciones y al servicio de los pueblos.

El calentamiento global es el resultado del sistema capitalista de producción, distribución y consumo. Las transnacionales, las instituciones financieras, los gobiernos y organismos internacionales a su servicio no quieren reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora intentan imponernos la «economía verde» como solución para la crisis ambiental y alimentaria, lo que además de agravar el problema, resulta en la mercantilización, privatización y «financiarización» de la vida. Rechazamos todas las falsas soluciones para esas crisis, como los agrocombustibles transgénicos, la geoingeniería y los mercados de carbono, que son nuevos disfraces del sistema.

La realización de Río+20, en el mes de junio en Río de Janeiro, pasados veinte años de la Eco '92, refuerza la centralidad de la lucha por justicia ambiental en oposición al modelo de desarrollo capitalista. El intento de *enverdecimiento* del capitalismo, acompañado por la imposición de nuevos instrumentos de la «economía verde», es un alerta para que los movimientos sociales reforcemos la resistencia y asumamos el protagonismo en la construcción de verdaderas alternativas a la crisis.

Denunciamos la violencia contra la mujer ejercida regularmente como herramienta de control de sus vidas y sus cuerpos. Además, el aumento de la explotación de su trabajo para atenuar los impactos de la crisis y mantener el margen de ganancia constante de las empresas. Luchamos contra el tráfico de mujeres y de niños, las relaciones forzadas y el prejuicio racial. Defendemos la diversidad sexual, el derecho a la autodeterminación de género y luchamos contra la homofobia y la violencia sexista.

Las potencias imperialistas utilizan bases militares extranjeras para fomentar conflictos, controlar y saquear los recursos naturales y promover

dictaduras en varios países. Denunciamos el falso discurso en defensa de los derechos humanos, que muchas veces justifica las ocupaciones militares. Nos manifestamos contra la permanente violación de los derechos humanos y democráticos en Honduras, especialmente en el Bajo Aguán, el asesinato de sindicalistas y luchadores sociales en Colombia y el criminal bloqueo a Cuba que completa cincuenta años. Luchamos por la liberación de los cinco cubanos presos ilegalmente en los Estados Unidos, la ocupación ilegal de las islas Malvinas por Inglaterra, las torturas y las ocupaciones militares promovidas por los Estados Unidos y la OTAN en Libia y Afganistán. Denunciamos el proceso de neocolonización y militarización que vive el continente africano y la presencia de la Africom. Nuestra lucha es también por la eliminación de todas las armas nucleares y contra la OTAN.

Expresamos nuestra solidaridad con las luchas de los pueblos del mundo contra la lógica depredadora y neocolonial de las industrias extractivas y mineras transnacionales, en particular con la lucha del pueblo de Famatina en Argentina, y denunciamos la criminalización de los movimientos sociales.

El capitalismo destruyó la vida de las personas. Por eso, cada día nacen múltiples luchas por justicia social para eliminar los efectos dejados por el colonialismo y para que todos y todas tengamos una calidad de vida digna. Cada una de estas luchas implica una batalla de ideas que hace imprescindible acciones por la democratización de los medios de comunicación, controlados hoy por grandes conglomerados, y contra el control privado de la propiedad intelectual. Al mismo tiempo exige el desarrollo de una comunicación independiente que acompañe estratégicamente nuestros procesos.

Comprometidos con nuestras luchas históricas, defendemos el trabajo decente y la reforma agraria como único camino para impulsar la economía familiar, campesina e indígena, y un paso central para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia ambiental. Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha por la reforma urbana como instrumento fundamental en la construcción de ciudades justas y con espacios participativos y democráticos. Defendemos la construcción de otra integración, fundamentada en la lógica de la solidaridad, y el fortalecimiento de procesos como la UNASUR y la ALBA.

La lucha por el fortalecimiento de la educación, ciencia y tecnologías públicas al servicio de los pueblos, así como la defensa de los saberes tradicionales, se vuelven urgentes una vez que persiste su mercantilización y privatización. Manifestamos nuestra solidaridad y apoyo a los estudian-

tes chilenos, colombianos, portorriqueños y de todo el mundo, que continúan en marcha en la defensa de estos bienes comunes.

Afirmamos que los pueblos no deben continuar pagando por esta crisis y que no hay salida dentro del sistema capitalista. Se encuentran en la agenda grandes desafíos que exigen que articulemos nuestras luchas y que movilizemos masivamente.

Inspirados en la historia de nuestras luchas y en la fuerza renovadora de movimientos como la Primavera Árabe, *Ocuppy Wall Street*, los indignados y la lucha de los estudiantes chilenos, la Asamblea de los Movimientos Sociales convoca a las fuerzas y actores populares de todos los países a desarrollar acciones de movilización coordinadas a nivel mundial. Debemos contribuir a la emancipación y autodeterminación de nuestros pueblos, reforzando la lucha contra el capitalismo.

Convocamos a todas y todos a fortalecer el Encuentro internacional de derechos humanos en Solidaridad con Honduras y a construir el Foro social Palestina Libre, reforzando el Movimiento global de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel y su política de *apartheid* contra el pueblo palestino.

Tomemos las calles a partir del día 5 de junio en una gran jornada de movilización global contra el capitalismo. Convocamos a impulsar la Cumbre de los Pueblos por justicia social y ambiental, contra la mercantilización de la vida y en defensa de los bienes comunes, frente a la Río+20. ¡Si el presente es de lucha el futuro es nuestro!

Porto Alegre, 28 de enero de 2012.

Asamblea de los Movimientos Sociales.

¿FIN DEL CONSENSO PRIVATIZADOR?

Existe la sensación que llegó el final del consenso social sobre las privatizaciones. La gota que rebalsó el vaso ocurrió la semana pasada con la muerte evitable de 51 personas y más de 700 heridos, con el desastre acontecido en la estación Once del recorrido del tren Sarmiento concesionado a TBA.

Aludimos al fin de un consenso privatizador generado en las últimas cuatro décadas, primero como campaña ideológica en tiempos dictatoriales, en los setenta y ochenta, y acción deliberada (técnica, operativa y económica) para deteriorar a las empresas públicas. Luego de algunos intentos frustrados, la privatización se materializó y generalizó en los noventa, para constituir desde entonces un fenómeno estructural del orden económico y social contemporáneo en la Argentina.

Ya pasaron veinte años desde su instrumentación iniciadora, donde la «iniciativa privada» todo lo resolvería. Fue una política consensuada en origen e ideológicamente trabajada durante años, claro que también con violencia explícita. Recordemos la frase «ramal que para, ramal que cierra» pronunciada desde el menemismo.

La agresión violenta a los trabajadores ferroviarios que resistieron la privatización del tren, muy bien relatada y documentada en «Ferrocidio» (Juan Carlos Cena), vuelve sobre los usuarios y trabajadores del tren con violencia y muerte. Es la agresión de la ofensiva del capital de ayer y de hoy por la subsistencia de la lógica de la ganancia maximizada.

LAS PRIVATIZADAS CUESTIONADAS. ¿QUÉ ESTATIZACIÓN Y QUÉ ESTADO?

Hoy son evidentes las falencias en el abastecimiento de combustibles y energía, y más aún en el servicio de transporte ferroviario, sin hablar del ruinoso estado que dejó la privatización a la línea aérea. Ya no hay encanto social con la privatización.

El lema había sido la ineficiencia del Estado para administrar las empresas públicas. Qué curioso, ahora, al final del recorrido de dos décadas de privatizaciones, nos encontremos con empresas crecientemente financiadas con fondos públicos y gestionadas privadamente, incluyendo el uso especulativo de los recursos asignados por el Estado para el funcionamiento operativo de las empresas.

Las privatizaciones que levantaron la bandera de la eficiencia empresarial de los «privados» solo funcionan con el sostén del Estado. Solamente en ferrocarriles se gastan 10 millones de pesos diarios en subsidios.

Los subsidios estatales dan cuenta de la posibilidad financiera del Estado para hacerse cargo de las empresas de servicios públicos, claro que ello supone discutir el conjunto de la asignación presupuestaria. No se trata de estatizar y mantener el desastre ferroviario actual. La estatización continuadora perpetuaría la ineficiencia y el mal servicio reinante.

¿El actual destino del gasto público resulta necesario para un funcionamiento alternativo del Estado? Solo a modo de ejemplo veamos que entre 2003 y 2011 el gasto total en remuneraciones del sector público nacional se redujo del 16,1% al 11,3%, mientras que las transferencias al sector privado pasaron del 3% en 2007 al 9,5% en 2011. Claro que no solo se trata de cantidades, de montos, sino también de discutir las funciones necesarias a cubrir por el personal estatal, junto a la participación de los usuarios de los servicios públicos y de los ciudadanos en la cuestión estatal.

En el mismo sentido debemos interrogarnos sobre las fuentes de ingreso del Estado nacional. Sigue siendo el IVA el principal tributo en el país, y es sabido su impacto regresivo entre los sectores de menores ingresos. En segundo lugar aparecen los ingresos tributarios por el Impuesto a las Ganancias, pero una parte de esos recursos provienen de trabajadores que reciben sueldo y no ganancias, mientras se eximen los excedentes generados en el mercado de capitales o en el financiero. Ni hablar de la evasión y elusión impositiva pese a la legislación vigente, sea la penal tributaria, o contra el lavado, que explica en el argumento oficial la «necesidad» de la represiva Ley antiterrorista.

Lo que pretendemos decir es que no alcanza con terminar con las privatizaciones ferroviarias o petroleras, entre otras, si no que se debe reformar el Estado, su régimen tributario, financiero y especialmente discutir su papel en la organización de un modelo productivo que modifique el beneficiario de su accionar, atendiendo a las insatisfechas necesidades sociales.

El cambio de opinión que se percibe en la sociedad, que mencionamos como fin del consenso a las privatizaciones se asocia a la discusión con las petroleras, especialmente Repsol, empresa de proyección regional y mundial merced a la entrega de la estatal Yacimientos Petroleros Fiscales hace veinte años. España no es potencia petrolera, pero sobre la base de YPF se proyectó en la región latinoamericana, caribeña y en el mundo como una de las grandes en el negocio del oro negro. La respuesta gubernamental es por ahora amenazante, sea por declaraciones del Poder Ejecutivo nacional, o de la organización que nuclea a las provincias productoras de hidrocarburos. La sensación es que ya no se espera una respuesta mágica desde la iniciativa privada, la que solo privilegia la lógica de la ganancia.

TERMINAR CON LA INSTITUCIONALIDAD NEOLIBERAL

La demanda social está para más y demanda la salida de un condicionante estructural que remite a las reformas neoliberales, de apertura económica y liberalización; de desregulación y privatización; de precarización laboral, sobreexplotación y marginalización vía indigencia y empobrecimiento estructural de millones de personas.

Existen expectativas de que se asuma una política pública en ese sentido, aunque la garantía solo está en la masividad del clamor por abandonar el sentido común privatista. Son abundantes los ejemplos en la historia que indican que la conflictividad extendida de la sociedad es la que define cambios estructurales de funcionamiento social. Es la experiencia reciente de 2001 respecto del régimen de convertibilidad. Fue la movilización social la que determinó el fin de la «estabilidad monetaria» erigida como valor supremo entre la élite política, claro que con aceitados consensos socialmente manipulados.

Apuntamos al petróleo y la energía, a los ferrocarriles y al transporte en general, pero también a la recuperación de la soberanía financiera desmantelando el aparato jurídico y de política financiera legado por la dictadura. Claro que también supone bregar por la soberanía alimentaria, algo imposible sin modificar el modelo productivo sojero, concentrador

y de subordinación a la dominación de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología. La soja y la megaminería son legados del auge neoliberal de los noventa.

Se trata de recuperar soberanía –energética, financiera, alimentaria– en toda la línea. Ese será el mejor homenaje a quienes murieron por la desidia empresaria y la complicidad de los organismos de control (por lo menos de aquellos que no consideraron informes críticos) para asegurar las privatizaciones para la ganancia. Retomar una discusión sobre el papel del Estado en tiempos de crisis capitalista aparece como el desafío que pueda superar las consecuencias del desastre evitable en la estación Once.

Buenos Aires, 28 de febrero de 2012.

APERTURA DE SESIONES EN EL PARLAMENTO

Comenzó marzo con la 130ª sesión del Congreso en Argentina y como ocurre siempre se escuchó el mensaje presidencial. El primero de este segundo mandato y tercero de la era kirchnerista. No es menor el dato de tercer turno gubernamental continuo, nunca ocurrido en la historia constitucional del país. El discurso presidencial asumió como propio el desarrollo del accionar de gobierno desde 2003.

Se trató de un discurso de balance de la gestión, legitimada en la elección de octubre pasado y sustentado en tasas de crecimiento económico en todo el periodo salvo 2009, año de la recesión de la economía mundial. No se discute el sentido del crecimiento y se apuesta a la continuidad de las líneas estratégicas, denominadas «modelo».

Hubo compromiso para «asegurar el abastecimiento de combustible» (los entrecomillados que siguen surgen de la versión del discurso en la página de la Presidencia de la Nación)¹, y llamados de atención sobre la cuestión energética, aunque sin anuncios concretos de modificación estructural: nacionalización o socialización de YPF, por ejemplo. Ese hecho generó la suba de la cotización de Repsol en mercados bursátiles del exterior. Los inversores globales festejaron la continuidad del estatus jurídico de la empresa número uno de la Argentina. Es verdad que había expectativas referidas a la reestatización, y que muchos sostenemos la necesidad de la socialización, lo que supone la participación del Estado en sus distintos niveles –nacional, provincial y municipal– pero también de usuarios y trabajadores.

1 <www.presidencia.gov.ar/informacion/actividad-oficial/25723-la-presidenta-inauguro-el-130d-periodo-de-sesiones-ordinarias-del-congreso-de-la-nacion>.

También se realizaron críticas a los trabajadores docentes, acusados de quedarse en la reivindicación de la «carpa blanca». Sus dichos fueron cuestionados por propios adherentes del movimiento sindical, incluso manifestando desde la titular de CTERA que el ministro de educación mal informa a la titular del Poder Ejecutivo sobre la actividad laboral de los maestros.

Sobre los ferrocarriles había expectativa de anuncios, pero junto a las condolencias se reiteró la conocida espera del accionar gubernamental hasta el pronunciamiento de la Justicia. Llama la atención la comparación de los pagos por deuda pública asociada a la salida de la crisis de 2001 con la insuficiencia de fondos para el ferrocarril. En todo caso pone en evidencia que los pagos de deuda pública restringen la posibilidad de usos alternativos.

La megaminería a cielo abierto fue enfáticamente defendida desde la lógica similar que encaran otros países mineros en el ámbito mundial, y señaló que «Debemos exigir que las empresas dejen parte de sus inversiones en la Argentina».

Lo que sí se anunció fue el fin de la Convertibilidad y la reforma a la Carta Orgánica del BCRA. Puede pensarse así en el fin del vínculo de la moneda local circulante y el dólar, con lo que se termina la restricción de las Reservas de libre disponibilidad, que expresaban la fracción excedente de las divisas necesarias para cubrir la circulación monetaria de pesos. Sorprendió el rechazo a modificar la legislación financiera, especialmente cuando existen legisladores afines que impulsan reformas a la Ley de Entidades Financieras vigente desde 1977, y que fuera principal instrumento de subordinación y dependencia para la concentración y extranjerización de la banca, promovida y destacada por Martínez de Hoz y la dictadura genocida. Al respecto, la presidenta se pronunció explícitamente en contra al señalar: «No creo que sea necesario. Lo que hace falta es reformar la carta orgánica del Banco Central, que es el que regula a las entidades financieras. Porque si no se hace mucho ruido y pocas nueces». Confirmó que en el proyecto remitido a tratamiento «se mantiene la independencia de cualquier orden que pueda provenir del poder central», no afectando por lo tanto la autonomía, que era uno de los ejes sostenidos por la ex diputada Marcó del Pont, ahora presidenta en ejercicio del BCRA.

En fin, un discurso con reiteración de datos de evolución de la economía, los que sustentaron el amplio triunfo electoral de octubre de 2011, y ausencias notorias sobre el necesario desarme de la institucionalidad neoliberal sustentada en años previos. La incógnita en términos políticos apunta a considerar si es suficiente para el mantenimiento del consenso la

reiteración de datos del crecimiento manteniendo un modelo productivo erigido sobre la base de la dominación extranjera en los principales rubros que explican la evolución de la economía en la Argentina: la producción y exportación agraria y minera, junto a la industria «vanguardizada» por las automotrices, todo lo cual se sostiene en un clima social de época que se aleja del consenso privatista.

Buenos Aires, 7 de marzo de 2012.



SOBRE EL 1º DE MAYO DE 2012

Cada celebración del Día Internacional de los Trabajadores nos da la oportunidad de discutir sobre el papel de los proletarios en la sociedad contemporánea: el capitalismo en crisis. No resulta una novedad si destacamos en la coyuntura la ofensiva del capital sobre el trabajo en nuestro tiempo, el que consignamos en las últimas cuatro décadas. Hace tiempo se inició el desarme histórico de las conquistas logradas en memorables luchas del movimiento obrero. Ese desarme histórico se inició en Sudamérica, con el golpe de Estado en Chile y sus émulos en los países vecinos. Fue una iniciativa de desorganización de los trabajadores para facilitar el camino de transformación hacia la iniciativa privada y el neoliberalismo.

El trayecto iniciado en Santiago y continuado en el Cono Sur de América se proyectó a Londres y a Washington para recalcar en el primer mundo a caballo del paso de las décadas del setenta a la del ochenta, y desde entonces generalizarse en el mundo hasta la presente crisis mundial del capitalismo.

En este trayecto son cuantiosas las pérdidas de derechos de los trabajadores en todo el mundo, especialmente de sus ingresos, agudizando el fenómeno de la explotación, recreando la esencia del funcionamiento capitalista. La relación salarial capitalista se extiende en todo el mundo, universalizando el régimen de explotación. El capital, en la era de la transnacionalización subordina a la población trabajadora del mundo a vender, en condiciones cada vez más miserable, su fuerza de trabajo. Es cierto que en esta década, en la región latinoamericana se verifican mejorías relativas en los indicadores sociales, sea por salario o empleo, aunque sin recuperar la media lograda hacia los años setenta.

La mejora relativa de este tiempo es contra el peor momento de la crisis emergente en el cambio del siglo XX al XXI. La CEPAL informa que a fines de 2010 existen 177 millones de pobres en América Latina y el Caribe (el 30,4% de la población), de los cuales 70 millones son indigentes (el 12,8% del total de habitantes).¹ La cifra era mayor en 2002, con 225 millones de pobres (43,9% de la población) y 99 millones de indigentes (19,3% de los habitantes).

Es cierto que hubo una merma de la pobreza en la región latinoamericana derivada del gran crecimiento desde 2003, pero sobre la base del mantenimiento de una importante brecha entre los sectores de mayores ingresos y los sectores sociales empobrecidos. Además, ese crecimiento generó deformaciones en la estructura productiva y ocupacional, que señala la titular de CEPAL Alicia Bárcena al destacar que «...estos logros están siendo amenazados por las enormes brechas que presenta la estructura productiva de la región, y por los mercados laborales que generan empleos de baja productividad, sin protección social».

La ofensiva del capital sobre el trabajo es un fenómeno estructural que lleva cuatro décadas y que empieza a tener límites en la múltiples indignaciones construidas en la década, sean los movimientos de piqueteros, fábricas recuperadas y trabajadores en búsqueda de nueva organicidad (CTA) hacia la crisis de 2001; el movimiento indígena en la zona andina; los estudiantes chilenos y colombianos en el último año y una multiplicidad de protestas que definen en el ciclo de crisis un oponente al proyecto liberalizador de las clases dominantes.

LOS TRABAJADORES EN LA ARGENTINA

Hablar de los trabajadores en la Argentina remite a un universo de 17 millones de personas que componen la población económicamente activa (PEA), o en edad de trabajar, entre los que se cuentan, según el Indec, 1.216.000 desocupados (7%) y unos 15.762.000 (93%) ocupados.

La PEA incluye a los trabajadores y a los patrones, y excluye a los estudiantes y las amas de casa, lo cual constituye una limitación, pues existen mujeres desocupadas que reproducen la conducta impuesta de las tareas del hogar disminuyendo el impacto del desempleo. Algo similar ocurre con los estudiantes, cuya situación disimula el carácter de desempleado o posterga el ingreso de los jóvenes al mercado de trabajo, induciendo una lectura inadecuada de los niveles reales de desempleo.

1 Informe de la CEPAL sobre la evolución de la pobreza en América Latina.

En el cuadro puede verse que según sea el empleador, existen 2.649.000 trabajadores del sector público (nacional, provincial y municipal) y casi 13 millones en el sector privado. Los trabajadores asalariados son 9.243.000; entre los cuales, se destacan 5.257.000 (57%) trabajadores registrados y 2.866.000 (31%) no registrados.

SITUACIÓN DE LA PEA EN ARGENTINA (2011)		
PEA	16.978.000	100%
Desocupados	1.216.000	7%
Ocupados	15.762.000	93%
Planes de empleo	131.000	1%
Estatales	2.649.000	17%
Privados	12.983.000	83%
Patrón y trabajadores familiares sin remuneración	861.000	7%
Trabajadores por cuenta propia	2.857.000	22%
Asalariados	9.243.000	71%
Registrados	5.257.000	57%
No registrados	2.866.000	31%
Servicio doméstico	1.120.000	12%

En los datos mencionados sobresale el desempleo (7%) y los trabajadores no registrados (31%), porque hay que retroceder mucho en la historia para encontrar esos registros de desempleo y precariedad.

En los setenta el desempleo oscila entre el 3 y el 5%; en los ochenta entre 4 y 8%; y en los noventa entre el 7 y el 11% en la primera mitad, y luego pasa a los picos del 18% en 1995 y 21,5% en 2002.

El saldo, luego de cuatro décadas de ofensiva del capital constituye una brutal transferencia de recursos desde los salarios a las ganancias, ya que la distribución de la renta muestra que recién en 2011 la participación del salario alcanza los valores de 1999, previos a la gran pérdida de ingresos que supuso para los trabajadores los últimos años de la convertibilidad, durante la recesión entre 1998 y 2002, y el proceso de devaluación de 2002, agravado con la emergencia de la inflación desde 2006.

El balance de la última década (2002-2011) incluye para los trabajadores la contradicción de la expansión del empleo a tasas no conocidas en la historia económica de la Argentina, pero con salarios bajos y precariedad laboral, que en contrapartida significó asegurar grandes ganancias

derivadas de la reactivación de la economía Argentina. La mejora salarial ocurrida en la Argentina se opera desde 2002, pero aún no alcanza los valores relativos de 2001, y bastante más lejos del mejor momento previo a la recesión entre 1998 y 2002. Si la base de cálculo del Indec remite a valores de 1993, el índice salarial marca 88,6 para 1994, y baja hasta 77,4 en 2001, siendo de 72,88 en 2011.²

Más allá de contar trabajadores y sus niveles de ingreso o situación laboral, conviene considerar las condiciones de su organicidad. La ofensiva contra los trabajadores supuso su desorganización social, sindical y política. El ataque contra los trabajadores no fue solo en la represión, o en la expropiación del ingreso y en la mayor explotación, sino en deterioro de su capacidad de respuesta sindical, social y política. El resultado es la pérdida en términos de democracia económica, política y social. Recuperar la capacidad de organización de los trabajadores es una cuestión democrática, necesaria e imprescindible para pensar en un pasaje de la larga resistencia contra la ofensiva del capital a una contraofensiva de los trabajadores. La recuperación de la economía recreó las condiciones de la negociación salarial, no así de las condiciones de trabajo, pero solo para el tercio de trabajadores sindicalizados.

EL MODELO SINDICAL EN DISCUSIÓN

Resulta interesante comprobar que en la última década el movimiento de trabajadores en la Argentina contiene colectivos sindicalizados y otros en similar cantidad agrupados en organizaciones sectoriales o territoriales, dando cuenta de un fenómeno global de extensión de la masa de los trabajadores por fuera de la relación laboral y por ende de la sindicalización. Hay que destacar que en los noventa surgió en la Argentina la CTA, para intentar expresar ese fenómeno y constituir un nuevo modelo sindical, superador de la contención corporativa y burocrática persistente en el sindicalismo tradicional en las diferentes variantes de la CGT. La CTA contiene en su seno a trabajadores ocupados o no, sindicalizados o no, incluyendo afiliaciones individuales, solo por su carácter de trabajadores.

La ruptura de la CTA en 2010 desafía al nuevo modelo sindical a expresar la necesidad histórica y contemporánea del movimiento de trabajadores en la Argentina. Claro que es una situación que se procesa en la disputa mundial por hacer emerger una nueva representación política y social de los trabajadores, tal como se intenta en el Encuentro Sindical Nuestra

² Los datos son resultado de informes sindicales preparados por el equipo de investigación de empleo y salarios de la FISYP, coordinado por Germán Pinazo.

América, que se apresta a desarrollar su próximo cónclave anual entre el 21 y 23 de mayo próximo en la ciudad de México³. Es curioso cómo el viejo modelo reflota ante situaciones críticas. Días pasados y a propósito de la expropiación de YPF, la Central Sindical española, Comisiones Obreras (CC.OO.) se pronunció a favor de la empresa, de los accionistas y la «seguridad jurídica» de los inversores, todo en defensa corporativa de los trabajadores españoles de la transnacional REPSOL.⁴ Es una actitud «nacionalista» en tiempos de transnacionalización. Claro que sobraron los ejemplos en contra desde la misma España, tal el caso de la CIGA de Galicia⁵, o LAB del país Vasco⁶, por solo considerar pronunciamientos hispanos, los que asociaron a múltiples solidaridades de los pueblos de Europa y del mundo. No es distinto a la solidaridad del sindicalismo europeo (tradicional) con los bombardeos sobre Libia, o las solidaridades «humanitarias» ante variadas invasiones imperialistas sobre soberanos países. También existe sindicalismo alternativo en el continente europeo.

Es que la cuestión del modelo sindical define el presente y el futuro del movimiento de trabajadores. En este 1º de mayo conviene discutir el tema, ya que algunas organizaciones sindicales y sus dirigentes privilegian la defensa de sus intereses nacionales y sindicales por encima de los de la clase trabajadora, mayoritariamente no sindicalizados, informales y

3 Convocatoria al 5º Encuentro Sindical Nuestra América. En <<http://encuentrosindical.org/?p=4673>>, consultado el 1/5/12.

4 «La Confederación Sindical de CC.OO. y su federación sectorial FITEQA, tras conocer la decisión del gobierno argentino de nacionalizar YPF, ha expresado su desacuerdo y rechazo a una medida que causará graves perjuicios a los accionistas, sobre todo a los pequeños accionistas, a los trabajadores y a la economía española, en un momento especialmente delicado por la situación de crisis y recesión por la que atraviesa, y por la presión de los mercados financieros y especulativos. Comisiones Obreras advierte que la decisión puede debilitar la estructura industrial de la empresa YPF y deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de Repsol», en <www.ccoo.es/cscocoo/menu.do?Informacion:Noticias:342969>, consultada el 1/5/12.

5 «Non se trata só que sexa nacionalizada, a Dirección de Repsol debería pedir desculpas públicas e debería indemnizar áspoboacións afectadas polassúas políticas en América Latina.» Clodomiro Montero M. Secretario nacional da Federación da Banca, en: <<http://www.galizacig.com/avantar/opinion/18-4-2012/rajoy-repsol-duas-varas-de-medir>>, consultada el 1/5/12.

6 «A través de este comunicado, el sindicato LAB desea manifestar su solidaridad con el pueblo argentino y nuestro apoyo a su legítima aspiración por recuperar la soberanía sobre los recursos energéticos. Al mismo tiempo, denunciamos la intervención neocolonial del gobierno español que, empleando un tono belicista intolerable, pretende intimidar y coaccionar al gobierno y, sobre todo, al pueblo argentino para que desista de su razonable intento por recuperar el control de la petrolera YPF. Este proyecto, sin duda, le otorgaría al pueblo argentino mayores beneficios de los que actualmente obtiene de la presencia de esta multinacional». Comunicado de LAB Nazioarte, remitido al autor.

precarios en las condiciones en que se desarrolla el mercado de trabajo en la actualidad.

Defender los intereses de los trabajadores en 2012 supone recuperar la consigna del Manifiesto Comunista de 1848: ¡proletarios del mundo, uníos! Pero ahora, sin la restricción territorial que suponía un mundo «europeo» a mediados del siglo XIX. La transnacionalización de la economía impone la tendencia a la universalización de la relación de explotación y la subsunción real del trabajo en el capital, como señala Marx; una subordinación que involucra crecientemente a la naturaleza y a la sociedad en su conjunto.

Un problema de nuestro tiempo es la limitación «nacionalista» de las reivindicaciones de los trabajadores, que subordina los intereses de los trabajadores a la dominación «burguesa nacional» (crecientemente transnacionalizada).

Muy distinta resulta la confrontación con el imperialismo desde posiciones nacionales (populares), las que se asumen articuladamente con las luchas de los trabajadores en todos los territorios, sin mediaciones de los Estados capitalistas y sus compromisos con las clases dominantes locales y globales. El comentario es pertinente ante la situación de crisis mundial del capitalismo, ya que no hay nación que pueda quedar al margen de la crisis y de la ofensiva del capital para superarla.

Los trabajadores estamos desafiados a luchar nacionalmente contra las manifestaciones de la ofensiva del capital en cada uno de nuestros países, pero no se puede hacer al margen de una lucha global contra el régimen del capital.

Como en el Manifiesto, 164 años después se requiere elaborar un programa de transformaciones socioeconómicas que parta de la lucha por la reducción de la jornada de trabajo sin afectar ingresos y que renueve las condiciones de una acumulación de poder de los trabajadores para luchar contra la explotación del hombre por el hombre.

Del mismo modo que en los comienzos de su constitución como sujetos por la emancipación, hoy, los trabajadores debemos recuperar capacidad de organización y lucha para la transformación de la sociedad, en tanto problema social, económico, político y cultural. La emancipación de los trabajadores es la búsqueda de la liberación del conjunto de la sociedad. ¡Ante la crisis capitalista, alentemos las búsquedas de la unidad de los trabajadores por la emancipación social!

Buenos Aires, 1° de mayo de 2012

EL DEBATE ES POR LOS INGRESOS DE LOS TRABAJADORES

Son notorias las dilaciones en las negociaciones paritarias, las que ya debieran estar resueltas a esta altura del año. Es una situación convergente en la discusión por los ingresos populares, sean de trabajadores en situación regular o irregular.

Los primeros discuten en paritarias los ajustes salariales, y con cierta dificultad incorporan entre sus reivindicaciones otras cuestiones atinentes a la relación de trabajo, como las condiciones de la actividad y el medio ambiente laboral.

Los segundos intentan ajustar los «beneficios», o monto de los subsidios de los diferentes planes, ya que sus montos aparecen congelados ante una variación de los precios que se aleja de aquellos que mide y difunde el Indec.

INFLACIÓN

El aumento de los precios es uno de los temas en discusión. Recordemos que en el Indec se tienen en cuenta los precios regulados, que existen, aunque en cuentagotas. Resulta muy difícil para los compradores (consumidores) conseguir esos productos a precios regulados, puesto que éstos no suponen la producción en cantidades suficientes para el conjunto de la demanda de esas mercancías. La realidad es que en el mercado coexisten precios regulados y desregulados. El Indec asume la variación mensual sobre la base de los precios regulados y los compradores gastan en función de lo que consiguen, en general productos que teniendo precio regulado solo se consiguen a precio desregulado.

Pero además de los problemas inflacionarios, existen problemas estructurales que conviene considerar. Uno remite a la distribución del ingreso del conjunto de los trabajadores. El otro alude a la representación social y sindical de los trabajadores.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO Y REPRESENTACIÓN

La estadística con base en estudios del Observatorio de Derecho Social de la CTA y el Taller de Estudios Laborales TEL, según un texto de Horacio Meguirra¹, señala «que el salario real del conjunto de los trabajadores percibido en el mes de diciembre de 2011 era similar al salario percibido en el último trimestre de 2001 (entre ambos periodos se experimentó un incremento del 1,8%).

Continúa diciendo que en el mismo período «el PBI experimentó un incremento del 90,6 por ciento». Por otra parte se destaca que «El promedio de ingresos del conjunto de los ocupados, provenientes de su ocupación principal, al cuarto trimestre de 2011, ascendía a \$ 3.198 mensuales». Es un monto insuficiente para una canasta de consumo que oscila en torno de los 6.000 pesos.

Queda claro que el gran crecimiento económico de estos años sirvió para mejorar los indicadores sociales, medidos en términos de baja de la tasa de desempleo e informalidad, de pobreza; pero no así en la calidad de los ingresos de los trabajadores y los sectores populares que justifican sus ingresos por el gasto de los trabajadores. El crecimiento de la renta ha sido apropiado principalmente por los propietarios de medios de producción, y entre ellos los empresarios más concentrados.

El otro problema estructural mencionado alude a la representación social y sindical de los trabajadores, un tema recurrente en el movimiento de los trabajadores, ya que desde el propio nacimiento de las organizaciones sindicales, la fragmentación fue la norma.

Para no irnos muy lejos podemos recordar las divisiones de la CGT en los ochenta, la aparición de la CTA en los noventa con la esperanza y expectativa de incluir a los trabajadores informales, pasivos y activos; incluso la afiliación individual.

La realidad política de la Argentina mostró la reciente ruptura de la CTA y ahora nuevamente existen expectativas de fractura de la CGT. Este proceso de rupturas acontece por diferencias políticas en la estrategia de defensa de los intereses de los trabajadores.

1 Difundido por *Argenpress* el lunes 14 de mayo de 2012. Ver la nota completa en <www.argenpress.info/2012/05/argentina-paritarias-y-algo-mas.html>.

¿QUÉ MUEVE LA HISTORIA?

La presidenta aludió en estos días a que las mejoras económicas son más producto de la política económica, del «modelo» en curso, que de las diferentes acciones reivindicativas realizadas, sean paros, cortes o movilizaciones.

Es un gran tema para discusión sindical, social y política, incluso para discutir el origen del ciclo político de crecimiento argentino. El interrogante es si podría haberse instalado la política económica de fines de 2001 y comienzos de 2002 sin movilizaciones y reclamos de los trabajadores regulares e irregulares.

Sin el clima de movilización de 2001 es impensable el no pago de la deuda y la renegociación de 2005 y 2010; como tampoco parece posible haber salido de la convertibilidad sin el clima de protesta existente en enero de 2002.

Lo que pretendemos señalar es que la dinámica sociopolítica precede a las políticas de Estado, y claro, la política económica puede sostener esa demanda, o contrarrestarla.

La coyuntura económica y política, cuando se agrava la situación mundial con desaceleración de la economía, algo que también ocurre entre los países emergentes, sea Brasil o China, también impacta y preocupa en la Argentina, y por eso resulta de interés el seguimiento de la disputa estructural y coyuntural de la distribución funcional del ingreso, entre trabajadores y empresarios, y aquella que se opera entre trabajadores beneficiarios de planes sociales y previsionales y los recursos en baja gestionados por el Estado.

Es en la crisis capitalista que se presenta el riesgo de una nueva dinámica de la ofensiva del capital sobre el trabajo, y del Estado capitalista sobre los trabajadores. Pero es también la crisis la oportunidad para oponer la resistencia, y en especial la ofensiva de los trabajadores para oponer otro plan de organización económica de la sociedad.

Es evidente que existen tensiones en la Argentina de 2012 y que como siempre será la confrontación de los proyectos contrarios lo que determine el rumbo en el presente y en el futuro cercano. Como varias veces interrogamos, será interesante conocer quién vence a quien en la coyuntura por la disputa del ingreso. La respuesta está en la iniciativa política y los consensos que se obtengan en uno u otro de los polos de la contradicción.

Buenos Aires, 15 de mayo de 2012.



SALARIOS MÍNIMOS Y RELACIONES LABORALES

Acaba de realizarse el Vº Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) entre el 21 y 23 de mayo de 2012 en México D.F. En el cónclave participaron las principales centrales sindicales de la región, con más de 400 delegados mexicanos y otros 200 representando a 20 países. Los debates concluyeron en la Plaza del monumento a la Revolución, con 5.000 participantes que siguieron con atención reflexiones de representantes de varios países de la región y especialmente de Piedad Córdoba, la senadora del pueblo de Colombia, despojada institucionalmente y perseguida por el régimen político de ese país.

Uno de los temas más destacados y celebrados en las deliberaciones fue la promulgación de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) en Venezuela, por tratarse de un instrumento que marcha a contramano de las regresivas reformas laborales instrumentadas en las últimas dos décadas en nuestros países.

Es relevante el asunto, ya que en el último lustro han mejorado relativamente los salarios del sector «regular» en el mercado laboral, y muy especialmente los salarios mínimos. Resulta de interés discutir ambas realidades y sus vinculaciones recíprocas. Es cierto que han mejorado los indicadores de ingresos de los trabajadores del sector regular, y especialmente del salario mínimo, pero sin modificar la reaccionaria legislación establecida en tiempos de ofensiva neoliberal en los ochenta y en los noventa.

Argentina tiene el mayor poder adquisitivo medido en dólares respecto de los salarios mínimos de diez países de la región para 2011 (Tabla

1)¹, y seguido del Paraguay, aunque en la relación 2011-2007 ha sido el Perú el que encabeza la recuperación del salario mínimo, con un 36,73%, seguido de Argentina con 29,62% (Tabla 2). Al final de la Tabla 2 aparece Colombia con una recuperación del 4,63% y el único con valores negativos es Venezuela con un registro de -9,31%, o sea, pérdida de más del 9% de la capacidad de compra respecto de los últimos años.

Puesto	País	2011	2010	2009	2008	2007
1	Argentina	792	694	676	716	611
2	Paraguay	681	619	592	597	567
3	Ecuador	489	448	417	432	394
4	Chile	484	445	446	455	433
5	Colombia	457	448	452	455	437
6	Perú	439	356	356	355	321
7	Venezuela	348	370	377	426	384
8	Brasil	341	327	310	295	274
9	Uruguay	285	289	283	282	230
10	Bolivia	249	214	212	212	209

Son interesantes los datos que presentan ambas Tablas para países con diferente orientación de política económica. Lo que pretendemos es llamar la atención sobre algunas cuestiones estructurales relativas al empleo y a la relación salarial en el capitalismo en la región. Hemos mencionado el caso de la reciente aprobación de la LOT (Ley Orgánica del Trabajo en Venezuela), porque este país aparece último y con registro negativo en la evolución del salario mínimo. La LOT establece la reducción de la semana laboral de 44 a 40 hs., con 8 hs. diarias y dos días de descanso; la extensión del permiso postnatal de 12 a 20 semanas; la inamovilidad de dos años para ambos padres después del parto; pago doble de prestaciones por despido injustificado; elimina los contratos de *outsourcing* (tercerización) entre otras cuestiones relevantes. Existe un debate sobre la práctica de gestión de los trabajadores en las empresas venezolanas, participación estatal mediante, que renueva la discusión sobre las relaciones laborales en el capitalismo, máxime en un país que se propone el tránsito al socialismo.

1 <http://www.elsalario.com.ar/main/trabajo-decente/Informeslaborales/argentina-sigue-teniendo-el-mayor-salario-minimo-de-america-latina>. <<http://www.elsalario.com.ar/main/trabajo-decente/Informeslaborales/argentina-sigue-teniendo-el-mayor-salario-minimo-de-america-latina>>.

TABLA 2. VARIACIONES ANUALES Y TOTALES DE LOS SALARIOS MÍNIMOS EN U\$S PPA, EN %						
Puesto	País	2011/2007	2011/2010	2010/2009	2009/2008	2008/2007
1	Peru	36.73	23.13	0.13	0.28	10.59
2	Argentina	29.62	14.07	2.71	-5.59	17.18
3	Brasil	24.50	4.35	5.46	5.08	7.66
4	Ecuador	24.00	9.11	7.38	-3.47	9.64
5	Uruguay	23.83	-1.34	2.01	0.35	22.61
6	Paraguay	20.05	9.99	4.55	-0.84	5.29
7	Bolivia	19.00	16.21	0.96	0	1.44
8	Chile	10.76	8.77	-0.22	-1.98	5.08
9	Colombia	4.63	2.14	-0.96	-0.66	4.12
10	Venezuela	-9.31	-5.96	-1.77	-11.50	10.59

Los indicadores presentados dan cuenta de un incremento en los salarios mínimos entre 2007 y 2011, claro que es una conclusión válida para los trabajadores registrados, que como sabemos, en la coyuntura del desarrollo capitalista contemporáneo son la minoría. La mayoría de los trabajadores pertenecen al sector informal o no regularizado, sin seguridad social, que en muchos casos perciben ingresos por debajo del mínimo. Son entonces dos aspectos a considerar. Por un lado el crecimiento de los mínimos salariales, que aun cuando se trata de una minoría indica una pauta del piso de ingreso de los trabajadores. Para muchos es un objetivo o una referencia, aún siendo insuficiente para resolver la canasta familiar de los trabajadores. La otra cuestión es que el mínimo, por mucho que crezca no destaca lo principal, ni de los ingresos del conjunto de los trabajadores, ni de la relación de los trabajadores con el capital actuante en cada país.

El salario mínimo es una referencia importante, sí, pero necesita relacionarse con otras variables. Una es la evolución de los precios de los productos y servicios que realmente adquiere la familia del trabajador, más allá de los índices oficiales de inflación. Es relevante el tema en el caso argentino ante la manipulación de los datos del Indec, con una inflación real que discute las recuperaciones del poder de compra. Otra variable son las ganancias empresarias, las que definen la brecha en la división funcional del ingreso y que responden a una creciente concentración y centralización del capital. En definitiva, no solo se trata de los ingresos, sino de los derechos de los trabajadores y su lugar en la producción material de bienes y servicios, lo que define su capacidad de consumo y posibilidad de emancipación social.

Buenos Aires, 26 de mayo de 2012.



GOLPE DE ESTADO PARLAMENTARIO EN PARAGUAY¹

El economista y doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, Julio Gambina, participó como docente-facilitador en la Cátedra Libre «Tomás Palau» - «Pensamiento crítico para transformar la realidad», en Paraguay.

La misma semana en que se dió el Golpe de Estado en Paraguay, el movimiento popular argentino, en la provincia del Chaco, impidió que se instalara una Base Militar del Comando Sur en la ciudad de Resistencia. Julio Gambina relató el hecho y señaló que eso pudo haber acelerado los tiempos del imperio por desarrollar una presencia económico-político-militar en Paraguay. «Los acontecimientos ocurridos en Paraguay, inmediatamente después del Golpe, viabilizando producciones económicas transgénicas, y habilitando proyectos económicos estratégicos del poder económico mundial, dan cuenta de que había intereses de retrotraer la situación en el Paraguay», refirió.

Para el economista, lo ocurrido se enmarca en lo que caracteriza como un tiempo de cambio político, iniciado a comienzos del siglo XXI en América Latina. «Lo que hay en Latinoamérica es un proceso de profundo cambio político, no necesariamente de cambio revolucionario. El signo del rumbo político de América Latina es muy distinto, en los primeros años del siglo XXI, a lo que venía ocurriendo en la región en los últimos años del siglo XX».

Señaló que en ese marco se inscriben procesos en disputa. Aclaró que eso puede hacer referencia a lo que ocurrió en Chile, con el triunfo

¹ Entrevista en revista *E'a* (Paraguay), publicada el 24 de julio de 2012. Puede leerse completa en <www.minilink.es/7ft>.

de Sebastián Piñera, o al segundo mandato de Evo Morales en Bolivia. «Allí, el vicepresidente, Álvaro García Linera, formuló, en la asunción, la perspectiva del socialismo comunitario, que es muy distinto a la propuesta del primer gobierno que era el capitalismo andino. No es lo mismo promover como horizonte ideológico propositivo el capitalismo andino que el socialismo comunitario, aunque cueste demostrar cualquiera de las dos categorías».

En ese entonces Julio Gambina se preguntaba: ¿por qué la izquierda latinoamericana le ponía más atención al triunfo de Piñera que al triunfo de Evo Morales? «Lo que veo es que en América Latina está esa tensión, están los retornos de la derecha pero también están las posibilidades que se abren para la izquierda. Bolivia y Chile expresaron esas tensiones a principios de 2010».

En medio de las tensiones y los cambios políticos, se da el retorno de los golpes de Estado bajo nuevas modalidades, «que es una de las novedades que hay en América Latina y tiene que ver con lo de Honduras, en primer lugar, y con la emergencia de Paraguay».

¿POR QUÉ GOLPEAN LAS DERECHAS?

Al decir del catedrático, existe una intencionalidad de las clases dominantes, de las derechas, de quitar iniciativa a la dinámica del movimiento popular que instaló gobiernos que expresan el cambio político en la región y eso es lo que ha pasado en Paraguay: «Al mismo tiempo hay una dinámica de lucha popular en Latinoamérica que le da continuidad al horizonte del cambio político. Vuelvo a Bolivia: el movimiento popular boliviano impidió que se avanzara en una política de establecer una ruta que afectaba los recursos naturales, los derechos de los pueblos originarios, de las poblaciones que estaban asentadas en esa iniciativa estratégica del poder económico mundial. Pero así como digo Bolivia digo también Argentina».

Según Gambina, Paraguay también se inscribe en el horizonte de cambio ya que la respuesta del movimiento popular paraguayo, «inmediatamente después del Golpe, no en el proceso o durante, es de una dinámica de acumulación popular que no se vivía desde hace mucho tiempo en Paraguay. Y estoy hablando de múltiples reuniones, de tipo electoral o de tipo de organización del movimiento popular».

Afirmó que la rearticulación del movimiento popular paraguayo pudo ser una reacción ante el Golpe, pero su dinámica no puede verse sino en un ciclo complejo de lucha contra Stroessner, «en el sentido histórico contra la dictadura, y lo que ha representado la experiencia del gobierno

Lugo de 2008 hasta la actualidad y que la lectura de muchas organizaciones, movimientos populares, partidos políticos de la izquierda paraguaya, tiene que ver con responder a la etapa con un nivel de organización que no tenían en 2008».

Apuntó que el acceso al gobierno en 2008 se dio en condiciones de debilidad profunda. «Pueden haberse cometido errores, pueden no haberse tenido previsiones. Uno lo compara con otras situaciones. Rafael Correa accedió al gobierno con la misma o más debilidad que el gobierno de Lugo, pero la experiencia ecuatoriana fue convocar a una reforma constitucional inmediata enfrentando al movimiento popular contra el Poder Judicial y del Poder Legislativo. Fue exitosa y generó un cambio de la Constitución; Ecuador tiene una de las constituciones más innovadoras del Poder Popular Latinoamericano, igual que la de Bolivia. En Paraguay no se hizo eso, pero es la izquierda, el movimiento popular paraguayo, el que debe estudiar por qué se siguió la táctica que se siguió, y no se avanzó en esa experiencia ya conocida del Ecuador».

Gambina cree que el gobierno de Franco no es reconocido ni siquiera por Estados Unidos porque es producto de un Golpe muy burdo, «ilegítimo, ilegal y aparece sospechado a todo nivel. Los países de la región son los primeros que no lo reconocen. La membresía del Mercosur está suspendida, no los acuerdos que se generan por el Mercosur, es decir, Paraguay sigue recibiendo «los beneficios del Mercosur» –entre comillas–, pero está suspendido del ámbito de la participación política. Algo parecido pasó con Honduras en un comienzo, y luego se fue normalizando progresivamente la situación, ¿qué es lo que va a pasar con el gobierno de Paraguay? Desconozco. Pero la situación institucional que hoy tiene el gobierno es de muchísima debilidad».

Para Gambina, Paraguay expresa el interés de las clases dominantes del mundo, «que no necesariamente son coherentes o convergentes con los Estados capitalistas. Paraguay es un enclave sojero de mucha importancia. Tiene menos soja que Brasil y Argentina, pero la proporción de soja que tiene su territorio es superior a la de Brasil y Argentina. Es un territorio de operaciones de los grandes capitales de Brasil y Argentina, pero sobre todo de las transnacionales que definen el negocio sojero, que son las empresas de la alimentación y de la biotecnología. Para ponerle nombre y apellido: Monsanto, Syngenta, Dreyfus, Cargill, que son los que manejan el paquete tecnológico, esas empresas actúan en la base del conflicto más allá de que los Estados lo reconozcan o no».

Dijo además que Estados Unidos jugó un papel importante en el Golpe, que no necesariamente se expresa en el del gobierno, «entiéndase

como un mensaje del presidente Obama, sino que ahí intervienen el conjunto de las agencias, el complejo militar-industrial, el despliegue de las bases militares. Hay que tener en cuenta que a Estados Unidos le fue mal con la Base Militar en Resistencia, que decía que sería humanitaria. Los sacaron en Ecuador. No tuvieron éxito con las siete bases en Colombia, porque la Justicia falló en contra. Quizá si se combinaran una serie de coyunturas regionales y locales, podrían acelerar los pasos para generar las condiciones políticas para el despliegue de políticas militaristas de la región», concluyó.

AJUSTE EN EL SALARIO MÍNIMO

Finalmente se reunió el 28/8/12 el Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (El Consejo) y aprobó un incremento del salario mínimo del 16% a partir de septiembre y un 8% adicional para febrero de 2013. La medida fue publicitada como un incremento del 25%, que se otorga en dos cuotas, la primera en septiembre de 2012 y la segunda hacia febrero de 2013. Con esa resolución, el salario mínimo será de 2.670 pesos desde ahora hasta enero próximo, y luego pasará a ser de 2.875 pesos. Es una decisión que actúa sobre menos del 2% de los trabajadores formales del sector privado de la economía, que son aquellos trabajadores que perciben el menor ingreso.

Sin embargo, el dato interesa a más de 4,2 millones de trabajadores informales, que representan el 34,2% del total de trabajadores a diciembre de 2011 (datos del Indec), y sus ingresos pueden verse influidos por esta referencia al salario mínimo. La disposición no rige sobre ingresos productos de planes sociales y está por encima del promedio salarial de los trabajadores de los municipios.

No es un dato menor la discusión sobre el salario mínimo, pues presenta a la sociedad los mínimos de ingresos necesarios para satisfacer necesidades de alimentación, vivienda, salud, educación, transporte, recreación, etc., del trabajador y su familia.

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO

Existe una importante valoración social sobre el incremento de los mínimos, sea el salario, como las jubilaciones y pensiones, que aparece limita-

da cuando se discute la distribución funcional¹ y personal² del ingreso, ya que el crecimiento de la economía de estos años no se distribuyó equitativamente entre patrones y trabajadores.

Según datos del Observatorio de Derecho Social de la CTA³ «Entre los años 2001 y 2011 el Producto Bruto ha experimentado un crecimiento del 74%», y «en el mismo período el ingreso de los asalariados registrados se incrementó tan sólo un 3,3%».

El informe destaca sobre «el comportamiento de la productividad y del costo laboral por ocupado» que «entre los años 2001 y 2010 la productividad del trabajo se incrementó un 31%, mientras que el costo laboral por ocupado se redujo en un 24%» en claro beneficio para los empresarios.

El Observatorio destaca que «el promedio del índice de rentabilidad sobre el stock de capital fijo durante la convertibilidad (1993-2001) fue del 24,8%, mientras que en el período 2003-2010 ascendió al 37,2%». Queda claro que el crecimiento económico de estos años favoreció al capital invertido aún cuando millones de trabajadores se hayan incorporado al mercado de trabajo. Pese a ese crecimiento del empleo, el informe destaca que «la participación de los trabajadores en el ingreso nacional se redujo del 38,5% en 2001 al 37,6% en 2011».

LOS TEMAS AUSENTES Y LA REPRESENTACIÓN

Resulta interesante analizar estos datos por que el Consejo reunido no solo debe considerar el «salario mínimo, vital y móvil», sino la productividad y el empleo. Esos temas no son considerados, aunque ahora se resolvió tratar en comisión y a futuro lo relativo al elevado índice de informalidad que registra la economía argentina.

Además, las decisiones del Consejo son parte de la voluntad del poder público consensuadas por representantes de los empresarios y de los trabajadores. Resultan discutibles las representaciones sindicales, ya que los sindicalistas presentes en el cónclave que decidió el salario mínimo están cuestionados en el movimiento sindical, y solo convalidados por

1 Cuánto ingreso se apropian los patrones y cuánto los trabajadores. Es la referencia que en general se hace al *fifty-fifty* de los años del primer peronismo y que se instaló en la lógica de lo posible como objetivo deseable.

2 Remite al ingreso total dividiendo a la población en 10 grupos de ingresos, por lo cual se discute como se agrupan las decenas de mayores y de menores ingresos.

3 De cara a una nueva convocatoria del Consejo del Salario - Aportes para el debate. Observatorio del Derecho Social, en <www.obderechosocial.org.ar>.

decisión del poder ejecutivo sobre el mandato de las centrales, tanto sobre la CGT como la CTA.

La dirección de la CGT decidió no participar cuando reclama un mínimo de 3.500 pesos mensuales, y la de la CTA que demanda 5.000 pesos por mes, directamente fue excluida del convite. La delegación sindical que actuó en el Consejo no tiene la legitimidad ni la legalidad del movimiento de trabajadores, por el contrario, es resultado de una prórroga otorgada por el Poder Ejecutivo sobre la representación actuante en 2010 y 2011.

Más allá de la discusión de fondo sobre el salario mínimo en 2.670 desde este mes, contra los 3.500 reclamado por la CGT y los 5.000 de la CTA, la gestión de un tema sustancial de la política de ingresos, como el mínimo salarial, expresa la fragmentación y crisis en la representación social y política de los trabajadores.

El sentido del mínimo es el establecimiento de un piso para acceder a la canasta familiar necesaria para el trabajador y su familia. La lógica indica que debe preceder a las negociaciones colectivas, sin embargo, la historia del Consejo nos devuelve que el salario mínimo termina disponiéndose finalizadas la mayoría de las paritarias.

Lo que ocurre en el Consejo es expresión de lo que ocurre en la realidad: fragmentación del movimiento de trabajadores y crisis de alternativa política. Si se pretende recuperar la histórica participación de los trabajadores en la distribución funcional de los ingresos e ir por más, la batalla está en la representación social y política de los trabajadores, algo que queda claro en las distintas fracciones que disputan la representación y que expresan diferentes modelos de acumulación de poder popular.

El capitalismo está mutando, y más aún con la crisis mundial, siendo la precariedad el dato creciente. Modelos como el sugerido por la CTA a comienzos de los noventa sigue constituyendo la asignatura pendiente: agrupar a todos los trabajadores para la disputa del poder.

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2012.



EL PROYECTO POLÍTICO EN BUSCA DEL SUJETO

¡Y se armó la discusión! La presidenta discutió que no hay «modelo económico» sino «proyecto político» en curso. Les hablaba a los empresarios reunidos en Tecnópolis el Día de la Industria, el 3 de septiembre pasado, y también al país en cadena nacional. En la alocución aludió críticamente al titular del grupo transnacional de origen local: Techint. Antes, Paolo Rocca, en la asociación de ingenieros había brindado su versión sobre la evolución económica del país y realizado una crítica a la política del gobierno.

Ya circulan, oficialmente difundidas por decisión del Poder Ejecutivo, las cartas del titular de la empresa número uno del mundo en la venta de caños sin costura para la producción petrolera mundial, y la respuesta presidencial. En ambas parece haber acuerdo sobre cuestiones esenciales del desarrollo productivo industrial y diferencias sobre el rumbo general, coincidiendo en responsabilizar a un tercero por ir más allá de los dichos del empresario, el diario *Clarín*, otro de los grandes del poder económico local.

Más allá del cuidadoso y atento intercambio epistolar, la discusión que subyace a los dichos y escritos de Rocca y de Cristina Fernández, remiten al sujeto que sustenta cualquier proyecto político. Al comienzo de la década, cuando se vivía el final del régimen convertible, la discusión era más dolarización ó devaluación de la moneda.

ESPECULACIÓN O PRODUCCIÓN

La primera variante la sustentaban acreedores externos, bancos transnacionales y empresas privatizadas de servicios públicos. El sector produc-

tor y exportador, del campo y la ciudad empujaban la devaluación de la moneda local para ganar competitividad (algo que vuelve a demandar el grupo Techint).

Estos últimos fueron los ganadores de la pulseada y se habilitó un relato favorable al establecimiento de un «modelo productivo», que suponía una cosmovisión opuesta al «modelo especulativo». Fueron los tiempos de Duhalde, sustentado en Economía por Remes Lenicov al comienzo, y finalmente por Roberto Lavagna, asociado intelectual y profesionalmente a los Rocca. Vale adicionar que el *default* previo de Rodríguez Saá liberó buena cantidad de recursos fiscales para pago de deuda pública por unos cuantos años, lo que benefició destinos alternativos del gasto público para promocionar el «nuevo modelo o proyecto».

El «modelo» en los inicios de la postconvertibilidad se sustentaba en mayor competitividad para la producción local y un Estado predispuesto a reorientar sus recursos fiscales, por lo cual congeló tarifas de servicios públicos privatizados y subsidió de forma creciente a esos empresarios transnacionales que iniciaron una nueva etapa de sus negocios, empujando pleitos en el seno del CIADI (ámbito del Banco Mundial); buscando retirarse del negocio (caso de Aguas, por ejemplo); o discutiendo aumentos de los subsidios, algo que creció hasta el presente. El anuncio por achicar o finalizar con los subsidios, luego de octubre de 2011 pasó a cuarto intermedio, sin fehaciente definición por su disminución o eliminación.

El resultado de negociaciones y situaciones con las privatizadas ha sido diverso, y salvo el caso de YPF, todas las empresas que fueron reestatizadas eran emprendimientos deficitarios. Ahora se genera la opción estatal por un cuarto de la actividad en la telefonía celular, un sector de alta rentabilidad que requiere importantes inversiones. En el resto de los sujetos beneficiarios del régimen convertible, la situación fue normalizándose. A los bancos se los sostuvo con bonos que permitieron salir del «corralito» y del «corralón», comprometiendo finanzas públicas y facilitando reencontrar al sector bancario la rentabilidad que les permite ser beneficiarios de las mayores ganancias en la coyuntura. Los acreedores externos, pese a gestiones judiciales de cobro en tribunales del exterior, vía desendeudamiento están normalizando la situación.

A LA BÚSQUEDA DE LA BURGUESÍA NACIONAL Y EL PACTO SOCIAL

El proyecto político de Menem tenía su sujeto en los impulsores de la dolarización de la economía. El proyecto productivo buscó el sujeto social de

su sostén en dos momentos. Uno remite a Duhalde y Lavagna, que también acompañó la primera parte de la gestión Kirchner, hasta la materialización del canje de deuda en 2005, para empezar a normalizar la relación con el sistema financiero mundial. Allí comienza otro momento, que incluye la segunda mitad de la gestión Kirchner y las dos administraciones de Cristina Fernández. Los ocupantes del ministerio perdieron peso específico en la formulación y difusión del proyecto, que pasó a concentrarse en el titular del gobierno, primero Kirchner y luego Fernández.

El tema central en la definición del sujeto pasó por la constitución de una «burguesía nacional», en el supuesto general de que la tarea apuntaba a reconstruir el capitalismo nacional. Tarea discutible en tiempos de transnacionalización de la economía mundial, máxime cuando las transnacionales son hegemónicas y crecientemente mayoritarias en la cúpula empresarial local. El proyecto incluía el pacto social entre empresarios y trabajadores, algo que no pudo formalizarse, más allá de las fotos y acuerdos en los Consejo del Salario, especialmente en la última versión, con representación sindical cuestionada.

La apuesta por empresarios y grupos locales del capital tuvo varias etapas que no prosperaron y cedieron el lugar al Estado, una opción que ya fuera definida por el peronismo en los tempranos años setenta. En efecto, si la apuesta fue al inicio la asociación con Techint; luego se habilitó al Grupo Eskenazi y la *argentinización* de YPF, un fallido que trajo al multimillonario Carlos Slim como destacado accionista de la empresa petrolera parcialmente expropiada por el Estado. No podemos olvidar la presencia de Urquía, el empresario sojero proveniente de Córdoba, incluso legislador del partido de gobierno. Las apuestas pasaron por el banquero Britos, titular de uno de los bancos locales de mayor desarrollo, e incluso por Cristóbal López, titular de empresas de juego y que ahora incursiona en el petróleo.

Esas apuestas a empresarios o grupos se completaron con intentos de alianzas sociales con los trabajadores, especialmente con la CGT, situación conflictiva por cierto con el proceso de fracturas en el movimiento sindical, incluida la CTA. En estas horas, la CTA desafió con un encuentro de más de 2.000 delegados del sector privado para constituir un modelo sindical alternativo, también entre los privados de la economía, donde se concentra el grueso de los trabajadores. No solo el proyecto político del gobierno busca sujeto, sino que también es una tarea de cualquier proyecto político, asumido como desafío entre los trabajadores adheridos a la CTA. Ese sujeto es también un intento de la derecha tradicional y las clases dominantes, algo que parecía constituirse en la crisis de 2008.

La construcción del sujeto social de sustento del proyecto político gubernamental se presenta como una estrategia con límites, más allá del 54% de los votos en octubre de 2011, no solo por el carácter transnacional de la economía contemporánea, sino porque el objetivo del capital de origen local es también la ganancia, más allá de un proyecto «nacional de desarrollo», y porque el pacto social se dificulta ante la crisis del modelo sindical tradicional y la búsqueda de nuevas representaciones de los trabajadores, proceso intentado especialmente por la CTA.

EL ESTADO COMO SUJETO. ¿PARA QUÉ, CÓMO Y CON QUÉ ALIANZAS?

Fue Pedro Paz, entre otros, quien en los setenta y desde el peronismo sostenía que el Estado era el sujeto para construir la independencia económica ante la ausencia de una burguesía nacional. Ahora vuelve a tener sentido aquella discusión ante el cambio epistolar entre el más grande consorcio industrial local y la presidenta, que debe agregar el debate sobre los «para qué» del Estado; cuál debe ser el sentido de su intervención, cuáles las alianzas sociales para constituir sujeto de sustentación.

Es una discusión que nos lleva a analizar la posibilidad del desarrollo autónomo, independiente del capitalismo en la actualidad. Es un debate que transita la experiencia de Nuestramérica, entre la búsqueda del reconocimiento del sistema mundial, objetivo que supone la consideración de «país emergente»; o la perspectiva autónoma que reconoce la necesaria integración regional para superar los límites y condicionamientos que impone el capitalismo. Se trata de discutir el propio modelo productivo en curso, sus beneficiarios y la estrategia de desarrollo.

El centro de la cuestión es el sujeto social de la política hegemónica. Desde otro ángulo, puede sostenerse que la cuestión pasa por la constitución del sujeto consciente para la transformación de la sociedad en la perspectiva emancipatoria para superar al capitalismo en este tiempo histórico.

Buenos Aires, 10 de septiembre de 2012.

SE AJUSTARON LAS ASIGNACIONES FAMILIARES

En la semana se anunciaron correcciones a las Asignaciones Familiares, mediante lo cual desde el gobierno se sostiene la universalidad, pues quienes obtengan salarios de más de 7.200 pesos mensuales, si bien no perciben el beneficio por Asignación Familiar mes a mes, sí pueden desgravar ese monto en la declaración anual al Impuesto a las Ganancias.

Fueron frustrados aquellos que esperaban anuncios respecto de correcciones al mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que por ahora se mantiene, más allá de la cuestión de fondo relativa a si los trabajadores deben o no ser sujetos del impuesto, que por definición debiera aplicarse al sector empresario.

Como resultado del ajuste anunciado, todos los salarios de trabajadores regularizados menores a 7.000 pesos mensuales serán perceptores del beneficio, siempre que el grupo familiar no supere los 14.000 pesos mensuales, o uno de los dos cónyuges ingrese más de 7.000 pesos al mes. Ello supone una modificación de criterio. Hasta ahora se privilegiaba el menor ingreso de la sociedad conyugal. Desde ahora rige el ingreso familiar a los efectos del beneficio por asignación.

NUEVAS ESCALAS

La percepción de la asignación ocurre para trabajadores en situación regular en una escala que señala 4 grupos. El primer grupo es para los trabajadores de menores ingresos, los que perciben salarios desde 200 a 3.200 pesos mensuales, a quienes se les asigna una prestación de 340 pesos mensuales. Los montos han sido modificados, previamente eran desde

los 100 a los 2.800 pesos, siendo la prestación de 270. Así, el tope salarial aumenta un 14,3% y el beneficio un 25,9%. Es un dato relevante a la hora de definir la mejora en el ingreso de la familia trabajadora.

Para el segundo grupo, se parte de trabajadores con ingresos entre 3.201 y 4.400 pesos al mes, los que recibirán una prestación de 250 pesos mensuales. El registro del tope salarial anterior era de 2.801 a 4.000 pesos mensuales, y el beneficio de 204 pesos. Por lo tanto, el ajuste es de 10% para el tope salarial, y de 22,5% para el beneficio.

En el tercer grupo, aparecen los trabajadores con ingresos mensuales entre 4.401 y 6.000 pesos, con un beneficio de 160 mensuales. Antes se reconocía tope entre 4.001 y 5.200 pesos, con beneficio de 135. Los ajustes son del 15,4% al tope salarial del grupo familiar, y del 17,6% para la asignación. Ahora se agrega un cuarto grupo, antes inexistente, para quienes perciban entre 6.001 y 14.000 pesos al mes, con un beneficio de 90 pesos mensuales.

Como se puede apreciar, mayores han sido los ajustes de las asignaciones que las actualizaciones de los topes para las categorías preestablecidas, las que están por debajo de los ajustes salariales discutidos en las paritarias. Eso explica que las medidas difundidas en la semana suponen actualizaciones de los montos de beneficios por Asignaciones Familiares, aunque algunos sectores de trabajadores puedan ingresar un menor beneficio a su economía cotidiana.

¿Por qué? Ocurre que las negociaciones salariales tuvieron una corrección entre el 20 y 25% promedio y los ajustes para el tope salarial son menores al 15%, haciendo que muchos trabajadores pasen del grupo 1 al 2 y así sucesivamente, percibiendo asignaciones incluso menores que las que venían recibiendo hasta el presente ajuste. Así, el volumen total de asignaciones se incrementa con una redistribución al interior del conjunto de los trabajadores.

ACHATAMIENTO DE LA PIRÁMIDE DE INGRESOS

La tendencia salarial de los trabajadores regularizados achata la pirámide de ingresos, ya que los ajustes salariales que se realizan privilegian los mínimos, sea por correcciones al salario mínimo vital y móvil; por actualización de la mínima jubilatoria; y ahora por el mecanismo diferencial para ajustar tope de ingresos y Asignaciones Familiares.

Con estas disposiciones se ajusta la Asignación Universal por Hijo corriendo por detrás del aumento de los precios, en una carrera que pier-

den desde el comienzo los sectores de menores ingresos, situación que involucra también al sector empresario que define sus ventas a quienes perciben ingresos fijos.

Un tema adicional de nuestro comentario es la próxima evaluación del FMI sobre el sistema de medición de precios establecido en la Argentina. Se espera un comentario crítico del organismo internacional, y que viene impulsado por acreedores externos que reclaman por sus ingresos. Está claro que esta demanda puede asociarse a la economía especulativa, mientras que los temas relativos al mínimo no imponible en ganancia o el ajuste de las asignaciones o los salarios son un tema que figura a la cabeza de las reivindicaciones de los trabajadores, a la sazón, la mayoría de la población.

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2012.



LAS ELECCIONES VENEZOLANAS Y EL DEBATE ECONÓMICO EN NUESTRAMÉRICA

El triunfo electoral de Hugo Chávez en las recientes elecciones presidenciales en Venezuela habilita un debate sobre los cambios económicos, su rumbo y sus beneficiarios. Quedó muy claro en la campaña electoral y en el balance del resultado, las opiniones favorables al rumbo de la revolución bolivariana y sus críticas, incluso más allá de Venezuela. Casi podemos mencionar al episodio como un acontecimiento mundial. No daba lo mismo para unos y para otros el resultado.

La derrota del chavismo hubiese representado una esperanza para las clases dominantes locales, regionales y mundiales para reencauzar a Venezuela y su petróleo en la lógica de acumulación y de dominación imperialista. Enfatizo en ello porque aún vendiendo petróleo a EE.UU. en grandes cantidades, el régimen actual de Caracas no se subordina a la lógica de dominación global de EE.UU., más bien la confronta.

Por el contrario, el triunfo bolivariano otorga nuevos aires al rumbo por los cambios en la región. El pasado 12 de octubre, Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, denunciando aquel 12 de octubre de 1492 trajo a cuento la realidad del presente y señaló que hoy «tener relaciones con la Embajada de Estados Unidos es como una caca». La réplica del poder mundial no se hizo esperar, dentro y fuera de Bolivia.

DEL CAMBIO POLÍTICO AL CAMBIO ECONÓMICO

Es que Nuestramérica en proceso de «cambio político» necesita, además de consolidarlo (en el sentido que afirman estas elecciones venezolanas),

avanzar en el «cambio económico», sea el Socialismo del siglo XXI propuesto por Venezuela, o el Socialismo Comunitario sustentado desde Bolivia.

No se trata solo de decisiones nacionales de esos países, sino de la capacidad de la región por finiquitar la herencia neoliberal de la institucionalidad gestada en los años ochenta y noventa. Claro que algunos imaginan que se puede criticar y enfrentar al neoliberalismo desde el capitalismo. Es parte de las ilusiones que sostienen la independencia dentro del capitalismo.

Tanto Venezuela como Bolivia se proponen el tránsito del capitalismo al socialismo, cada uno con sus adjetivos, que reportan a su historia y tradiciones, pero coincidentes en el rumbo de la transición al socialismo. Ello supone desarmar los vínculos estructurales del orden social vigente, al interior de los países y en el vínculo con el resto, lo que impacta en el proceso de integración regional.

Recientemente Ecuador ha sido demandado por el CIADI a cumplir con una sentencia ante la demanda de una transnacional. Una cosa será la lucha solitaria desde el Ecuador ante el CIADI, o la activa solidaridad de los países de la región.

Tanto Bolivia como Venezuela y Ecuador se retiraron del CIADI, además Brasil nunca firmó el protocolo de adhesión, con lo que surge el interrogante sobre la legitimidad que le otorgan a ese ámbito de la dominación otros países, los que continúan subordinados a la lógica de defensa de las transnacionales que opera en el CIADI y su mentor el Banco Mundial. Se trata de organizar la transición en dos carriles simultáneos, el nacional y el regional, como forma de discutir y disputar desde la región el orden mundial.

A nivel nacional se precisa desarticular el poder de las transnacionales, orgánicamente articuladas con el poder económico local, sea el tradicional oligárquico como el burgués moderno o el especulativo.

Es curioso, por ejemplo para el caso argentino el fortalecimiento del sector bancario, con excedentes que lo alejan de la crisis de 2001 y lo proyectan en el presente como uno de los emprendimientos con mayor rentabilidad. ¿De dónde sale esa renta? ¿No estará asociado al usurario margen entre tasas pasivas y activas, cuantiosos costos de los servicios a usuarios del sistema bancario?

En rigor, solo responde a la lógica de la ganancia en el capitalismo, y la creciente bancarización más que favorecer al usuario del servicio financiero es una forma de extensión del negocio bancario.

Convengamos que transitar el cambio económico supone enfrentarse con el poder local y mundial. No es ni será sencillo enfrentar a ese poder, pero la primera decisión es asumir el costo del enfrentamiento, lo que requiere generar consenso social para las transformaciones. Hace falta construir un sujeto económico para esa tarea, y la autoconciencia de ese sujeto para la transición.

APRENDER DE LAS EXPERIENCIAS

La experiencia boliviana puede ayudar en la región. Su concepción constitucional de economía plural evidencia la presencia de distintas formas de organizar la economía, vía empresa privada capitalista, pública estatal, comunitaria y social cooperativa; pudiendo encarar procesos mixtos.

La hegemonía actual en la economía boliviana es la capitalista, pero el análisis de los presupuestos públicos de los últimos años, en la gestión de Evo Morales, da cuenta de una tendencia al crecimiento del sector estatal, incursionando en la creación y el fortalecimiento de empresas públicas. Es cierto que no siempre con los mejores resultados, pero puede contarse a favor del proceso boliviano la escasa tradición del Estado en la estructuración de empresas productivas o de servicios.

El objetivo explicitado por el gobierno plurinacional es modificar la hegemonía en la economía plural, lo que supone aplicar políticas favorables al desarrollo del sector estatal, del comunitario y del social cooperativo, desestimulando la lógica de privilegio al sector capitalista.

Un problema en Bolivia, tal como en otros países de la región, es la tentación de una inserción internacional mediante la venta de recursos naturales. En la agenda patriótica formulada por el presidente boliviano en agosto pasado se enfatiza en la necesidad de superar la «primarización» de la economía, vía industrialización de los recursos naturales.¹

Esa agenda se complementa con la superación de la extrema pobreza, la seguridad alimentaria con soberanía, la satisfacción universal de los servicios sociales para el conjunto de la población, y el desarrollo tecnológico, imprescindible para el proceso de emancipación. La disputa es grande en ese proceso y el propio sector empresarial hegemónico demanda ser parte de la discusión de la agenda sustentada hacia 2025, el año del bicentenario de Bolivia.²

1 <www.economiayfinanzas.gob.bo/index.php?opcion=com_prensa&ver=prensa&id_item=&id=2518&tseccion=308&categoria=6>.

2 <<http://www3.abi.bo/nucleo/noticias.php?i=2&tj=20120812192019>>.

Toda la región debe estudiar los procesos de cambio, especialmente aquellos con mayor disposición a confrontar con las hegemónicas relaciones sociales de producción capitalista.

LO DEFINITORIO ES EL SUJETO ECONÓMICO

Ello supone el desafío por construir sujeto, por el socialismo comunitario en Bolivia, y con la especificidad que suponga cada construcción nacional, pero completando el acumulado en sujeto político popular con sujetos actuando en el proceso económico, y especialmente productivo. En el caso boliviano son los indígenas, originarios y campesinos, los trabajadores, los cooperativistas, los micro y pequeños, medianos y grandes empresarios asociados al proyecto transformador.

Tal como hemos sugerido en varias ocasiones, e insistiremos hasta el cansancio, las preguntas que se nos imponen para la transición apuntan a responder: ¿Qué, quién, cómo, y para quién producir?

Ese es el debate en Nuestramérica, en un mundo en crisis, cuando el FMI acaba de publicar sus perspectivas económicas para 2013³, rebajando las proyecciones de 2012 y 2013 «de 3,2 por ciento en 2012 para América Latina y el Caribe (un 0,6 por ciento por debajo de lo proyectado en abril) y de 4 por ciento en 2013». En el informe mundial se muestran tendencias de menor crecimiento para EE.UU., Japón y especialmente Europa.

¿Tiene que continuar nuestra región produciendo para ese mundo capitalista en crisis, o generar las condiciones para una ruptura en el plano de la economía y la producción? Así como afirmamos la necesidad del cambio político al económico, esa orientación también debe constituir el desafío de la integración. Es muy destacable el avance de Unasur y Celac, pero están desafiados en la actualidad a constituirse en mecanismos de articulación productiva para contribuir a la transición de la hegemonía capitalista hacia un nuevo orden.

Claro que hay que ser conscientes de que en la región anidan proyectos diferenciados, incluso contradictorios. Por eso enfatizamos en la importancia del triunfo democrático para un nuevo periodo de gobierno de Hugo Chávez y su proyecto de revolución bolivariana por el socialismo.

La Paz, 13 de octubre de 2012.

SAQUEOS, POBREZA Y DISPUTA POLÍTICA

En esta semana se conmemoraron las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, y se cruzaron en el análisis con los episodios de saqueos a mercados producidos en el Gran Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro o Neuquén. Los hechos generaron discusiones políticas y análisis diversos. Las primeras definiciones y calificaciones llegaron desde el gobierno nacional responsabilizando a los organizadores de la movilización de trabajadores organizada por la CTA y la CGT el pasado 19 de diciembre. La réplica fue inmediata por parte de los principales dirigentes de ambas centrales sindicales, desligándose de la metodología del saqueo y la violencia, señalando como responsable de los hechos a la propia política oficial.

Queda claro que existe una disputa política en el país, que los análisis sobre los acontecimientos están motivados en las diferencias sobre el diagnóstico de situación en el país a 11 años de la crisis de diciembre de 2001 y van más allá de la confrontación entre el gobierno y las centrales de trabajadores movilizadas.

Se destacan por lo menos tres enfoques. Desde la visión «oficial» se destaca lo avanzado desde 2003 ante la situación de deterioro social vigente al inicio de la gestión Kirchner, y en todo caso solo se trata de tiempo para resolver diversos problemas sociales, reconocidos en la falta de empleo, vivienda, salud o educación.

Mientras que en la oposición sistémica se concentra la crítica en la ausencia de republicanism, o la corrupción, demandando el retorno explícito a políticas de los noventa: la apertura, la desregulación y la inserción subordinada al capitalismo mundial y sus organizaciones globales.

En estos días, con antecedentes diversos en el distanciamiento entre el gobierno y la CGT, y las iniciativas de movilización de la CTA desde junio pasado, y especialmente en el marco de la «unidad de acción» en las movilizaciones de trabajadores del 20 de noviembre y del 19 de diciembre, emergió y se hizo visible otra visión crítica, orientada a discutir la política de privilegio a la valorización del capital y a la apropiación privada del excedente económico.

Son tres visiones, no siempre claramente diferenciadas (entre ellas se entrecruzan y se asocian), las que manifiestan el escenario del conflicto político en la coyuntura y que definen, sin duda, el próximo año de renovación legislativa.

¿CUÁN MEJOR ESTÁ LA SITUACIÓN SOCIAL?

Es real que las estadísticas muestran una mejora de la situación social del peor momento de comienzos de 2002. Convengamos también que las estadísticas actuales están sospechadas, siendo el Estado nacional el único en condiciones de ofrecer fuentes de información confiable.

Por ello es que reconocemos en la normalización del Indec una asignatura pendiente para definir con precisión los datos de la pobreza.

Para 2002, el 21,5% de la PEA estaba registrada en el desempleo, y ahora, según el Indec (III trimestre de 2012), el dato remite al 7,6% de desempleo, más un 6,2% de subempleo demandante, y un 2,7% de subempleo no demandante.

La línea de la pobreza involucraba al 57% de la población en 2002, y hoy (noviembre 2012, Indec) se registra un promedio de 6,5% de la población bajo la línea de pobreza (517,85 pesos por mes) con picos del 12,3% en el Noreste. La línea de indigencia se ubica en noviembre de 2012 en 231,86 pesos. Así, según las estadísticas oficiales, cualquier persona que ingrese por lo menos 232 pesos (casi 48 dólares por mes al tipo de cambio oficial) al mes, se halla por fuera de la línea de indigencia; y si ingresa 518 pesos (casi 108 dólares mes al tipo de cambio oficial) al mes, supera la línea de la pobreza.

Las cifras de ingreso que definen la pobreza y la indigencia hablan por sí solas de los límites de los indicadores en la Argentina contemporánea. Es un dato relevante verificar que se redujeron los peores índices sociales vigentes a 2002, en materia de desempleo, subempleo, pobreza e indigencia, aunque sin lograr valores vigentes previos a los años setenta e incluso de los ochenta, con índices entre el 2 y el 4% de desempleo y en ocasiones muy especiales elevando el guarismo hasta el 6%.

La situación social de la Argentina se explica por los cambios ocurridos en los últimos decenios, especialmente en la década del noventa, los que estructuralmente no han sido revertidos, y que las políticas económicas establecidas en la década gobernada por el menemismo y la Alianza, el PJ y la UCR, generaron un piso estructural regresivo en la composición social de la Argentina.

CARÁCTER ESTRUCTURAL DE LA POBREZA

La pobreza no es un dato coyuntural, tiene dimensiones estructurales, y se visibiliza en las aglomeraciones circundantes a los grandes centros urbanos, constituyendo la base problemática de la insatisfacción social en materia de alimentación, salud, educación, vivienda o empleo. A ese cuadro objetivo debe añadirse la conflictividad social y la diversidad de fenómenos crecientes de una economía del delito asociada a la trata de personas, la droga o el empleo esclavo. La extensión estructural del fenómeno de la pobreza constituye la base material de ese cuadro de deterioro social.

Entre otros datos del fenómeno estructural de la pobreza, se manifiesta en más de un tercio de los trabajadores en situación irregular, es decir sin cobertura social; en la precarización del empleo y la tercerización. También se expresa en la llamada «inclusión social» con ingresos mínimos que suponen los planes de asistencia social, sean las asignaciones para menores, las jubilaciones sin aportes históricos de los beneficiarios, o los planes de empleo asociados a organizaciones cooperativas. El 75% de los jubilados nacionales perciben el monto mínimo, en el orden de los \$ 1.900 mensuales, y el salario mínimo se ubica en \$ 2.670 (subirá a \$ 2.875 en febrero de 2013).

Los ingresos de este conjunto social, mayoritariamente trabajadores activos o pasivos, les posibilita accesos limitados a la canasta de consumo necesaria para la reproducción de la vida cotidiana de la familia trabajadora en la Argentina. Más allá de los datos oficiales, las necesidades de ingreso individual rondan los \$ 5.000 pesos al mes.

Se puede pensar en la existencia de maniobras políticas, que las hubo en los saqueos y protestas de 1989, como en 2001, e incluso en la actualidad. Es verdad, sin embargo, la disposición social al saqueo o la protesta ocurre por la existencia de sectores sociales insatisfechos. La pobreza es un dato estructural de la sociedad argentina.

Los acontecimientos de estos días no son protagonizados por la sociedad con relativo nivel de satisfacción de sus necesidades, mucho menos por sectores de medio y alto consumo. Más allá del tipo de producto sus-

traído de los comercios, la base está en la insatisfacción del consumo para una calidad de vida acorde con las necesidades sociales.

La movilización del 19 de diciembre fue protagonizada por trabajadores organizados de la CTA, de la CGT, y otros grupos independientes o que remiten a un vínculo con la izquierda partidaria. Más allá de algunos pronunciamientos de adhesión, fuera de esa filiación social o política, la concentración fue protagonizada por trabajadores sindicalizados u organizados en movimientos territoriales. La pobreza era visible en la inmensa mayoría de las columnas de movilizados.

Entre las principales reivindicaciones se destacan el 82% móvil para las jubilaciones; la universalización de las Asignaciones Familiares, revirtiendo medidas asumidas en los últimos años y que afectan los ingresos de los trabajadores. Uno de los temas centrales se centraba en la crítica al no ajuste del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, y al propio concepto de considerar como ganancias a los ingresos de los trabajadores.

Claro que en el escenario político que vive el país, muchos análisis interpretaron la medida de protesta como un acto contra el gobierno, y la base material e ideológica de los acontecimientos que se sucedieron inmediatamente. Sin embargo, las demandas son compartidas por todos los trabajadores, más allá de su consideración respecto del gobierno, su política y sus objetivos. ¿Se puede ir más allá de la política social?

23 de diciembre de 2012.

DECLARACIÓN DE LA "CORRIENTE EN LA CTA"

POR LA CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVA POLÍTICA DESDE LA
MOVILIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES

I

El principal problema político de la Argentina es la construcción de alternativa política popular. Es la asignatura pendiente desde la crisis de 2001. Luego de una década de crecimiento económico los problemas estructurales de la pobreza y la sobreexplotación continúan junto a gigantescas ganancias del capital dominante, local o extranjero. La desigualdad es el dato relevante. Las disputas políticas en la Argentina son por la administración del capitalismo, y nosotros bregamos por la construcción de una sociedad anticapitalista y antiimperialista.

II

La lucha de clases contemporánea hace evidente la recomposición de las clases dominantes desde la crisis de 2001. Ello se expresa en la recomposición de la acumulación de riqueza, poder y ganancias de una economía sustentada en la *sojización*, la megaminería, y el ensamble industrial donde sobresalen la siderurgia y las automotrices.

En diez años, el Estado capitalista mejoró su capacidad de administración económica con solvencia fiscal (en disminución) y comercial (sostenida con restricciones a las importaciones y a la circulación de divisas), constituyéndose en activo pagador de la deuda pública externa. Pero también en la promoción de estratégicas medidas institucionales, tales como la aprobación de la Ley antiterrorista y la reforma a la legislación de riesgos del trabajo.

Pese a la recomposición capitalista, la disputa política está exacerbada entre el gobierno y una oposición sistémica donde predomina la «derecha» (la mesa de enlace en 2008; *Clarín* actualmente; los partidos tradicionales: parte importante del PJ y la UCR, junto a otras expresiones menores). La discusión es quien gobierna el capitalismo local. Ambos espacios se necesitan mutuamente para obturar la emergencia de alternativa política.

Luego de la crisis en 2009, la ofensiva de la iniciativa política del gobierno derivó en el 54% de consenso electoral en octubre de 2011. Es una iniciativa sostenida en medidas como la estatización de las AFJP, la Ley de medios o el matrimonio igualitario, y que se continúan hasta hoy con la expropiación parcial de YPF e incluso la potencialidad de reestatizar los ferrocarriles.

El gobierno tiene dificultades sobre su continuidad en el futuro cercano y constituyen desafíos muy importantes los procesos electorales de 2013 y 2015 para revalidar hegemonía gubernamental.

La oposición sistémica no encuentra aún su armado político para disputar la hegemonía gubernamental. Incapaz de articular la mayoría parlamentaria transitoria lograda en 2009, transita un discurso en defensa del republicanismo, con denuncias de corrupción, sin abandonar acuerdos por conveniencia, tal como ocurre en la Legislatura porteña entre el PRO y el kirchnerismo.

III

Desde el otro lado de la lucha de clases, el dato es la emergencia del movimiento de trabajadores en la calle, especialmente remitimos a las movilizaciones del 20 de noviembre y del 19 de diciembre. Esas movilizaciones son producto principal de la iniciativa política de la CTA y del nuevo liderazgo colectivo que propiciamos.

El año culmina con visibilidad de la CTA en la calle, una propuesta que se trabajó desde la fractura orgánica resultante desde las elecciones de la Central en 2010.

Que en 2011 supuso la preparación organizada del activo militante, desde el Congreso de 10.000 delegados el 23 de marzo, preparando la intervención en el conflicto, para construir sujeto social y político en la disputa por un programa que sustentamos en 32 puntos y que junto a la lucha por mejores condiciones de vida de los trabajadores y sus familias, nos disponemos a la disputa del poder en el país.

Que el 2012 significó el aliento a la movilización callejera, especialmente animada desde el 8 de junio, desafiando y convocando a otros espacios de agrupamiento de trabajadores.

En ese marco se destaca la «unidad de acción» con la CGT, alejada de su alianza con el gobierno. La unidad de acción convocó a los trabajadores organizados en sindicatos y el territorio a la lucha por el salario mínimo de \$ 5.000, a la universalización de las Asignaciones Familiares, a la suba actualizada del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, e incluso a su eliminación. Se trató de evidenciar la presencia generalizada de la precariedad, la tercerización y la flexibilidad salarial y laboral. Es un programa de los trabajadores más allá de sus opciones o preferencias electorales, constituyéndose en un programa de la clase trabajadora.

Son estructurales las diferencias de proyecto y modelo sindical sustentado por la CTA desde el inicio a comienzos de los años noventa con el sindicalismo tradicional, burocrático y empresario. Esas diferencias explican también la ruptura política y orgánica transitada en la CTA entre 2006 y el presente. La CTA asume una propuesta anticapitalista, antiimperialista, clasista y de autonomía de los patrones, los gobiernos y los partidos políticos, siendo un proyecto que agrupa a trabajadores, más allá de su organicidad en sindicatos o el territorio.

Pretendemos destacar que lo mejor en la política argentina es la movilización de los trabajadores por sus reivindicaciones, con voluntad de constituirse en sujetos para la transformación política. Es un camino de construcción de política propia de los trabajadores, de instrumentos adecuados para la disputa política. Ese es el principal desafío, constituirnos en sujeto visible que luche por cambios favorables a la clase trabajadora, que pueda constituirse en programa hegemónico del pueblo y dispute el poder en la Argentina, como parte de una acumulación de poder popular superadora de la despolitización y/o despartidización, signo de un tiempo reciente.

Quienes suscribimos esta «Declaración» somos parte de una corriente en la CTA que promovemos una actividad militante es un recorrido coherente con la emergencia del Encuentro Sindical Nuestra América, el ESNA, que este año concentró en México a miles de delegados de más de 300 organizaciones de trabajadores, principalmente del continente Nuestroamericano. En la tierra mexicana pudimos discutir un modelo de construcción de organicidad de los trabajadores diferenciado y en contra de la complicidad y claudicación de la burocracia sindical mundial asociada al ajuste y a las patronales.

Con el ESNA y la Federación Sindical Mundial salimos a la calle en Argentina el 3 de octubre pasado, como parte de un día de lucha mundial contra el saqueo de nuestros recursos naturales y por los derechos de los trabajadores. También cerramos el año el pasado 2 y 3 de noviembre con un Seminario del capítulo argentino del ESNA, donde homenajeamos a dos grandes luchadores por los derechos de los trabajadores de nuestro país: Agustín Tosco y Roberto Mandrik.

IV

Para 2013 pretendemos consolidar nuestra presencia en el conflicto social y político en la Argentina, donde las movilizaciones recientes de fines de 2012 muestran los límites de la situación económica y social de la Argentina.

Nos proponemos ser activos en el fortalecimiento de la CTA, del ESNA y la FSM; para ser parte de la experiencia de cambio político que vive Nuestramérica, con el socialismo cubano, o las innovaciones del «Socialismo del siglo XXI» propuesto desde Venezuela, o el «Socialismo Comunitario» sostenido desde Bolivia. Nuestra inspiración de lucha socialista se asocia a la proclama de José Carlos Mariátegui en el sentido de que el socialismo no será calco ni copia sino creación heroica de los pueblos. Asumimos la centralidad de la clase como punto de partida de todo proyecto emancipador de carácter civilizatorio de época.

La realidad del capitalismo en la región, manifestado en el importante crecimiento económico, más que el promedio de la economía mundial en crisis, se sustenta en la explotación de la fuerza de trabajo y de los recursos naturales, nuestros bienes comunes.

Es por ello que no vemos perspectivas en el modelo productivo y de desarrollo capitalista, y nos desafiamos a ser parte de la novedad en Nuestramérica por alumbrar un mundo nuevo, una sociedad sin explotación de sus trabajadores y pueblos y sin depredación de su naturaleza, de sus bienes comunes.

El movimiento popular de la Argentina fue activo protagonista del comienzo del cambio político procesado desde 2001 hasta el presente, y el desafío que asumimos es avanzar en el despliegue de una propuesta integral de poder popular con hegemonía del movimiento de trabajadores.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012.

*Víctor Mendibil, José Rigane, Julio Gambina, Elia Espen,
Marcos Wolman, Manuel Gutiérrez, Carlos Chile, María Carla Rodríguez,
Hugo Blasco, Pola Monti, Nestór Jeifetz, Julio Acosta, Matías Fachal,*

*Carlos Oroz, Guillermo Díaz, Susana Colli, José Luis Ronconi,
Gabriel Martínez, Leandro del Greco, Gustavo Teres, José Lualdi,
Cristina Camusso, María Elena Saludas, Fernando Pita,
Fernando Cardozo, Marisa López, Beatriz Rajland, Eduardo Schmidt,
Elsa Picado, Mariano Randazzo, Adrián Ruiz, Néstor Dimilia,
María Teresa Nuñez, Daniel Campione, siguen las firmas...*



SEGUNDA PARTE



INTRODUCCIÓN

Por su derivación financiera en los últimos años, existe una imagen crítica sobre el orden capitalista, que deviene en procesos de especulación creciente. Al mismo tiempo se levanta una imagen favorable del capitalismo productivo, en una temeraria aseveración de mejor opinión sobre el capitalismo productivo que sobre el financiero. Solo afirmar que uno sin el otro no funciona, y que producción y circulación son parte de un mismo fenómeno económico social, hace tiempo estudiado y criticado por Karl Marx.

En un mismo sentido, existe una generalizada opinión favorable a la intervención estatal y una crítica al mercado, obviando que ambas categorías deben analizarse desde la disputa que supone su carácter de clase. El Estado es capitalista, socialista o incluso precapitalista. El mercado también necesita de adjetivación, por lo que en sí mismo ni el intercambio mercantil ni la intervención estatal son buenas o malas a priori.

En esta sección efectuamos un análisis crítico de algunas dinámicas que se asocian al proceso productivo y las expectativas que se generan, tanto como al papel del Estado, especialmente en la situación energética asociada a la expropiación parcial de Repsol-YPF. También reflexionamos respecto a debates en torno a un tema crucial como el endeudamiento público y los condicionantes estructurales que genera en la política económica, tanto como considerar las propuestas alternativas. Un eje central de la preocupación a debatir radica en la crítica al modelo productivo y de desarrollo en el campo y la industria, que favorecen los intereses de las grandes transnacionales que controlan el sector productivo de la Argentina.



SALARIOS Y PETRÓLEO EN EL DEBATE ACTUAL

Entre la diversidad de temas que concita la discusión económica y política a comienzos de 2012 se encuentran la cuestión salarial y la petrolera. En materia de salarios se procesa la previa a la discusión paritaria entre patrones y trabajadores, con el monitoreo estatal para que la economía del año no se desmadre, especialmente por el conflicto que puede resultar de la puja distributiva.

La cuestión petrolera se agudizó con la verificación del volumen de importaciones por energía (gas natural y licuado, gasoil, fuel oil y electricidad) de 2011 por 9.397 millones de dólares, equivalente en valores al monto del superávit comercial, que alcanzó el año pasado a 10.347 millones de dólares.

En ambos casos preocupa la evolución de las variables en consideración, sea por el conflicto social, los impactos en la macroeconomía o por el sustento de provisión energética para el presente y futuro mediano.

SALARIOS, INGRESOS POPULARES E INFLACIÓN

Todos los pronósticos auguran un menor crecimiento económico para 2012. Existen expectativas de menores compras desde el exterior, por compradores en recesión, o en desaceleración económica; por lo que preocupan las tendencias del consumo y la inversión, principalmente de quienes actúan en el mercado interno.

La política económica del gobierno pretende mantener los niveles de consumo privado logrados en estos años, afectados ahora por disminución

de subsidios y un recurrente encarecimiento de precios, más allá de los indicadores oficiales de inflación.

Ello explica el nuevo intento de la Secretaría de Comercio por lograr reducciones de precios de algunos productos de consumo masivo, intentando promediar subas y bajas para mantener el nivel de actividad económica y el consumo.

En el mismo sentido apunta la intención de sustituir importaciones para la industria con producción local, lo que supone influir al mundo empresario para cambiar proveedores, sea por propia convicción o estableciendo restricciones a las compras al exterior. Todo indica que se terminan imponiendo las restricciones más que el convencimiento de encarar una nueva sustitución de importaciones, y contrariamente a lo pensado, ante las restricciones al ingreso de algunos productos la respuesta empresarial transita el aumento de precios, convalidados por un consumo de sectores de ingresos medios y altos no sujetos a presiones por el alza que supone atender su canasta de bienes y servicios.

Vale interrogarse si es posible reanudar la «industrialización sustitutiva de importaciones» en momentos de hegemonía capitalista de las empresas transnacionales. No se le puede hablar al poder económico con argumentos sentimentales, pues solo responden a la lógica de las ganancias, de la acumulación y de la dominación.

Se intenta bajar algunos precios, o por lo menos congelarlos en el corto plazo, al tiempo que se pretende estimular la producción local para un modelo de producción dominado por transnacionales, cuya lógica de obtención de ganancias y de inversiones se definen en el marco de la crisis mundial, especialmente grave en los países sede de esas firmas y por lo tanto demandante de recursos para sortear los problemas.

En este marco vale considerar a los salarios y las condiciones de trabajo como un costo de producción, con unos precios que los trabajadores pretenden acrecentar y los patronos reducir. Aunque el gobierno pretende arbitrar con equidistancia, vale confirmar que sus objetivos explícitos apuntan a la reducción de los precios; y el salario es un precio, el de la fuerza de trabajo. Ese precio involucra el sueldo mensual y todos los complementos, sean las Asignaciones Familiares o la ayuda escolar que fueron perdiendo su carácter universal para ser restringidas desde un tope, no corregido en los últimos años y por lo tanto en forma creciente una cantidad importante de trabajadores fue resignando ese beneficio.

Algo similar ocurre con las retenciones del Impuesto a las Ganancias a quienes perciben salario en situación regular. A medida que se incre-

mentan los ingresos, crecientes masas de trabajadores se convierten en contribuyentes, sujetos de tributación.

Las limitaciones de la salud pública y de las propias obras sociales, especialmente en prestaciones de alta complejidad, obliga a los trabajadores y sus familias a destinar sumas importantes con ese fin, detrayendo capacidad de compra para otros consumos.

MODELOS SINDICALES EN DISPUTA

Un elemento sustancial en la defensa del precio de la fuerza de trabajo es la organización sindical y de lucha, deteriorada de forma recurrente bajo el terrorismo de Estado primero y por la ofensiva contra el derecho protectorio del trabajo bajo gobiernos constitucionales.

El poder de los trabajadores fue atacado por el terror directo ejercido sobre los cuerpos y las mentes. Sobre esa base operó el terror a la hiperinflación y al desempleo o la precariedad. El modelo sindical de negociación opera sobre esas condiciones estructurales, determinadas por la impunidad empresaria y la dominación.

La subordinación de buena parte del movimiento sindical al proyecto político hegemónico contribuyó en estos años a limitar la protesta, aunque la coyuntura política de enfrentamiento del titular de la CGT con el gobierno alienta la potencialidad de una mayor conflictividad en unidad de acción con la CTA, más allá de modelos sindicales diferenciados.

En sentido general, la lucha de clases se manifiesta en materia económica en la disputa por la apropiación de la renta nacional. Los capitales más concentrados tienen en los mecanismos del mercado, especialmente en la suba de precios, la capacidad de apropiarse de una cuota mayor de esa riqueza social. Así, la inflación es un fenómeno redistributivo de la riqueza, a favor de aquellos que tienen condiciones para imponer los precios.

La inflación es un dato de la realidad y los trabajadores sufren el deterioro de la capacidad de compra de sus ingresos laborales. Ni hablar de aquellos que reciben «planes» a valores congelados y fuertemente afectados por el crecimiento de los precios de una canasta familiar crecientemente de subsistencia.

Un dato novedoso de la coyuntura es la tendencia creciente al reclamo y la protesta del movimiento de trabajadores, haciendo más complejo el escenario político y económico, pues ya no está sola la impunidad patronal y el rumbo unilateral de aliento a las ganancias empresariales. La

constitución de subjetividad entre los trabajadores habilita el debate sobre modelo sindical y proyecto productivo y de desarrollo.

EL PETRÓLEO Y EL DEBATE POR LA SOBERANÍA

La cuestión es historia antigua y se remonta al fenómeno de la privatización petrolera, hace ya veinte años, cuando Menem y Cavallo iniciaron el proceso de entrega de la empresa pública número uno de la Argentina: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, de la que solo quedó la sigla de fantasía YPF bajo la propiedad de la española Repsol y últimamente incorporado a la propiedad y gestión el Grupo Petersen, de Enrique Esquenazi.

Entre las primeras medidas luego de las elecciones de renovación presidencial se dispuso la obligatoriedad de liquidar el 100% de las ventas al exterior a empresas mineras y petroleras. Se argumentó la necesidad de ingresar divisas al país ante las limitaciones estructurales que se presentaban para sostener el equilibrio de la macroeconomía con superávit comercial y fiscal.

Se agudizó el conflicto con las petroleras en enero con la denuncia gubernamental por sobreprecios en la venta de gasoil al por mayor, lo que obligó a una disminución de precios de venta. Ahora se adiciona la quita de subsidios por 2.000 millones de pesos por los programas Refino Plus y Petróleo Plus, con el argumento de objetivos de inversión cumplidos. Está claro que mejora la ecuación fiscal y afecta ingresos de las petroleras, principalmente YPF.

La amenaza de la estatización apareció en escena con el objeto de presionar a la mayor petrolera a reinvertir sus excedentes y cooperar en resolver el déficit energético, agudizado por las condiciones de cambio climático que provoca el mayor uso de la capacidad instalada. La importación energética es ya una constante y de difícil solución en el corto plazo si no se modifica el modelo energético en curso desde la privatización petrolera, sellada con la reforma constitucional de 1994 con la «provincialización» de los recursos naturales.

El petróleo es insumo estratégico de la producción contemporánea y es parte de la crisis capitalista en curso. La crisis energética y medioambiental son parte de la misma crisis mundial del capitalismo y convoca a discutir si el camino de soluciones debe transitar la profundización del modelo energético propiciado desde la privatización, o si se debe pensar en términos alternativos.

Ello supone ir más allá de la cuestión petrolera y energética, pues lo que se discutiría es el modelo productivo del cual el petróleo es insumo

estratégico. Significa debatir en términos de soberanía energética otro modelo productivo y otra integración, asentada en la articulación productiva regional para satisfacer necesidades populares y no una lógica de ganancias sustentadas por las transnacionales.

IR MÁS ALLÁ DE LA COYUNTURA

En rigor, la discusión salarial y petrolera pone de relieve la necesidad de analizar el trasfondo estructural del crecimiento económico de estos años, y más aún la estructura económico-social derivada de ello. Es una cuestión que supone discutir beneficiarios y perjudicados del orden económico contemporáneo, exacerbado con la crisis en curso. Se trata de responder a la crisis capitalista desde otro orden social posible, eje de la argumentación emancipadora contemporánea.

Buenos Aires, 8 de febrero de 2012.



SOBRE LAS CONCESIONES PETROLERAS

Los gobernadores de Chubut y Santa Cruz anunciaron esta semana la caducidad de la concesión de cinco áreas petroleras a YPF, que representan el 7,4% de su producción, especialmente en Chubut, ya que la proporción productiva de las áreas de Santa Cruz son menores al 0,5% de la producción de la empresa. La decisión no afecta por lo tanto otras áreas de mayor producción de YPF-Repsol, tal como las áreas de Mendoza o Neuquén, aunque la medida puede ser imitada ante la crisis de abastecimiento de combustibles y de producción energética que insumió el año pasado nada menos que 9.500 millones de dólares de importaciones.

Se trata de una medida que plantea interrogantes a futuro, no solo por la respuesta de la empresa en el ámbito local y mundial, sino y principalmente por lo que harán esas y otras provincias, o el ente que las agrupa según los intereses hidrocarburíferos, la OFEPhi (Organización Federal de Estados Provinciales Hidrocarburíferos), y el gobierno nacional con relación a Repsol y las otras empresas concesionarias. Existen varios interrogantes. ¿Quién explotará esos pozos? ¿Otra empresa privada, tal el caso de PAE, Panamerican Energy, de importante peso por la producción en esas y otras provincias, o se transitará el camino de dotar de recursos suficientes a Enarsa en asociación con otras empresas públicas o privadas?

La sustentación de la medida está en la pérdida de producción de esas áreas petroleras. Una información que surge de las propias empresas, pues el Estado perdió mecanismos de control sobre reservas gasíferas y petroleras, y elevada laxitud a la hora de controlar la actividad. En Santa Cruz cesaron las concesiones en Barranca Yankowsky, Los Monos y Cerro Piedra-Cerro Guadal Norte, de mínima incidencia en la producción total

de YPF. En Chubut, las áreas son El Trébol-Escalante donde la pérdida de producción entre 2007 y 2011 fue de 13,4% según fuentes oficiales de la provincia; y Campamento Central-Cañadón Perdido donde la producción de petróleo se redujo un 23,6% entre 2007 y 2011. En ambas áreas se supone entonces una pérdida de 163.000 metros cúbicos de petróleo, que al precio actual suponen unos 300 millones de pesos.

Toman desde ahora carta en el asunto las estatales Petrominera de Chubut y Fomicruz de Santa Cruz, las que interesarán a los inversores privados o públicos. Ello puede incluir a empresas extranjeras, entre ellas de la región latinoamericana (Brasil, Venezuela) o extracontinentales (China). Convengamos que no da lo mismo una u otra decisión. Alguna vez comentamos la diferencia de política empresaria entre la estatal venezolana y la brasileña, donde PDVSA privilegió una articulación productiva y de distribución que involucra a dieciocho naciones de Centroamérica y el Caribe como parte de su propuesta de constituir Petroamérica, potenciando una estrategia de integración alternativa, con precios y financiamientos favorables para un desarrollo regional autosostenido que privilegie la discusión crítica del modelo productivo sustentado en la producción y acumulación de ganancias. Esta lógica es la que surge de los emprendimientos que empuja Petrobras fuera de Brasil. En el caso chino hay que adicionar la necesidad de importar recursos naturales a la constante ampliación productiva de la potencia asiática. Por ello es que hablamos de desafío ante la decisión de cancelar concesiones a la transnacional Repsol, pues no alcanza con afectar a una empresa privada extranjera, sino encaminar una política soberana en materia energética, y ello supone la integración y la economía de escala pensando en otro modelo y lógica productiva.

La reforma constitucional de 1994 delegó la soberanía de los recursos naturales en las provincias. Fue una disposición necesaria en el proceso de privatización, para involucrar a las burocracias políticas provinciales en la entrega del petróleo y el gas, todo a cambio de regalías. Ahora constituye un límite de la Nación para la recuperación soberana de la energía. Aún con esos límites del orden constitucional, la medida puede ser imitada por otras provincias (necesitadas de recursos fiscales que la explotación petrolera puede acercar) instalando en la agenda de discusión la quita de las concesiones, algo impensado hasta hace poco. La falta de combustible y la elevada factura de la importación energética aceleran los tiempos de una discusión política y económica que cuenta con adhesión de buena parte de la sociedad. En estos días se repasa el balance de las privatizaciones, la del petróleo en particular, donde se evidencia que el propósito concreto se asentó en la obtención de ganancias de las concesionarias, que para el caso de Repsol remitió en la última década el 97%

de sus excedentes económicos, transfiriendo en promedio 1.300 millones de dólares anuales, unos 13.000 millones de dólares, casi la totalidad de la valuación actual de la empresa.

Insistamos que estamos hablando de un recurso estratégico que la Argentina enajenó en el momento que las reservas internacionales de hidrocarburos están en un 90% en manos de los Estados, y que la disputa por el petróleo no es solo una cuestión económica. Se trata del principal insumo de un modelo productivo que necesitamos discutir, no solo para ahorrar energía, sino para disputar el sentido de la producción y por ende del consumo. Sea por cuestiones coyunturales o estratégicas, la Argentina necesita asumir el desafío de recuperar soberanía energética.

Buenos Aires, 17 de marzo de 2012.



INSERCIÓN DE ARGENTINA EN EL MUNDO (CUMBRE DE CARTAGENA Y CASO YPF)

El debate en la coyuntura se concentra en la inserción internacional de la Argentina. Por un lado surge la discusión sobre qué hacer con YPF, la política hidrocarburífera y la presión del Estado español y las autoridades de la Unión Europea. Por otro, los debates en Cartagena sobre las cumbres presidenciales de los países de América que excluyen a Cuba, y donde la Argentina intenta un pronunciamiento solidario con la causa Malvinas en el sentido en que lo viene haciendo Nuestramérica.

La cuestión petrolera tiene sus bemoles, pues existen muchas hipótesis puestas a rodar por informaciones de prensa y poco fehacientes políticas comunicadas por el gobierno para su discusión al conjunto de la sociedad, o por lo menos al Parlamento. Desde esas hipótesis es que voceros del gobierno español anticiparon probables sanciones a la Argentina. Es el mismo camino asumido por EE.UU. y otros países sobre medidas proteccionistas aplicadas por Argentina.

El dato concreto es la quita de concesiones petroleras a Repsol y otras compañías por parte de los gobiernos provinciales, los que ejercen la gestión de la propiedad provincial de los recursos naturales en la Argentina. ¿Esas quitas suponen un cambio de política en materia de hidrocarburos? Hasta donde sabemos, los pozos se ofertan en licitaciones para ser explotados por otras empresas transnacionales, en todo caso asociadas a nuevas empresas estatales provinciales sin recursos, tecnología o experiencia, algo similar a lo que nacionalmente se lleva adelante con Enarsa asociada a emprendimientos económicos con otras empresas extranjeras.

Tal como venimos sosteniendo, falta un debate sobre qué hacer con YPF, y la ecuación no se agota en reestatización o reprivatización. El fracaso de la privatización es el resultado actual luego de veinte años de iniciativa privada (todo bajo periodos constitucionales); y esa política ganó consenso ante el deliberado debilitamiento de la experiencia estatal, sea por subordinación de la burocracia que gestionaba la empresa, vendiendo petróleo subsidiado a Esso o a Shell, o endeudando la empresa pública en momentos de alza internacional de los precios del petróleo. El estatismo y el privatismo fracasaron, por lo que se abre paso la «socialización», lo que supone la intervención del Estado, los trabajadores y la sociedad en su conjunto, desde que la energía es un derecho y no una mercancía.

En paralelo, ello implica una discusión sobre la forma de ejecución del proyecto, donde lo que se discute es la expropiación o la indemnización, tema que no puede atenderse al margen de la recurrente remisión de utilidades al exterior, que para el caso Repsol supuso la transferencia del 97% de sus ganancias, cubriendo así la crisis en España con excedentes generados en la Argentina. Claro que a la hora de pagar o cobrar, los gobernadores reclaman lo propio, y eso nos lleva a sugerir que no puede abordarse la cuestión petrolera sin una reforma fiscal que asegure recursos para las provincias, especialmente en gasto social, al tiempo que se revierta la propiedad de los recursos naturales al Estado nacional.

Respecto de la Cumbre de las Américas, no solo se trata de dejar de excluir a Cuba de esas reuniones, y de la solidaridad para con Argentina y su reclamo sobre la soberanía en las Malvinas, sino de reconocer los cambios ocurridos en la región luego de dieciocho años de «cumbres». Cuando las cumbres se iniciaron en 1994, con Clinton en la administración estadounidense existía un auge de las políticas neoliberales que bregaban por la liberalización de la economía, y por ello el principal proyecto de las cumbres presidenciales era el ALCA.

La situación es hoy muy distinta. Por un lado, la realidad es la crisis mundial del capitalismo y la crítica a las políticas hegemónicas en nuestra región en los ochenta y noventa. Por el otro, hoy existen propuestas de integración regional que excluyen a Norteamérica en su configuración, tal el caso de la CELAC o Unasur, que teniendo en su seno disputas de rumbos estratégicos sobre el modelo de desarrollo, suponen una mirada centrada en respuestas desde la propia región.

Un tema específico en el cónclave en Colombia lo constituye la relación bilateral entre el presidente de EE.UU. y la primera mandataria Argentina. En ese encuentro se supone que Obama reclamará por pagos a

sentencias contra la Argentina en el CIADI y sobre los efectos de las restricciones a las importaciones.

Es un dato que la inserción subordinada de la Argentina con Europa y EE.UU. supone mayor dependencia y presión imperialista sobre el país, mientras que la creciente vinculación con la región Nuestramericana y otros países del sur del mundo implica transitar el rumbo de la potencial independencia, claro que ello no es considerado sin beneficio de inventario por aquellos que hegemonizan el sistema mundial del capitalismo.

Buenos Aires, 14 de abril de 2012.



LA EXPROPIACIÓN DE YPF Y LOS DEBATES HABILITADOS

El pasado lunes 16/4/2012 la presidenta Cristina Fernández anunció la expropiación del paquete mayoritario de YPF (en manos de Repsol), lo que supone la transferencia de un 51% del capital accionario a manos del Estado, distribuido entre el Estado nacional con 26% y los Estados provinciales petroleros con 25%. Se asegura así el control estatal de la gestión de la empresa que lidera el mercado nacional de hidrocarburos (aproximadamente un tercio).

Conviene aclarar que en el anuncio presidencial se manifestó que no se trata de una estatización. Que la forma jurídica continua siendo una sociedad anónima, con capital abierto a inversores locales o externos. De hecho, Repsol continúa con tenencias de capital por el 6%, el Grupo Petersen (familia Eskenazi, de origen local) seguirá con poco más del 25%, transformándose en el segundo inversor detrás del Estado nacional. De hecho, la propiedad quedará del siguiente modo: con el 26,03% el Estado nacional; con el 25,46% el Grupo Petersen; con el 24,99% los Estados provinciales; con el 6,43% Repsol y un remanente del 17,09% de circulación vía bolsas.

Junto a la presentación del proyecto de expropiación en trámite parlamentario, se decidió la intervención de la empresa, desplazando a la actual gestión con un equipo de funcionarios del Poder Ejecutivo que incluye al Ministro de Planificación, al Viceministro de Economía y al Secretario de Energía.

APOYOS Y CRÍTICAS

Hasta ahora la medida generó un amplio apoyo en el sistema político y en ámbito sociales, con las lógicas críticas de un arco opositor en una

perspectiva de «derecha» y privatista por principios ideológicos; y una airada respuesta del gobierno español, que intenta tapar su propia crisis identificando a la transnacional petrolera con los intereses de España. Esa misma posición fue asumida por la mayoría del Parlamento europeo, con la excepción de verdes y rojos. Varias organizaciones y personalidades del movimiento popular, los indignados y la izquierda española y europea se manifestaron en solidaridad con las decisiones soberanas de la Argentina y contra la transnacional petrolera y las manifestaciones de sus Estados.

Uno de los argumentos principales de la crítica ideológica alude a la «seguridad jurídica» de los inversores y a las potenciales demandas en tribunales internacionales, caso del CIADI. El país queda así condicionado por el chantaje de la institucionalidad neoliberal suscripta en los noventa, sean los tratados bilaterales de inversión o la adhesión al CIADI. Son varios los países que denunciaron su pertenencia al ámbito litigioso del Banco Mundial, tal como ocurrió con Venezuela, Bolivia o Ecuador; o que nunca ingresaron, tal el caso de Brasil. Si bien debieron denunciarse previamente esos acuerdos de fomento de la dependencia, las amenazas actuales exigen la denuncia de los tratados en tiempo perentorio.

Está previsto un Comité de gestión compartido entre el Estado nacional y los Estados provinciales, lo que habilitó la demanda de otras provincias no petroleras para receptor los beneficios de la producción. Existen provincias que sin tener reservas en su territorio procesan combustibles, tal el caso emblemático de Buenos Aires, a la sazón el Estado provincial más extenso y de mayor asentamiento poblacional que acredita el mayor volumen en destilación de crudo y procesamiento de gas. El argumento esgrimido por algunos gobernadores remite a la distribución extendida del fondo sojero entre los municipios de todo el país, con independencia del territorio de plantación de la oleaginosa.

Más allá de los apoyos y críticas a la cuestión esencial: la expropiación parcial, se abrió un debate sobre los alcances de la medida. Entre muchos interrogantes se discute el porqué se limita la medida solo del 51% del capital y no el 100%. En ese sentido también se considera que no alcanza con la estatización como propuesta y se interroga si lo que corresponde no debe pasar por la socialización, involucrando en la gestión de la empresa a los trabajadores y a la sociedad, en su calidad de consumidores y usuarios con derecho a la energía.

No solo se analiza la cuantía del capital, sino también si corresponde o no la indemnización, un tema relegado en el proyecto al dictamen del Tribunal de Tasación. En el asunto interviene desde el valor de contabilidad hasta la valuación de las acciones en el mercado bursátil. Son va-

lores mediados por el daño ambiental y el deterioro de la infraestructura; incluso la consideración de la inversión originaria y la nula reinversión, especialmente con el hecho verificado de la remisión de utilidades por casi el 100% de lo obtenido por YPF.

POLÍTICA ENERGÉTICA EN DISCUSIÓN

Un aspecto central para el presente y el futuro es la política energética, ya que la expropiación supone la crítica a lo acontecido en las últimas dos décadas. No solo se trata de baja de la producción de YPF, sino que es una situación que involucra al conjunto del sector productor de hidrocarburos. En la cuenta negativa se registran la disminución de las reservas de petróleo y gas, que explica el gasto de 9.300 millones de dólares en importaciones de combustibles durante 2011, más del doble que en 2010, y menos de lo previsto hasta ahora para el año 2012.

El balance sobre la política energética es negativo y no solo se adjudica a la cuenta de la iniciativa privada, sino al descontrol oficial, desde la presencia del Poder Ejecutivo en el directorio (avalando la gestión), sino desde todos los ámbitos de contralor, sean nacionales o provinciales.

La intervención ya habilitó conversaciones con otras petroleras para asociarse en el aumento de la producción. Es quizá una señal de continuidad en la gestión favorable a la iniciativa privada, especialmente extranjera.

El camino a transitar tiene que privilegiar una auditoría a fondo, sobre la gestión y la producción, para en ese camino transitar nuevos rumbos, aprovechando el carácter excedentario de YPF para una reinversión productiva y considerar la utilización de otros recursos propios del Estado, lo que supone una amplia discusión en dos sentidos. Uno remite al origen de esos fondos; y otra al destino de la producción, ya que es tiempo de discutir el para qué de la producción de hidrocarburos. La indicación de un objetivo por el auto sostenimiento, contenido en el proyecto del Poder Ejecutivo significa la continuidad de un modelo productivo y de desarrollo que también debe analizarse.

¿Hay que continuar con el uso de hidrocarburos para un modelo productivo que favorece la dependencia tecnológica, productiva, económica y financiera? ¿Es posible otro destino para los hidrocarburos?

En ese sentido, puede pensarse otra inserción productiva mundial del país, pensando en la soberanía energética ampliada a Nuestramérica, integrando esfuerzos económicos y tecnológicos para un modelo productivo y de desarrollo que asegure soberanía alimentaria y se sostenga desde

la soberanía financiera. Lo que se discute es la soberanía y la integración. Son dimensiones del problema que cuentan en el marco de la crisis energética, en tanto parte de la crisis de la economía mundial.

Con la expropiación parcial de YPF son diversos los aspectos que se involucran en el debate nacional y mundial. La respuesta neocolonial o imperialista proveniente de España y de Europa da cuenta de que no existen temas específicamente nacionales, y que el debate confluye recurrentemente en la discusión del orden mundial.

Buenos Aires, 21 de abril de 2012.

“LA GENTE DE LA PAMPA SOJERA BUSCA EMIGRAR”¹

En épocas en donde tanto se habla y se comenta de *modelo*, nos sentamos con el economista Julio Gambina a que explique, luego de haber publicado «Afloran los límites del modelo», qué es lo que entiende por ello. La soja, las estatizaciones, la ecología, las mineras y la vida humana en medio de todo.

Escudando una foto del *Che* y un retrato de Rosa Luxemburgo, Julio Gambina (www.juliogambina.blogspot.com.ar), presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, acaba de firmar un documento del grupo de Economistas de Izquierda titulado «Afloran los límites del modelo» (www.rebellion.org/noticia.php?id=147522). En su oficina porteña, despliega su acento sanjuanino para invitar a María Elena Saludas, coordinadora nacional de la Asociación por una Tasa a las Transacciones financieras especulativas para Ayuda a los Ciudadanos (ATTAC, www.attacargentina.com.ar), a sumarse a esta charla sobre el monocultivo de soja, el modelo de desarrollo y producción que implica, y sus alternativas.

¿Dónde nace la relación entre la economía y la ecología?

JG: El modelo de desarrollo y producción agroexportador extractivista tiene como un elemento central la depredación de los bienes comunes y la naturaleza en toda América Latina y el Caribe, junto con su población. Por eso no se puede separar economía de ecología. La disciplina de la economía nace como economía política. Es una disciplina de análisis del modelo productivo de desarrollo capitalista que nació junto con él y

¹ Entrevista original en <www.nosdigital.com.ar/2012/04/las-poblaciones-cercanas-a-la-pampa-sojera-buscan-emigar>.

se instaló a nivel mundial. Hago estos comentarios porque cuando uno piensa en América Latina y el Caribe, tiene que entender que es un territorio funcional a la acumulación originaria del capital que se desarrolló entre los siglos XIII y XVIII. No puede pensarse, por lo tanto, al capitalismo desde el origen sin la destrucción de la población y sus recursos. Esa destrucción es fundacional a la Revolución Industrial europea. Estamos viviendo ahora una época en que nuevamente América Latina, incluso los países emergentes –que es una denominación que hacen los organismos financieros internacionales para señalar países que ofrecen condiciones de alta rentabilidad a los capitales externos– vuelve a ser funcional al capitalismo desarrollado: Europa, Estados Unidos y Japón.

Dice que vuelve a ser funcional. ¿En algún momento dejó de serlo?

JG: En los últimos 150 años, el principal insumo del modelo productivo ha sido el petróleo. Hay una crisis energética que supone el estancamiento del stock de reservas hidrocarburíferas. La tendencia es que se agoten por el consumo depredador. Por eso los principales ideólogos del capitalismo piensan en un capitalismo verde. Lo ecologista había aparecido como una reivindicación de izquierda en las décadas del sesenta o setenta, cuando empezó a notarse el tema de afectación de la naturaleza por parte del modelo productivo. Lo que hay ahora es que la clase dominante a escala mundial se está apropiando de ese discurso verde. La discusión de los setenta, de la alianza verde-roja, por la que surgió el ecosocialismo –la ecología política, una vinculación de marxismo con defensa del medioambiente–, fue apropiada por la clase dominante. El capitalismo verde alude a una concepción, planteada por Barack Obama en la cumbre de Copenhague en diciembre de 2009, de que ellos se van a encargar de compensar el problema que genera el modelo productivo contemporáneo, es decir la contaminación del aire y del agua, la tala de bosques... «Lo vamos a compensar con bonos de carbono», dicen. No proponen cambiar el modelo productivo para que no se sigan afectando los recursos naturales, sino frenar el desarrollo productivo del resto de los países del mundo y que ellos mismos lo compensen. A partir de ahí lo incorporan al mercado especulativo de los bonos del carbono para contrarrestar la crisis climática. Para nosotros no hay crisis climática, sino un resultado del mismo modelo. El planteo de la economía verde está muy asociado a la explotación de los recursos naturales. Si uno mira cierta topografía de la Argentina con la expansión de la soja, ve que se está tornando cada vez más verde. Ya no es por pasturas del ganado, por ejemplo, sino por este monocultivo. La economía chaqueña, sustentada en la economía del algodón, hoy está invadida por la soja, por ejemplo. Los lugares que no penetró son los que tienen minerales como recurso principal, como San Juan.

¿Son incompatibles soja y minería en un mismo territorio?

JG: Son incompatibles por la disputa del uso del agua, que a su vez le quitan a la agricultura familiar. Los recursos naturales involucran en un mismo nivel de gravedad la explotación minera y la sojera. Se ha generalizado la extensión sojera por el carácter del desarrollo agrícola en Argentina, pero al minero hay que prestarle atención porque es reciente, producto del pacto Argentina-Chile de 1996. Sin embargo, crecientemente van a aumentar las inversiones transnacionales, del mismo modo que avanzaron en el ciclo sojero: la dominación que tienen las transnacionales de la alimentación y biotecnología en el paquete tecnológico. El tema no es tanto el pequeño propietario de tierra donde se planta soja, sino precisamente el paquete tecnológico requerido para que avance el proyecto sojero. Por eso el problema hay que verlo integralmente: la producción, la distribución –que incluye la privatización de los ferrocarriles, y las terminales privadas de puertos– y exportación. El ciclo completo está manejado por corporaciones transnacionales.

MS: Cuando hablamos de modelo de producción y distribución tenemos que agregarle consumo. Las personas ya no son ciudadanos sino consumidores. Con el planeta finito que tenemos, este nivel de consumo es imposible de sustentar. Por eso cuestionamos también que se hable de desarrollo sustentable en el marco de este modelo. El alimento pasa a ser una mercancía más. Se especula en Bolsa quién fija el precio de la soja, el trigo y el maíz. Todo pasa a ser una mercancía, hasta, en consecuencia, la vida del hombre. Es imposible continuar con este ritmo de crecimiento si hay exclusión. Hay gente que tiene que venirse del Chaco, de Formosa, de Salta, porque sus tierras son tomadas para poder, en el caso de Argentina, cultivar soja. El debate pasa también por cuestionar el actual modelo de consumo, absolutamente irracional, en el mundo entero.

JG: El planteo ideológico que se difunde es «Aprovechemos este momento. El mundo pide soja, démosle soja». La producción es la que determina las condiciones de consumo. China, que está incorporando una cantidad enorme de población a la producción, está modificando la dieta alimentaria. Por eso, buena parte de la soja que importa es para consumo de animales que serán consumidos por ellos en su cambio de dieta.

¿Cómo afecta al productor este ciclo de consumo?

JG: Lo que defienden los principales centros ideológicos de las clases dominantes de la Argentina es aprovechar este momento bajo las condiciones de organización de la producción: concentración de la tierra, del paquete tecnológico. Quienes exportan son un pequeño grupo de transna-

cionales, igual que quienes manejan el paquete tecnológico. El productor con la cosecha ya no genera sus propias semillas, sino que vuelve a necesitar ese paquete tecnológico que le venden. Se financia con los *pools* de siembra, que tienen la forma de profesional de pueblo que le sobra el dinero e invierte. El tema no son los pequeños fideicomisos, sino los gigantescos *pools* de siembra que manejan lo principal de la producción.

¿Regionalmente, cómo se piensa el problema?

MS: Está instalado en el sentido común que este modelo es redituable. La soja en sí no es mala, sino el monocultivo en poder de las transnacionales. Como los gobiernos de toda América están de acuerdo con eso, todo, hasta la infraestructura, está en función de la extracción de materias primas.

JG: El esquema de este modelo que se hace en el marco de un programa que defienden las corporaciones transnacionales y los principales estados capitalistas del mundo es la liberalización de la economía mundial para que haya fronteras abiertas para el capital, las mercancías y los servicios; no para las personas. Por eso la Iniciativa para la Integración de Infraestructura Regional de Sudamérica hay que entenderla como un mecanismo de inserción subordinada de América Latina y el Caribe en la economía mundial. El Mercado Común del Sur está especializado en la división internacional del trabajo como el lugar donde se produce la soja del mundo. Paraguay y Uruguay tienen incluso, proporcionalmente en cuanto al terreno cultivable, más soja que Argentina y Brasil.

El gobierno habla de industrializar la ruralidad.

JG: En las aceiteras, por ejemplo, hay trabajo, pero es mínimo porque está todo muy mecanizado. El principal tema es que no es una producción difusora de fuerza de trabajo. Solo a modo de ejemplo, en el Chaco, una extensión de 60 hectáreas que producía algodón en el ciclo *productivo* anterior involucraba como fuerza de trabajo, en distintos momentos del año, a 40 personas. Hoy esa misma extensión de tierra, prácticamente no requiere fuerza de trabajo. Es un mecanismo expulsor de fuerza de trabajo. Movimientos como *Paren de Fumigar* tienen que ver con que poblaciones cercanas a la pampa sojera buscan emigrar porque las fumigaciones afectan las condiciones de desarrollo. A partir del paquete tecnológico que implica el uso de pesticidas, herbicidas, que incluso dependen del petróleo, no hay necesidad de desmalezar –la cosechadora levanta la cosecha y atrás suyo, viene la nueva siembra directa. En función de los precios internacionales, también se arruinan los suelos porque los productores no rotan los cultivos para recuperar los nutrientes de la tierra. La creciente

producción de soja es una exportación de tierra y de agua, no solo sale el poroto y el aceite. Algunos explican que América Latina está fuera de la crisis porque hay mucho crecimiento. Es un error. El fuerte crecimiento está ligado a los altos precios de las materias primas necesarias para el desarrollo de los países centrales. El ajuste materializado en América Latina en los setenta y los ochenta es el que se está haciendo ahora en Europa. Se está cerrando el ciclo del ataque del capital al proteccionismo keynesiano.

¿No puede ese crecimiento ser un recurso de las ideas de izquierda?

JG: Los que dominan el paquete tecnológico de base de este desarrollo productivo son transnacionales. Se ve muy claramente en la Argentina que lo que se incrementó durante el crecimiento de la economía fueron las remesas de utilidades. En la década del noventa lo más importante era el pago de intereses y capitales de la deuda y, en menor medida, las envíos al exterior. A ese modelo lo definen como especulativo de valorización financiera. En los últimos diez años, lo principal no es el pago de intereses y capitales, sino las remesas de utilidades al exterior. Ambos terminan con la salida de capitales. Quienes dominan el ciclo productivo contemporáneo siguen siendo las corporaciones internacionales. Venezuela le propuso a América Latina crear Petroamérica para encarar una fórmula de desarrollo compartida. No tuvo mucho éxito. Solo respondieron los países del Petrocaribe, dieciocho países del Caribe y Centroamérica cuyo peso es minúsculo. El principal comprador del petróleo venezolano sigue siendo Estados Unidos. En América del Sur, Brasil tiene Petrobras, que actúa como una transnacional más. La expropiación de Repsol en Argentina supone discutir cuál es la política económica que se lleva adelante y quiénes son los beneficiados y quiénes los perjudicados. Se trata de pensar en función de qué se explotan los recursos naturales, y cómo se tiene en cuenta a los intereses de los campesinos, trabajadores, pueblos originarios. El crecimiento actual de América Latina no está resolviendo una mejor calidad de vida de la población.



LUEGO DE LA EXPROPIACIÓN: ¿PETRÓLEO PARA QUÉ?

La expropiación parcial de YPF constituye una gran iniciativa política, verificada en la amplísima votación favorable en el Parlamento argentino y en la consideración de la opinión pública. Podría decirse, como sostuvimos hace poco, que el fin del consenso privatizador es un dato de la realidad, y un interrogante a futuro es sobre otras áreas estratégicas que en los noventa fueron entregadas a la iniciativa privada. Algunas de las cuales son muy rentables, tal el caso de las telefónicas, y otras deficitarias, caso del transporte, especialmente ferroviario.

Incluso, más allá de la renta, debiera pesar a la hora de definir el carácter de una explotación, si privado, estatal, o «social», la «utilidad para la comunidad» de esa producción o servicio. Un ejemplo es la actividad financiera, mayoritariamente privatizada y extranjerizada. Nuestro comentario apunta a pensar más allá de la recuperación de la gestión estatal de la principal petrolera de la Argentina y remite a un debate sobre el papel del Estado y de la sociedad en su conjunto en la gestión cotidiana de los asuntos económicos, o sea discutir el porqué y el para qué; los cómo y los cuándo de la producción y circulación de bienes y servicios.

Desde el próximo lunes 7 de mayo de 2012 rige la nueva legislación, coincidente con una nueva gestión designada por el Poder Ejecutivo hasta la normalización vía asamblea de accionistas, la que además definirá en el nuevo marco legal la política de la empresa, que como sabemos es «testigo» del sector de hidrocarburos y por ende clave a la hora de pensar la política energética y petrolera. El interrogante es entonces ¿petróleo para qué? A responder desde las consideraciones legales de una actividad de «interés público» y el «autoabastecimiento» proclamado en la legislación.

Siendo el petróleo un insumo estratégico de la producción, conviene discutir el modelo productivo en curso, el sentido principal de la producción local, sus destinatarios y el patrón de consumo que favorece.

Nuestra reflexión apunta a considerar el sentido de la producción en la Argentina, lo que implica hablar y discutir sobre los distintos sectores productivos. ¿Qué se produce, cómo se hace y para quién se produce? Ello supone discutir la producción primaria, sea en agricultura, ganadería o minería; pero también la industria y la cadena de valor en la provisión de insumos industriales; tanto como en la construcción y especialmente en la energía. Para que se comprenda mejor, lo que se pretende discutir es si el modelo en el agro tiene que privilegiar la soja y el biocombustible, con destino principal en el mercado mundial, apoyado por precios internacionales muy favorables, o si esa producción tiene que involucrar el debate sobre población, territorio y defensa de los recursos naturales. Si el privilegio es la «soberanía alimentaria» como proyecto nacional, regional o mundial; o si lo que define es la apropiación de renta del suelo, aún en el caso de que mayoritariamente se apropie por el Estado nacional vía retenciones, o los municipios y provincias vía redistribución del fondo sojero.

Me detengo en el ejemplo de la soja por su extensión en el territorio e importancia en el cambio cultural que está generando, sea por la expansión de la frontera agrícola, por la subordinación al mercado mundial, por el despoblamiento del campo, o por sus efectos relativos a la salud por la fumigación. Claro que también podríamos hablar de la megaminería a cielo abierto y sus múltiples impactos económicos, sociales y culturales. En ambos casos existe un «efecto riqueza» que son los ingresos que se derraman por el circuito privado o el estatal (vía retenciones), procesos imponderables de evaluar en el mediano y largo plazo. No sería distinta la reflexión sobre la construcción, la producción energética o los procesos industriales. ¿Qué necesidad se debe resolver en la construcción? Por ahora, en la última década, el privilegio fue el resguardo de valor, la especulación o la transformación de activos líquidos en propiedades. Es cierto que existe vivienda social de reciente construcción, pero no es lo que define el *boom* inmobiliario de estos años. En el mismo sentido, ¿qué transporte, el público o el privado? ¿Se debe continuar el aliento al automotor, con 60-70% de exportación e importación? Una u otra definición, en cada caso comentado supone una orientación de uso del petróleo extraído por YPF.

Existen quienes señalan que estos interrogantes solo pueden resolverse si la expropiación hubiese sido del 100%, o si se en lugar de mantener una S.A. se hubiese optado por una empresa estatal. La opción elegida parte de considerar que con el 51% y una gestión profesional bajo direc-

ción de una política del Estado alcanza para resolver de manera soberana. Lo que no ha sido suficientemente discutido es cuál es esa definición política de matriz energética, del sentido de la producción petrolera y gasífera, del modelo productivo y de desarrollo de la Argentina, y en todo caso, de la inserción de esa política local en el escenario mundial. ¿Se trata de una inserción competitiva en el mercado mundial, buscando asociaciones con las transnacionales que definen el mercado, o se piensa en propuestas alternativas asociando la definición nacional en el marco de la integración regional?

Muchos interrogantes no pueden responderse en la coyuntura, y son pensados para habilitar un gran debate, pero convengamos que esa discusión solo puede hacerse desde el gran consenso que supone la expropiación, aún parcial, de YPF.

Buenos Aires, 5 de mayo de 2012.



DECLARACIÓN DE MAR DEL PLATA: "SOBERANÍA ENERGÉTICA, UN DESAFÍO PARA NUESTRAMÉRICA"

Con la presencia de representantes de gremios de la energía de Uruguay, Perú y Venezuela finalizó en la sede del sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata el Congreso sobre Crisis Energética y Soberanía organizado por Fetera. ACTA publica la Declaración de Mar del Plata que llama a seguir luchando por recuperar la soberanía energética en toda América Latina.

Reunidos en la sede del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata y convocados por Fetera, los abajo firmantes realizamos un Encuentro sobre la Crisis Energética y la necesidad de continuar el debate por la Soberanía Energética. Nuestra convicción es que el tema sigue siendo un desafío para los trabajadores, y especialmente para los pueblos de Nuestramérica.

Nuestro debate comenzó por el análisis y caracterización de la crisis mundial del capitalismo. Reconocimos que es un error radicar la crisis en los países capitalistas desarrollados, imaginando que la misma no existe en nuestros países. La crisis es global. Es más, el crecimiento económico de la región se explica principalmente por el crecimiento de los precios de los bienes primarios producidos y exportados por nuestros países, lo que transforma a Nuestramérica en proveedora de recursos naturales demandados por los países capitalistas desarrollados: petróleo, gas, tierra, agua, cobre, oro, litio, alimentos (principalmente soja), etc. Nuestramérica resulta así nuevamente funcional a las necesidades del capitalismo mundial.

La crisis energética es parte de la crisis mundial, que es financiera, económica, alimentaria, medioambiental; es sistémica, estructural y convoca a un debate civilizatorio de carácter inmediato. Ello supone discutir el paradigma productivo sustentado en los hidrocarburos. El análisis en

torno al cénit petrolero nos obliga a discutir sobre los cambios en los procesos productivos. Esos cambios están en el centro del debate mundial, especialmente cuando el poder económico y político en el mundo discutirá en nuestra región los mecanismos de salida de la crisis actual. Tanto el G-20 en Los Cabos (México) y Río+20 en Río de Janeiro (Brasil), serán ámbitos de discusión (en junio de 2012) sobre nuevas formas de relanzamiento del capitalismo en crisis, que solo trae mayor explotación a los trabajadores, depredación del ambiente y nos convoca a generar las condiciones necesarias para pasar de la resistencia a la ofensiva de los trabajadores y construir una nueva sociedad.

Rechazamos las propuestas en el G20 y en Río+20, que aluden a una economía verde, un capitalismo verde, con empleos verdes, que es una forma de apropiarse del legado de lucha de los pueblos por el medio ambiente.

En la propuesta de las clases dominantes, el imperialismo y las transnacionales, tienen por objeto continuar con los procesos de sobreexplotación de la fuerza de trabajo y los bienes comunes, los recursos naturales abundantes en Nuestramérica bajo el vocablo *sustentable*. Nos hablan de sustentabilidad cuando el modelo productivo y de desarrollo capitalista potencia la destrucción de la naturaleza; nuestro hábitat. Todo por la ganancia. En nuestro debate llamamos la atención sobre la propuesta «desarrollo sustentable», pues la realidad es la destrucción a que nos lleva la producción capitalista. Por eso, la crisis no trata de recesión o de crecimiento, sino de los beneficiarios de la producción y distribución de la riqueza socialmente creada.

En ocasión de la Cumbre de los Pueblos realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005, donde quedaron enterradas las pretensiones del imperialismo estadounidense de anexar a los países de Sudamérica al ALCA, se organizó un Foro Regional de Energía. Allí establecimos determinados lineamientos que aún tienen plena vigencia: «tender hacia la búsqueda de recuperar y afianzar la denominada soberanía de la renta energética. Asegurar el control de los recursos del sector en manos estatales, con participación de trabajadores y usuarios en su gestión». Y colocábamos cinco puntos como propuestas a desarrollar, que hoy ratificamos.

A saber:

1. La lucha por servicios públicos estatales con control de organizaciones de usuarios, ambientalistas y de trabajadores es fundamental para lograr una energía al servicio de la gente.
2. Elaborar una matriz energética, consecuente con el desarrollo de los pueblos del continente.

3. Tener servicios públicos estatales accesibles, universales, para todos nuestros habitantes. Que no se vean desvirtuados por tercerizaciones, gerenciamientos, concesiones y otras formas de privatización encubierta.

4. Exigir que se respete la voluntad soberana de los pueblos, que a través de vías plebiscitarias presionen para que sus recursos naturales y servicios básicos sean patrimonio de sus respectivas naciones.

5. Construir la alternativa latinoamericana de un bloque de integración económica, que enfrente los acuerdos de sometimiento que expresa el ALCA y los Tratados Bilaterales de Inversión.

Por todo lo dicho proponemos:

1. Adherir a las iniciativas populares de movilización hacia Río+20 en las jornadas de protesta del 5 y 20 de junio próximo. Llamamos a sumar a los trabajadores de la energía y a los pueblos a las diferentes movilizaciones que se convoquen en Nuestramérica.

2. La energía es un problema de todos. Es un bien social, no es un *commodity* ni una mercancía. La energía es un derecho humano y solo se puede acceder a una vida digna si se tiene acceso al agua, a la electricidad y al gas.

3. Manifestamos nuestra solidaridad con los pueblos de Argentina y Bolivia. Reivindicamos la lucha popular que llevó a la expropiación parcial de YPF en Argentina, a la nacionalización de la Empresa Eléctrica Española en Bolivia, y al proceso de luchas por las reestatizaciones en la región, lo que desafía a los trabajadores y a los pueblos a profundizar el proceso de apropiación de las empresas públicas privatizadas en décadas anteriores.

Al tiempo que reconocemos el papel de nuestra lucha contra las privatizaciones, pretendemos discutir el modelo productivo y de desarrollo, es decir, ¿para qué el petróleo, la electricidad, el gas, o cualquier fuente de energía?

Eso supone construir un modelo productivo y de desarrollo alternativo sustentado en la satisfacción de las necesidades de nuestros pueblos.

4. La integración de Nuestramérica es el desafío. No hay solución «nacional» aislada. Es imprescindible la integración cultural, social, política, productiva, y la urgente organización de variadas iniciativas propuestas en estos años: Petroamérica, Banco del Sur, ALBA, Nueva arquitectura financiera; tanto como procesos de integración que excluyen a EE.UU. y Canadá, como UNASUR y CELAC.

5. Establecer un compromiso para realizar acciones concretas que fortalezcan el accionar de los sindicatos y organizaciones de trabajadores y de los pueblos relativo a la energía. El objetivo es recuperar el internacionalismo solidario entre los pueblos en la práctica concreta en defensa de nuestros intereses.

6. Proponer al Vº Encuentro Sindical Nuestra América (ESNA) que adopte esta Declaración de Mar del Plata, como parte de las consideraciones y conclusiones del cónclave a realizarse en México el próximo 21 al 23 de mayo de 2012.

Somos solidarios con la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), organizadores del Vº ESNA y luchadores consecuentes por sus derechos laborales y ciudadanos en defensa de la energía como derecho para todos.

Mar del Plata, 17 de mayo de 2012

Firman la declaración:

Bernardino Fernández, de la Mesa Directiva de AUTE, Sindicato Eléctrico de Uruguay, PIT-CNT. Gabriel Portillo, responsable de la Comisión de Programa e Internacionales de AUTE, PIT-CNT, Uruguay. Tony León Rojas, Secretario General del Sindicato Nacional de los Trabajadores del Ministerio de Petróleo y Minería, CSBT, Venezuela. Grimaldo Carbajal Noreña, Secretario de Defensa del Sindicato de Trabajadores de Electrolima, Empresa Concesionarias Eléctricas y Afines, SUTEECEA, CGTP, Perú. José Rigane, Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Argentina, Fetera - CTA. Julio C. Gambina, presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP, Argentina.

PROBLEMAS FISCALES EN LAS PROVINCIAS

Culminó el primer semestre y Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina, puso de manifiesto la crítica situación fiscal, ya que el gobierno provincial decidió abonar el medio aguinaldo en cuatro cuotas consecutivas, sin diferenciar niveles de ingresos, y cancelar deuda a acreedores diversos con bonos de la deuda pública provincial.

Una de las características de política económica en la década ha sido el superávit fiscal del Estado nacional y las provincias. El caso bonaerense hace visible un problema que ya venían expresando otros estados provinciales y que afecta al fisco nacional. En esta ocasión, la Nación tuvo que asistir financieramente a la provincia, aún cuando la cifra no alcanzó para resolver el pago completo del medio aguinaldo, y motivó el pago en cuotas a los trabajadores estatales.

La respuesta de los estatales, profesionales y trabajadores de la salud, de la justicia y otras dependencias públicas se movilizaron en todo el territorio provincial reclamando el pago unificado y denunciando una política de ajuste sobre los ingresos de los trabajadores estatales.

Vale consignar la importancia de la cuestión salarial en Buenos Aires, el distrito de la Argentina con la mayor cantidad de empleo público provincial, lo que representa casi un 1/3 del total de los estatales provinciales. Siendo la provincia con mayor cantidad absoluta de trabajadores estatales es uno de los Estados provinciales con menor densidad de trabajadores por habitante, situación que comparte con Santa Fe y Córdoba, siendo las tres provincias las que concentran la mayor cantidad de población en la Argentina.

Son datos para pensar, sea el papel del Estado y la cantidad necesaria de trabajadores para un efectivo y satisfactorio cumplimiento del derecho a la educación, a la salud, a la seguridad, al entretenimiento o la cultura; tanto como el papel del empleo estatal en las provincias de menor densidad poblacional para disminuir el desempleo o subempleo y contener el conflicto social. Esto último es válido, especialmente cuando constatamos la diferencia salarial en los distintos niveles del Estado, reduciéndose en la medida en que se desciende desde el ámbito nacional al provincial, y de éste al municipal. El promedio del salario de los estatales nacionales duplica al de los trabajadores de los Estados provinciales, los que al mismo tiempo duplican el ingreso de los trabajadores municipales, evidenciando un desequilibrio inequitativo, asociado a una desjerarquización de ingresos de los trabajadores en el ámbito de las provincias y de las localidades del interior del país.

El gobierno nacional intenta despegarse de la gestión del Estado Bonaerense y responsabiliza al gobernador Scioli, quedando claro que se asiste a un nuevo capítulo de la crisis política en el núcleo hegemónico del gobierno ampliado (Nación + provincias). Parte de la crisis se procesa en la justicia, con un fallo contra el gobierno en primera instancia, que exige el pago completo del medio aguinaldo. Habrá que ver cómo sigue el tema en segunda instancia y más allá.

El capítulo anterior de la crisis en el núcleo hegemónico se procesó con Moyano y la actual conducción de la CGT, esperándose una nueva fragmentación de la Central mayoritaria.

Ahora, el conflicto es entre el gobierno nacional y el provincial, como sucesión de una historia que discute hegemonía política sobre la administración del orden económico, político y social.

REAPARECEN LOS CONDICIONANTES INSTITUCIONALES DE LA DÉCADA DEL NOVENTA

Detrás de la crisis fiscal se encuentran los fenómenos estructurales que condicionan el funcionamiento del capitalismo en la Argentina. Por un lado, la reforma del Estado, heredada de los años noventa, donde la descentralización, uno de los ejes del decálogo del Consenso de Washington, agranda la responsabilidad fiscal de los Estados provinciales por el gasto transferido desde la Nación. Al mismo tiempo se generaron condiciones para la dependencia financiera de las provincias a la Nación, algo visible en la coyuntura.

Por otro lado se destaca el papel de la deuda pública en el privilegio del gasto público nacional, condenando a los trabajadores estatales y al gasto social a ser variables de ajuste estructural. En efecto, al mismo tiempo

que se comunicaba la imposibilidad de la Nación y la provincia de Buenos Aires para cumplir con el pago a los empleados públicos y a los proveedores, el Directorio del Banco Central de la República Argentina aprobó la afectación de 4.165 millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar deuda pública en el tercer trimestre de 2012 (julio a septiembre).

A los trabajadores bonaerenses se les cancela el medio aguinaldo en cuatro cuotas (dos en el mes de julio del 15% cada una, otra en agosto por un 30%, y el resto en septiembre), mientras que a otros acreedores (de la deuda pública) se les cancela al contado, dando fe de un «Estado buen pagador».

Curiosamente, con los trabajadores movilizados en protesta por el «ajuste», el mismo día, el BCRA resolvía destinar 1.597 millones de dólares para atender vencimientos con organismos internacionales, y 2.568 millones de dólares para cancelar deuda con acreedores privados, incluido el Boden 2012, con vencimiento en agosto próximo.

La crisis de 2001 sigue pagándose en detrimento del ingreso de los trabajadores y afectando la calidad de vida de los sectores de menores recursos.

La medida adoptada por el BCRA supone satisfacer mayoritariamente a acreedores externos de la deuda pública, sean los organismos internacionales, o los tenedores extranjeros de los títulos en cuestión. Esos fondos salen del BCRA contra documentos de pagos a futuro por la tesorería nacional, y se suman a otros títulos emitidos oportunamente. Las reservas internacionales rondan los 46.500 millones de dólares, compuestos crecientemente por deuda del Estado Nacional, cuyos vencimientos se escalonan en los próximos periodos de gobierno después de 2015.

Como vemos, la cuestión se desencadena por las reformas estructurales, con la base de los años noventa, descentralización estatal y endeudamiento externo. Con la descentralización de personal sin transferir fuentes de ingresos suficientes, el resultado fue el deterioro de los ingresos de los estatales provinciales, que son la mayoría del empleo público en la Argentina. Un Estado con salarios deteriorados contribuye seriamente en boicotear la calidad, eficiencia y compromiso del trabajador en un proyecto público, es decir, asumido por el conjunto de la población.

El peso de la deuda y los pagos de intereses y servicios de la misma es clara demostración de que el proyecto público presente de «desendeudamiento» favorece a los acreedores externos, parte del núcleo del poder en la Argentina. A éstos se suman las transnacionales de la megaminería, la soja y el agronegocio, y las transnacionales de la producción y los ser-

vicios, a quienes se invita regularmente a invertir en el país, claro que a cambio de satisfacer sus objetivos de importantes ganancias, retaceadas en estos tiempos de crisis del capitalismo mundial.

EL CAMINO DEL AJUSTE DESEMBOCA EN CRISIS

En síntesis, la crisis fiscal, a la que se suman los problemas comerciales y que ponen de manifiesto las dificultades para sostener el superávit del comercio exterior y las restricciones a la compra de dólares, hablan del límite a dos aspectos centrales de la bonanza económica de estos años: el superávit fiscal y comercial en paralelo. Una vez más, el problema pretende resolverse con ajuste en el ingreso de los trabajadores. La respuesta se manifiesta en protestas diversas y aún desarticuladas políticamente.

El desafío se concentra en la construcción de una alternativa política que pueda expresar la diversidad de protestas y de formas organizativas que surgen en la coyuntura, sean los estatales bonaerenses en la calle por el medio aguinaldo, los judiciales por la porcentualidad en sus ingresos, los trabajadores de la construcción que el sur demandan ser equiparados a los petroleros; o las protestas de los pueblos fumigados, las poblaciones contra la megaminería a cielo abierto, y múltiples otras formas y demandas de crítica y confrontación de una sociedad no escuchada y en creciente proceso de organización y manifestación de sus demandas, intereses y sueños.

Todo ello constituye la base de un proyecto a discutir para organizar la sociedad sobre la base de la satisfacción de las necesidades de la mayoría. Una lógica diferenciada de la de la ganancia que hoy preside el desarrollo económico en el país y en el mundo.

La crisis global del capitalismo en la contemporaneidad convoca a cambios, los que se procesan nacional y regionalmente en función de la historia de los pueblos. Es evidente que en la crisis actual se manifiesta la agresividad del poder de las clases dominantes, evidenciado en estos días en Paraguay y en las amenazas crecientes sobre el proceso boliviano.

En la Argentina también se sienten las presiones y acciones de las clases dominantes. Así como la movilización popular en la rebelión de 2001 creó las condiciones para el cambio y en la Argentina ya no se pudo ganar institucionalmente con el discurso neoliberal, en la actualidad será también la movilización social la que genere las condiciones de emergencia de un proyecto político alternativo.

Buenos Aires, 7 de julio de 2012.

SITUACIÓN FISCAL Y CONFLICTO SOCIAL Y POLÍTICO

El centro de la atención sobre la cuestión económica se concentró en la semana en torno al conflicto bonaerense por la decisión del gobernador Daniel Scioli de pago escalonado del medio aguinaldo a los trabajadores estatales, nada menos que 550.000 personas.

No solo apareció el enfrentamiento político con el Poder Ejecutivo nacional, sino que la Justicia ordenó el pago inmediato, agravado con la decisión de pagar, ya materializada por parte del Poder Judicial y Legislativo provincial, este último liderado (nada menos) por el vicegobernador de Buenos Aires.

Es evidente el debate político, que bien puede calificar como una crisis en el marco del mismo proyecto, pero devela también dificultades muy concretas con relación a la situación fiscal de las provincias argentinas.

SANTA FE

Hace poco fue noticia el gobernador santafesino, el socialista Antonio Bonfatti, cuando afirmó a fines de junio pasado: «Estamos rascando la olla porque la Nación no nos paga lo que nos debe».¹ Fueron declaraciones en momentos en que se discutía una reforma tributaria, que ahora tiene media sanción con la aprobación del Senado de esa provincia del litoral.

¹ Bonfatti: «Estamos rascando la olla para pagar sueldos». Diario *La Capital* de Rosario, domingo 24 de junio de 2012, en <<http://www.lacapital.com.ar/politica/Bonfatti-Estamos-rascando-la-olla-para-pagar-sueldos-20120624-0034.html>>, consultado el 14/07/2012.

Las expectativas del gobierno provincial eran de recaudar luego de la reforma impositiva, principalmente concentrada en el inmobiliario rural y urbano, unos 1.800 millones de pesos, cifra similar que reclaman a la Nación de deuda de estos últimos años.

Con la corrección realizada por los legisladores que responden al gobierno nacional y por ende son oposición al gobierno socialista, se estima una recaudación extra de unos 800 millones de pesos, algo menos de lo previsto pero a tono con las necesidades inmediatas para hacer frente especialmente al tema sueldos de los estatales provinciales.

Es para pensar cómo intervienen las distintas lógicas políticas, puesto que en Buenos Aires, la discusión se da en el marco de la misma identidad partidaria: el PJ y el Frente para la Victoria; mientras que en Santa Fe, un gobierno opositor al proyecto nacional recibe más comprensión de sus opositores, a la sazón, oficialistas del proyecto nacional. Pese a ser oposición, el peronismo santafesino otorgó el mecanismo legal para incrementar la recaudación tributaria a un gobernador opositor en el marco nacional.

CÓRDOBA

La provincia de Córdoba salió a buscar deuda por 50 millones de dólares para obra pública, especialmente en autopistas, y terminó la semana pasada aceptando ofertas por 105,5 millones de dólares, a un año de plazo y a una tasa de interés del 9,5%.

De ese modo, optimizó la situación fiscal ante una menor expectativa de crecimiento de la recaudación tributaria para 2012², lo que permitirá al gobierno provincial hacer frente a los pagos de sueldos y aguinaldos de los estatales. El camino del endeudamiento «se suma a las emisiones que realizaron la provincia Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en mayo y diciembre pasado».³

La operación cordobesa es festejada por la obtención de una tasa de un dígito, muy elevada en el marco de la situación mundial, que afecta y condiciona seriamente el Presupuesto de la provincia. La operación de crédito asegura cancelaciones en pesos a los acreedores (inversores), actuali-

2 Córdoba colocó deuda por U\$S 105 millones a una tasa del 9,5% anual. En <<http://www.cadena3.com/contenido/2012/07/13/100065.asp>>, consultado el 14/07/12.

3 Córdoba colocó deuda pública en dólares por U\$S 105,5 millones. Diario *La Nación* del 12 de julio de 2012, en <<http://www.lanacion.com.ar/1489912-cordoba-coloco-deuda-publica-en-dolares-por-us-1055-millones>>, consultado el 14/07/2012.

zados según la variación del dólar. Es una forma de estimular colocaciones financieras en pesos ante las restricciones a la compra de divisas.

A veces no se sabe a ciencia cierta si se pretende eliminar la especulación financiera, o si el propio oficialismo (provincial en este caso) estimula mecanismos de especulación financiera, tal como difunde la propaganda del gobernador peronista cordobés, José Manuel De la Sota.

ESTADO, EMPLEO PÚBLICO E IMPUESTOS

Los tres estados provinciales más grandes, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, cada uno a su manera y con relatos diferenciados, expresan las dificultades para el financiamiento de su aparato estatal, especialmente en materia de salario.

Las tres provincias tienen la menor relación de empleados públicos con relación a la totalidad de población en las provincias argentinas. Son distritos donde la proporción de empleo público es menor a la de otros donde el empleo público es el mecanismo que evita mayores tasas de desempleo. En todas las provincias, y en el Estado nacional se verifica un crecimiento del empleo en la última década, donde un tercio de esa expansión se realizó con diferentes grados de precariedad laboral.

La realidad es que las provincias soportan una institucionalidad regresiva derivada de la descentralización de servicios y personal ocurrida en los noventa sin que se aseguraran los recursos suficientes.

No solo viene demorada la discusión sobre la coparticipación federal, exigida por la reforma constitucional de 1994, que exigía un nuevo régimen hacia 1996. Ya son 16 años de mora en un debate sustancial que supone debatir el modelo de desarrollo en el país y donde concentrar los recursos tributarios.

Más aún, significa discutir el perfil impositivo del país, que confirma un 30% de recaudación en el regresivo IVA, y donde la innovación recaudadora proviene de las retenciones al comercio exterior, animado por una continua alza de los precios internacionales de exportación, especialmente de la soja, la que ocupa el 50% de la acrecentada cosecha agraria.

Las retenciones explican unos 8.500 millones de dólares de ingresos anuales, de los cuales se coparticipan para obra pública en los municipios un 30%. La cifra expresa un poco más del 30% de lo recaudado por el IVA. Muchas provincias lanzaron procesos de aumentos de tasas en sus tributos, y algunos procesos de reforma tributaria, especialmente en el

inmobiliario rural y urbano, Ingresos Brutos y sellos, principales fuentes de recaudación impositiva.

El tema se asocia a la disminución de la recaudación por un menor nivel de actividad económica y una proporción menor en la rendición de la coparticipación federal de impuestos. Adicionalmente, en varias provincias se habilitaron moratorias impositivas que apuntan a mejorar la recaudación, previendo problemas fiscales, especialmente el compromiso mensual en salarios. Agreguemos a ello que poco y nada se habla de la evasión fiscal, ni en el ámbito nacional ni en las provincias.

Son todas razones que imponen la discusión sobre el régimen tributario, sus beneficiarios y perjudicados; el régimen de coparticipación, tanto como los condicionantes estructurales derivados de la reforma reaccionaria del Estado en los años noventa, y que subsisten sin que se incluyan en ninguna agenda de discusión.

Convengamos que no solo se trata de gestar una discusión sobre el régimen impositivo, sino que se trata de discutir el propio Estado, nacional, provincial o municipal. En definitiva: ¿Quién financia el Estado? ¿Para qué proyecto y en beneficio de quién?

Buenos Aires, 14 de julio de 2012.

EXPECTATIVAS Y DEBATES ENTRE LA DEUDA Y LA INTEGRACIÓN

Existen expectativas sobre varios asuntos de la economía en la coyuntura, entre ellos el próximo vencimiento y cancelación del Boden 2012 por 2.300 millones de dólares, que cierra el proceso de endeudamiento público ideado para salir de la crítica situación de 2001-2002. El gobierno de Duhalde instrumentó la salida de aquella crisis en varios movimientos (políticos, económicos y sociales), con medidas económicas que incluyeron la devaluación con pesificación asimétrica, que benefició especialmente a grandes deudores del sistema financiero y compensó a los bancos y a los ahorristas (inversores). Todo con deuda pública y a costa del Presupuesto, es decir, del conjunto de la sociedad, que de ese modo subsidió a esos beneficiarios, una minoría. Se reiteró la tradicional concepción de socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.

Así, el costo de las medidas económicas se trasladaron en el tiempo (una década) con endeudamiento público, algo que había sido el reiterado mecanismo para el funcionamiento del capitalismo argentino en los años noventa, el decenio de la convertibilidad, la apertura liberalizadora, las privatizaciones y el ajuste estructural. La cesación de pagos de fines de 2001 facilitó la medida, ya que no había acuciantes compromisos de pago en el corto plazo (por lo menos hasta que se definiera el arreglo, lo que empezó a suceder desde 2005) y viabilizó la emisión de los títulos que fueron venciendo en este periodo, y que cierra un ciclo el próximo jueves 2/8/12. Esa nueva deuda ha sido pagada y termina cancelándose a expensas de los trabajadores, que con el deterioro estructural de sus ingresos transfirieron rentas hacia las ganancias empresarias, lo que explica la disímil evolución del ingreso de patrones y trabajadores.

Hay quienes relativizan el papel de la deuda pública. Dicen que ahora tiene menos peso con relación al producto que en los periodos anteriores, algo que es cierto, pero insuficiente para considerar la condicionalidad estructural de la deuda. De hecho, los recursos para cancelar el Boden 2012 surgen de una autorización para utilizar reservas internacionales del BCRA. Esas reservas se anuncian en torno de los 46.300 millones de dólares, claro que a ese monto debe restarse, entre otros aspectos, las letras emitidas por el Tesoro nacional por usar reservas para cancelar deuda pública. Son unos 33.000 millones de dólares que vencen en 2016 y 2022. Las reservas son entonces las que registra el BCRA, si y solo si el Estado Nacional obtiene a futuro los recursos que hoy adeuda al BCRA. La deuda se está pagando con deuda, que se cancelará con recursos fiscales que tendrá que obtener el Estado. ¿De quién, de dónde? De la sociedad en su conjunto, obvio, y verificando que lo principal de la recaudación actual proviene de impuestos al consumo (como el IVA), aquellos que afectan a los sectores de menores ingresos. Para completar la información que relativiza las reservas, debemos adicionar unos 16.700 millones de dólares por adelantos transitorios por un año (renovables) facilitados por el BCRA al Tesoro nacional. Entre ambos conceptos de deuda del Tesoro, títulos y adelantos, suman más que las reservas registradas. Un problema, sin duda, a contramano de quienes subestiman el peso de la deuda en la coyuntura, sin contar claro las demandas del Club de París o los «fondos buitres» que no ingresaron al canje y que cada tanto ejercen presión con relativa complicidad de la Justicia de EE.UU.

ENERGÍA E INTEGRACIÓN

También genera expectativa en la coyuntura la reglamentación de la Ley de hidrocarburos y la presencia de una Comisión presidida por el viceministro de economía, Axel Kicillof. Las funciones serán las de intervenir en el mercado petrolero, en el seguimiento y control de las inversiones petroleras y en la determinación de variables clave del negocio petrolero, entre ellos la ganancia. Recordemos que YPF solo representa 1/3 del negocio, y que el resto está en manos de transnacionales y grupos concentrados. Se trata de un tema estratégico, no solo para el manejo soberano del petróleo, sino ante la crisis energética mundial en curso y la disputa mundial por las fuentes de hidrocarburos.

No es menor al respecto la reciente asociación entre la petrolera venezolana (PDVSA) e YPF. Los acuerdos suscriptos entre ambas empresas permitirán desarrollos conjuntos, claro que necesitados de la tecnología estadounidense, en manos de monopolios transnacionales dominadores

del negocio petrolero mundial, tal el caso de Chevron. ¿Es posible pensar en desarrollos tecnológicos compartidos, incluso involucrando a otras petroleras estatales de la región? Resulta imprescindible pensar en investigación y desarrollo alternativos, fuera de la lógica mercantil que empujan las transnacionales y el poder económico. La formulación de una estrategia compartida de soberanía energética resulta imprescindible. En su momento, desde Caracas se sugirió la conformación de una política bautizada «Petroamérica» y que ahora parecen haberse creado las condiciones para su extensión desde el acuerdo entre una veintena de países del Caribe y América Central a Sudamérica.

Lo señalado debe enmarcarse en la circunstancia que supone el ingreso formal de Venezuela al Mercosur, justo cuando desde Caracas se ratifica la «denuncia» a la pertenencia de Venezuela al CIADI, el ámbito del Banco Mundial que tiene en su seno las mayores demandas de transnacionales contra la Argentina y otros países de la región. Existen expectativas que la actitud de Caracas, en el camino que ya asumieron Bolivia y Ecuador, empuje a los socios del Mercosur en el mismo camino, especialmente cuando Brasil nunca se incorporó ni suscribió el protocolo de adhesión al CIADI. Muchos temas puede empujar Venezuela en su ingreso formal al Mercosur, quizá y solo para destacar mencionemos al del Banco del Sur; las tratativas sobre nueva moneda regional, cuyos antecedentes remiten al Sistema de Pagos en Monedas locales suscripto entre Brasil y Argentina desde 2008, incluso con su escaso desarrollo (es una iniciativa que pretende extenderse al conjunto del Mercosur); y un mayor vínculo con el Sucre, la moneda para el intercambio comercial con monedas locales implementado por los países del ALBA.

Son temas coherentes con el insistente planteo desde el BCRA, o las autoridades económicas de la Argentina por «desdolarizar» la economía local. Es cierto que el Mercosur está atravesado por múltiples conflictos entre sus miembros, y ahora específicamente entre Argentina y Uruguay a propósito del dragado del Río de la Plata; y recurrentemente entre protecciones y conflictos entre las partes; pero el ingreso de Venezuela renueva expectativas de potenciar la integración regional y claro, siempre existe el interrogante sobre quién influenciará más a quién. ¿Si el rumbo por el socialismo que se promueve desde la Revolución Bolivariana o la impronta capitalista que anima el club de los fundadores del Mercosur?

Existe un nuevo tiempo en el debate por la integración, sin claridad ni definiciones precisas de articulación productiva y económica, pero no es menor que EE.UU. ya no defina en soledad el curso de acción a seguir, aún cuando mantiene regímenes amigables y sumisos a sus dictados. La

agenda de la integración alternativa acompaña la demanda de transformaciones locales en cada país, y constituyen el programa a sustentar en el camino de la construcción de sujetos para profundizar el cambio político que define la coyuntura en Nuestramérica.

¿QUIÉN VENCE A QUIÉN?

Las expectativas comentadas, sean por la cancelación de la deuda (aplaudida por acreedores), como las apuestas a la integración (petróleo y Venezuela en el Mercosur) son expresión de la confrontación existente en cada uno de nuestros países y en el destino común, compartido.

El interrogante del subtítulo remite a la formulación de Lenin en los difíciles momentos de la confrontación entre revolución y contrarrevolución, y que nos sirve a nosotros para pensar el momento actual de constitución de sujetos que asuman un programa transformador para el cambio en momentos de crisis capitalista.

Es que la crisis convoca al combate. Por eso es pertinente consultar e indagar sobre cómo nos preparamos para salir airoso. No hablo de la competencia olímpica, está claro, sino de la recurrente lucha sociopolítica, aquella que nominábamos como «lucha de clases».

Buenos Aires, 29 de julio de 2012.

PRODUCCIÓN AGRARIA: ENTRE LOS ALIMENTOS Y LA ENERGÍA

La coyuntura mundial y las condiciones estructurales del desarrollo local argentino empujan un modelo productivo extractivista, primario exportador, más allá del agregado de valor, es decir, la agroindustria. Lo que se potencia es el carácter dependiente del capitalismo argentino al sistema mundial. El capitalismo global demanda recursos naturales que son abundantes en Nuestramérica, que para el caso argentino se concentra en la riqueza de la tierra, sus nutrientes, los cursos de agua, y la capacidad de producción agraria (alimentos + energía), incluida su industrialización.

¿A cuento de qué lo mencionado? Es que producto de la sequía estadounidense, principal productor agrario del mundo, competidor directo de la Argentina en sus producciones agrícolas, especialmente maíz, soja o trigo, el resultado está siendo el incremento de los precios internacionales de los principales productos de exportación de la Argentina¹. No solo de minerales o metales preciosos (oro y plata), soja o maíz, sino también derivados, como los aceites o el biodiesel, tendencia creciente de utilización «alternativa» de la producción agraria.

Vale mencionar que por primera vez en la historia de la humanidad la producción agrícola se utiliza con destinos distintos a la alimentación, para intervenir como base de sustitución de energía ante la crisis petrolera o energética. Se estima que un tercio de la producción maicera de EE.UU., el principal productor mundial del grano, tiene como destino la producción de bioenergía. La contradicción generada en nuestro tiempo es que la

¹ Merino Soto. «La sequía achica más la producción de los EE.UU. y los granos podrían tener nuevos precios récord», en diario *BAE*, página 2, del 13/8/2012.

innovación tecnológica permite multiplicar la producción agraria mundial por encima de las necesidades humanas de carácter alimentario, pero al ser crecientemente utilizada en la producción energética ocurre la paradoja de un sexto de la población mundial con hambre.

La FAO da cuenta en su informe sobre «El estado mundial de la agricultura y la alimentación 2010-2011»² que de «2007 a 2009, la crisis de los precios de los alimentos seguida de la crisis financiera y la recesión económica mundial acarrió un incremento sin precedentes del número de personas que padecen hambre y subnutrición en el mundo, el cual superó la cifra récord de 1.000 millones en 2009» (Parte II, página 71). El escrito continúa con un análisis de superación de la recesión hacia 2010 y baja de los precios de los alimentos, y por lo tanto no contempla la situación actual, donde la recesión y/o desaceleración de la economía mundial es un dato para este 2012, que adiciona crecientes precios de los alimentos (superan los máximos de 2008) y un agravamiento de la situación alimentaria de la población mundial, que según esos datos afecta a un 14% de la población mundial.

ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA LOCAL

La Argentina se insertó en el capitalismo mundial con la «Generación del 80» del siglo XIX, ocupando un lugar complementario con Inglaterra. El lugar del país potenció nuestro carácter de proveedores de materias primas, consolidando el poder económico y político de la «oligarquía terrateniente», y la dependencia del ingreso de productos manufacturados desde la fábrica inglesa. A eso se le llamó «modelo primario exportador».

¿Puede ahora hacerse un símil de esa caracterización, más allá de la política de restricción a ciertas importaciones de bienes? El interrogante es válido desde la consolidación de una especialización productiva que se afirma en el agro y la agroindustria, donde la dominación sigue estando en el paquete tecnológico en manos de grandes transnacionales y la dominación monopólica del comercio internacional y los circuitos globales de circulación de mercancías y servicios. Ya no existe la complementación de otrora entre el capitalismo británico y el local; pero Argentina es parte de la división capitalista del trabajo en un tiempo donde la fábrica es crecientemente china, y con nuestro país asegurando la provisión de insumos primarios que resultan imprescindibles en las condiciones de crisis estructural, no solo económica y financiera, sino alimentaria, energética y medioambiental.

2 En <<http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle>>, consultado el 13/8/2012.

En efecto, el país potenció la *sojización* y la megaminería a cielo abierto, producciones donde resulta imprescindible la tecnología importada, que afianza la dependencia de esas inversiones externas. Parte de la renta agraria es apropiada por el Estado vía retenciones, unos 8.500 millones de dólares en 2011, que, fondo sojero mediante, favorecen un gasto público en todos los municipios, con inversión en infraestructura que permite disputa de consensos locales. Con precios en alza, la estimación de recaudación por derechos de exportación (retenciones) para el presente año alcanza los 11.000 millones de dólares. En ese sentido avanzaron recientes medidas de política económica.

Mediante el Decreto 1339/2012, publicado en el Boletín Oficial el 7 de agosto pasado se incrementaron «las alícuotas de los Derechos y del Reintegro a la Exportación para las mercaderías identificadas como biodiesel y sus mezclas», sobre la base que «la promoción de la elaboración de biocombustibles constituye una política adecuada para profundizar el proceso de reindustrialización y diversificación productiva impulsado desde 2003 en adelante», y que «a partir de las políticas de promoción instrumentadas, el complejo oleaginoso en general y la producción de biodiesel en particular se han establecido como actividades consolidadas, competitivas y de elevada rentabilidad».³

Queda clara la apuesta a la producción primaria y a su industrialización, al punto que no solo se incrementan las retenciones, del 14,2 al 24,2%, sino que también se autoriza, transitoriamente, a la importación de granos de soja por capacidad ociosa de la industria productora de biocombustibles, ya que la producción local se coloca mayoritariamente en el mercado mundial. En ese marco es que se conformó la «Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo», integrada por los ministerios de planificación, economía, industria y la AFIP para «favorecer el desarrollo de los biocombustibles en el país» y que permite que la Secretaría de Energía establezca el precio de referencia para el biodiesel (Resolución 1436/2012 de la Secretaría de Energía)⁴ y promover el desarrollo industrial en ese sentido.

Argentina se transformó en un gran exportador de biodiesel y el viceministro de Economía destacó que se trata de «una industria muy dinámica y en expansión» y «que en 2011 alcanzó las 18,5 millones de toneladas»⁵ constituyéndose en principal proveedor mundial del rubro,

3 En <<http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle>>, consultada el 13/8/2012.

4 En <<http://www.telam.com.ar/nota/34555>>, consultada el 13/8/2012.

5 En <<http://www.telam.com.ar/nota/34555>>, consultada el 13/8/2012.

favorecido por retenciones menores. Hasta ahora, las retenciones a la exportación de aceites eran de 32%, contra el 14,2% que tributaban las exportaciones de biodiesel. La diferencia, un 17,8%, constituyó una renta apropiada privadamente. Desde ahora las retenciones a la exportación de biodiesel subirán al 24,2% achicando la rentabilidad privada y mejorando la ecuación fiscal en un momento de dificultades para sostener el superávit de las cuentas fiscales.

SÍNTESIS Y DEBATE POR ALTERNATIVAS

En definitiva, las medidas recientes apuntan a un aumento de las retenciones al biodiesel; a la importación de soja como insumo industrial para biocombustibles; y a la articulación de dependencias del gobierno para la promoción de esa industria asociada a la producción agrícola.

Son un conjunto de medidas que potencian la especialización asociada al carácter extractivista del modelo productivo en la Argentina, que profundizan la «sojadependencia», proceso que se consolida desde los cambios estructurales promovidos en los noventa con la implantación de los transgénicos. Es una situación convergente con las modificaciones al código de minería que facilitó el ingreso de inversiones externas en la megaminería a cielo abierto.

El interrogante es si resulta posible pensar en otro modelo productivo para otra inserción internacional de la Argentina, privilegiando satisfacer necesidades sociales, alimentarias, energéticas o medioambientales. Todo ello supone discutir el tipo de país, su producción y beneficiarios fuera de la lógica de la ganancia, más centrado en resolver demandas de movimientos diversos que reclaman contra la fumigación de los pueblos, o en defensa de la soberanía alimentaria, energética, o del medio ambiente amenazado por la producción orientada al mercado, es decir, dominada por el capital.

No es solo una cuestión de carácter nacional, sino de discusión global, en donde la misma FAO llama la atención sobre las tendencias preocupantes del precio de los alimentos y la contradicción que supone la mayor oferta de productos del agro con el crecimiento del hambre y la desnutrición. Es un llamado de atención para pensar el orden mundial, precisamente en un mundo en crisis.

Buenos Aires, 13 de agosto de 2012.

ANUNCIOS PETROLEROS

YPF vuelve a ser noticia con los anuncios sobre el Plan Exploratorio Argentino, que incluye como novedad la explotación de hidrocarburos «no convencionales» y la decisión de actuar sobre provincias argentinas no petroleras (Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, entre otras), algo que genera expectativas y preocupaciones.

Las expectativas provienen de aquellos que imaginan fuentes de empleos y generación de riquezas por la explotación de petróleo y gas en un momento de crisis energética mundial y local, lo que genera un fuerte gasto estatal para cubrir con importaciones las necesidades energéticas para el funcionamiento de la economía local.

El año pasado se destinaron a tal efecto 9.300 millones dólares para importar combustibles líquidos, una cifra equivalente al superávit comercial de 2011, un tema que preocupa sobremanera. Primero, porque el país está atravesando una desaceleración económica y si hay rebote de la actividad económica a corto o mediano plazo, tal como está previsto, se requerirá producir o importar crecientes insumos energéticos. Segundo, porque la brecha comercial necesita ampliarse para sostener la necesidad de divisas para cancelar deuda externa.

Las preocupaciones provienen de aquellos que observan críticamente los efectos nocivos de las nuevas tecnologías extractivas que afectan el medio ambiente por contaminación directa o derivada por residuos tóxicos, y especialmente por el uso de agua dulce en grandes cantidades, que además compite con otros usos productivos y de consumo del líquido elemento.

A LA BÚSQUEDA DE INVERSORES

La presentación del Plan se hizo ante inversores locales y de EE.UU. partícipes del *Council of Americas* reunido en Buenos Aires; y ante funcionarios del gobierno nacional y provinciales en la sede de YPF. Allí se entregaron los estudios realizados para la exploración y explotación de recursos de petróleo y gas.

La novedad no es tanto relativa a los hidrocarburos «convencionales», sino aquellos «no convencionales», en los que el país aparece con potencialidad, y que la utilización de técnicas más complejas y novedosas como la fractura hidráulica, conocida como *fracking*, la que ha motivado protestas en varias partes del mundo e incluso prohibiciones, por la cantidad inyectada de agua, combinada con arena y material químico y tóxico que se introducen para la operación de extracción de gas y petróleo.

Desde YPF se confirmó que los estudios que se difundieron y entregaron a cada gobierno provincial provienen de la gestión anterior, bajo administración de Repsol, y que ahora se aceleraron para intentar en el corto y mediano plazo resolver el autoabastecimiento energético, tema que se planteó en el cuerpo legal de la expropiación parcial de YPF.

El dato relevante es que la empresa necesita inversores asociados para atender la exploración y explotación, especialmente del petróleo y gas no convencional, que por la tecnología y el método, la exploración y explotación, requieren se realice en simultáneo. El asunto es que se trata de prospecciones a profundidades de 3.000 a 5.000 metros, inyectando millones de litros de agua, combinada con arena y variados tóxicos para destruir roca sólida y que emerjan los hidrocarburos.

El titular de YPF les planteó a los empresarios locales y de EE.UU. que «Necesitamos socios, y estamos abiertos a recibirlos. Créanme que, como líder de la empresa líder, voy a defender su inversión». Algo que suena bien ante empresarios a la búsqueda de ganancias en un mundo capitalista en crisis.

¿Quiénes serán esos socios de YPF? Hasta hace poco parecía afirmarse la asociación con Petróleos de Venezuela, pero, luego del cónclave del *Council of Americas*, el ejecutivo de Chevron para África y Latinoamérica, Ali Moshiri (ya tienen inversiones en Vaca Muerta) mostró el interés en la asociación con YPF.

Queda claro que no es lo mismo la asociación con la empresa estatal venezolana que con una de las grandes petroleras transnacionales de origen estadounidense. Chevron es una de las petroleras que más desarrollos

y experiencias tiene en el tema de producción «no convencional». Es una cuestión que permitió a EE.UU. avanzar en producción energética propia, intentando alejar la dependencia de la importación petrolera, algo suscitado luego de la crisis de los setenta, cuando EE.UU. alcanzó el pico de sus reservas de hidrocarburos convencionales. Allí comenzó la crisis energética con saldo de crecimiento importante de los precios del petróleo, que vuelve a plantearse ahora, ante el pico mundial de reservas.

APUESTA A POTENCIAR EL EXTRACTIVISMO

Estos anuncios actúan en la perspectiva, especialmente por la potencialidad del yacimiento de Vaca Muerta (en Neuquén y Mendoza), de la posibilidad para la Argentina de pasar de ser un país con petróleo, a poder considerarse como un país petrolero, incluso con posibilidad de exportar.

No solo no es lo mismo, sino que habilita a presentarse como productor y exportador. Es lo que surge de los estudios exploratorios en provincias no petroleras y sobre todo, con relación a la producción de petróleo y gas no convencional, *shale oil* y *shale gas*.

El país pretende el autoabastecimiento de hidrocarburos y de ser posible la exportación. Así como Argentina es un país con minería, y sin gran tradición minera previa, ahora, producto de las grandes inversiones de los últimos años, el país se empieza a transformar en importante productor minero orientado a la exportación.

Esta nueva realidad, o posibilidad, es algo que interesa a provincias no petroleras, necesitadas de recursos fiscales, y al mismo tiempo es preocupación de movimientos ambientalistas, que así como crecientemente denuncian y reclaman contra la *sojización*, la fumigación; o contra los efectos de la megaminería, suman ahora la preocupación de la producción petrolera que incluye el uso a gran escala de agua y tóxicos. Se trata de reclamos contra la tendencia extractivista del modelo productivo en el país. En rigor, son temas que recién comienzan en el debate nacional, más allá de la visibilidad mediática que alcancen.

En su momento, la emergencia de los proyectos productivos sustentados por Mosconi o Savio, incorporaban con sus iniciativas, la discusión de la producción local para la independencia económica. La asociación actual a los iniciadores y promotores de aquella gesta, en las nuevas condiciones del siglo XXI habilita nuevos interrogantes y discusiones sobre la dependencia capitalista y el modelo productivo y de desarrollo necesario para la emancipación.

Con aquellos precursores se alentaba una producción que alimentaba la expectativa de un modelo para la industrialización con sustitución de importaciones. Ahora lo que puede discutirse, incluso en común con otros países de la región, es el extractivismo para tributar a las necesidades de recursos naturales demandados por el capitalismo mundial.

Buenos Aires, 25 de agosto de 2012.

LA DEUDA Y LA PÉRDIDA DE SOBERANÍA

Mucho se habla en estas horas de los «fondos buitres», a propósito del embargo sobre la Fragata Libertad retenida en el Puerto de Ghana; y es verdad que esos fondos de inversión pueden asimilarse a las aves de carroña, que rondan a la presa en dificultades para alimentarse de la desesperación en la agonía de cuerpos en dificultades.

El interrogante es si la Argentina es una presa agonizante y apetible para los buitres del sistema capitalista. No parece la Argentina vivir un tiempo de agonía. Es cierto que en 2012 se desaceleró la economía, pero en un marco de una década de crecimiento importante, y además, si en 2001 declaró la cesación de pagos por 100.000 millones de dólares, con los canjes de 2005 y 2010, renegoció el 93%, y desde entonces es un país cumplidor de sus compromisos de pagos externos.

Más que en agonía, la Argentina parece atravesar un periodo de acumulación capitalista saludable, y cuando en el mundo son noticias los países con dificultades para cancelar su deuda soberana, desde Buenos Aires se desmienten agoreros pronósticos, y se cumple rigurosamente con los pagos de la deuda pública. El país generó las condiciones para salir del *default* declarado a finales de 2001, y pagando sus deudas intentar volver al mercado financiero mundial.

No es que estemos de acuerdo, más bien todo lo contrario, pero pretendemos explicar lo que está ocurriendo con un tema estructural del orden económico en el país y en el mundo, el del endeudamiento y la dependencia que genera la situación respecto del capital hegemónico, muchas veces, convengamos, depredador y carroñero.

EL OBJETIVO ERA Y ES PAGAR LA DEUDA

La Argentina es un fiel cumplidor de sus obligaciones externas, y el Gobierno se jacta de ello, aun manteniendo un 7% de la deuda en conflicto (*hold out*) y un monto similar impago al Club de París, una deuda que en variadas ocasiones se anunció la voluntad de negociar y cancelar.

Se puede pensar que la Argentina le encontró la vuelta al endeudamiento, pues no solo «arregló» con la mayoría de los acreedores, sino que también paga regularmente sus obligaciones. Claro que es una pesada carga en el Presupuesto que se acaba de aprobar para 2013 y además, se establecen casi 8.000 millones de dólares de las reservas internacionales para cancelar vencimientos del próximo año, y más de 80.000 millones de pesos de nueva deuda.

Para que no haya dudas, esta semana la presidenta aseguró que en diciembre próximo se cancelarán en dólares los vencimientos de bonos del Estado Nacional. El objeto de la información era desanimar a aquellos que creen que la Nación seguiría el rumbo de la pesificación que ya empezaron a transitar algunas provincias, y que parece será el rumbo a seguir por otros Estados provinciales.

Claro que la pesificación viene inducida de múltiples acciones, no solo respecto de la restricción a la compraventa de divisas, o al uso cotidiano de las divisas en las relaciones mercantiles, sino al canje poco analizado de deuda nominada en moneda extranjera por endeudamiento en pesos argentinos.

El mecanismo transita por la cancelación de deudas con divisas, disminuyendo las reservas internacionales y reemplazándolas por compromisos futuros en pesos del Tesoro nacional al BCRA. De este modo, el BCRA acumula deuda a cancelar por futuros gobiernos y se transfieren divisas a los históricos acreedores de la deuda pública de la Argentina. Así, la Argentina paga su deuda con dólares y acumula nuevas deudas en pesos, las que imaginamos renovarse en continuo y condicionando el presente y el futuro soberano.

Las cancelaciones de deuda y las sucesivas negociaciones, no solo en esta década, sino en cada uno de los turnos constitucionales, indican que la deuda sigue condicionando la política y que se requiere revertir el ciclo de negociación y pago para pasar a una instancia de investigación y discusión integral del problema.

Desde Alfonsín a Menem y De la Rúa, y más recientemente Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cada uno organizó su renegociación con-

firmando que el tema llegaba a su fin y que la deuda ya no sería más un problema. La retención de la Fragata Libertad y las demandas de la justicia en EE.UU. reflejan otra realidad.

RECUPERAR SOBERANÍA

Existen «fondos buitres» porque el país resignó soberanía jurídica en algún momento de la historia de la deuda y los negocios con el mundo. En aras de la seguridad jurídica de las inversiones se habilitó la posibilidad de litigar en tribunales extranjeros, del mismo modo que la Argentina suscribió la incorporación al CIADI (Comité del Banco Mundial para atender los reclamos de las transnacionales que se sienten afectadas en sus negocios por los países). Así Argentina está sentenciada a pagar cuantiosa deuda tramitada ante el CIADI.

Lo que pretendemos señalar es que el país debe recuperar soberanía y denunciar su pertenencia al CIADI y anular toda la deuda negociada sobre base de cesión soberana.

Todo ello se puede hacer si existe voluntad de independencia. El problema no son los «buitres» sino quienes les dieron y dan de comer. El país está preso de una institucionalidad gestada en tiempos de ofensiva neoliberal que requiere ser modificada.

Más que discursos contra la carroña capitalista se requiere abandonar la legitimidad gestada en tiempos de ofensiva neoliberal. Es la base para pensar con independencia y eliminar el condicionante que supone el endeudamiento público.

Buenos Aires, 3 de noviembre de 2012.



VUELVE EL CONDICIONANTE ECONÓMICO: ¡LA DEUDA PÚBLICA!

En el fallo del juez Thomas P. Griesa¹, de un tribunal neoyorquino, se obliga a la Argentina a cancelar deuda «lo antes posible», con bonistas demandantes ante los tribunales de EE.UU. Son tenedores de títulos que entraron en *default* en 2001, y que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. Recordemos que solo el 7% de tenedores de títulos no se acogieron a los beneficios de las renegociaciones de deuda.

El fallo señala que «será aplicable a los pagos de intereses efectuados a los bonistas en diciembre de 2012. Para evitar confusiones y dar un tiempo razonable para arreglar la mecánica, el tribunal especifica que el pago de intereses en cuestión será el del 15 de diciembre de 2012. Al abogado de Argentina se le ordena consultar con el abogado de los demandantes para determinar la suma exacta que se pagará a los demandantes y otras mecánicas».

El Poder Ejecutivo anunció que apelará el fallo del juez estadounidense, por arbitrario, e incluso, argumentando que se sienta un precedente grave para cualquier negociación de deuda en curso o a futuro. De avanzar el fallo, argumentan en el Gobierno, nadie ingresará a los canjes que se negocian en Grecia, o cualquier otro país con problemas de endeudamiento, pues siempre se podrá acudir a la justicia con jurisdicción para ello. Algo que omiten destacar con este argumento es que quién cedió la soberanía jurídica ha sido el propio Estado argentino, y no solo los gobiernos de la entrega en la década del noventa.

¹ Juez de Distrito de EE.UU., en fallo fechado el 21 de noviembre de 2012 en Nueva York.

El propio fallo destaca que: «En la reunión del 9 de noviembre de 2012, el tribunal recordó a todas las partes interesadas que Argentina está sometida a la jurisdicción de los tribunales federales de Nueva York, a lo que Argentina dio su consentimiento. En los últimos diez años, Argentina repetidas veces sometió los asuntos al Tribunal de Distrito y el Tribunal de Apelaciones y recibió un tratamiento indudablemente imparcial, dado que Argentina se impuso en la mayoría de las cuestiones».

Más allá de los montos en juego, pues el 7% no ingresado al canje es por 7.000 millones de dólares (unos 4.000 millones según las condiciones de los canjes de Kirchner y Fernández de Kirchner), y la demanda es por 1.600 millones de dólares (unos 900 millones con la quita), la situación ahora presentada es demostrativa de que teníamos razón cuando denunciábamos que la deuda era un condicionante de política económica y al mismo tiempo profundizaba la dependencia económica, política y jurídica de la Argentina.

Junto a la denuncia señalábamos que la deuda antes de negociarse debía ser investigada, auditada, que existen ejemplos internacionales, que estaba en juego la independencia y la autonomía del país. La principal lección para extraer sobre este fallo, o sobre el embargo que opera sobre la Fragata Libertad es que la Argentina debe denunciar la entrega de su soberanía al permitir litigar en país extranjero.

Es algo que debe realizarse denunciando los tratados bilaterales de inversión y toda medida de subordinación a tribunales extranjeros, como ocurre con el CIADI. Brasil nunca adhirió al protocolo del CIADI, y Venezuela hace poco siguió el camino ya recorrido por Bolivia y Ecuador, de retirarse de este antro del imperio para defender los intereses de las transnacionales. Recordemos que la Argentina es el país más demandado ante el CIADI.

Que no se haya hecho la auditoría o investigación en 2005 o 2010 no impide realizarla ahora. El fallo, además de ser apelado, otorga la oportunidad política de enfrentar el lazo de la dependencia que construyó y reafirma el endeudamiento público. Nunca es tarde. ¡Es el momento de denunciar la subordinación a los tribunales extranjeros y auditar e investigar la deuda!

Mar del Plata, 24 de noviembre de 2012.

PETRÓLEO, GAS Y DEUDA PÚBLICA EN DEBATE

La semana cerró con dos noticias muy celebradas. Una remite a la cancelación del vencimiento de deuda pública del cupón PBI por 3.502 millones de dólares, los que fueron depositados en las cuentas de los acreedores. La otra noticia responde a la colocación de deuda de YPF por 150 millones de pesos colectados entre pequeños inversores locales. Es un buen interrogante consultar sobre los motivos de la algarabía, para lo cual conviene ir por parte y considerar cada uno de los temas.

PAGOS DE LA DEUDA

La deuda pública se paga rigurosamente, y ni hablar de auditar o investigar la legitimidad de una deuda que históricamente acredita un fallo judicial de junio de 2000, con evidencias de múltiples ilegalidades e irregularidades, con responsables identificados fehacientemente. El fallo del Juez Ballesteros duerme en algún lugar del Congreso Nacional, el poder encargado de «resolver» los problemas de la deuda externa.

Un problema adicional es el uso de las reservas internacionales para cancelar deuda. Con datos del BCRA, verificados en la fecha en el sitio en internet, 2011 evidenció una pérdida de reservas de 5.814 millones de dólares, y hasta el 7/12/2012 eran 979 millones los dólares resignados en este periodo, sin contar la cancelación del viernes 14/12 por 3.502 millones de dólares, que deja la reservas en un nivel escasamente por encima de los 43.000 millones de dólares.

Son más de 10.000 millones de dólares perdidos en dos años y asignados preferencialmente a los acreedores de la deuda pública, cuando se

mantienen las restricciones al acceso de divisas para el público en general. Muchos argumentan: «¿y qué pretenden, acaso no pagar como sostenía la izquierda a la salida de la dictadura, hace 30 años?».

A propósito del embargo de la Fragata Libertad y el fallo reciente del juez estadounidense, ahora en suspenso, un conjunto de personalidades y organizaciones, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel (Premio Nobel de la Paz 1980), insisten con la denuncia y la necesidad de investigar, auditar la deuda y juzgar a los responsables, y mientras tanto, suspender los pagos.

Es que bien vale señalar que es mucho el esfuerzo social por pagar a los acreedores de la deuda pública y postergar derechos previsionales o sociales, educativos o de salud, entre otros muchos que demandan los sectores más desfavorecidos de la sociedad argentina.

Además, el llamado «desendeudamiento» oculta la continuidad de un problema estructural y condicionante de la política económica, que la justicia extranjera trajo a la realidad de la consideración política por estas horas. Como si fuera poco, la presión del Club de París y de los organismos internacionales no afloja, reavivando la hipoteca sobre el trabajo social en el país.

Aunque se insista en cancelar sin investigar, el problema persistirá y condicionará a cualquier gobierno, presente o futuro, profundizando las penurias sociales y postergando derechos socioeconómicos largamente escamoteados.

ENDEUDAR A YPF

Más del doble de ofertas realizaron inversores entre \$ 1.000 y 250.000, en pocos días de oferta de una colocación de bonos de YPF que ofrecían una renta de 19%, entre 5 ó 6 puntos más que un plazo fijo en la banca. Consignemos primero que hace muy poco, Bolivia se endeudó en el sistema financiero mundial a tasas menores al 5%, e incluso fue criticado por los cuantiosos recursos ociosos en reservas internacionales y aún en liquidez bancaria de fondos públicos no utilizados.

Pero aún con las críticas al gobierno boliviano, el costo del dinero en préstamo es de un cuarto del que expresa el financiamiento a la primera empresa en la Argentina, en un momento de valorización de sus activos, sea por la rentabilidad presente o las expectativas que genera la potencial explotación de los hidrocarburos no convencionales.

Existen quienes argumentan que YPF ofrece una salida a pequeños inversores con liquidez y con escasa oferta financiera atractiva, pues la

tasa de interés pasiva está alejada del movimiento de los precios. Claro que ese atractivo para los inversores es un costo de financiamiento para la empresa parcialmente expropiada por el Estado.

¿Si ese es el costo de la gran empresa petrolera, cuál es el que deben soportar las pequeñas y medianas, aún las grandes?

La política financiera de la petrolera, es cierto que en magnitudes pequeñas (unos 30 millones de dólares al cambio oficial), induce una pauta elevada de tasas activas para el resto del sector productivo, cuando el diagnóstico generalizado apunta a reclamar financiamiento para la inversión productiva de los más chicos del aparato productivo local.

Son reflexiones válidas para lo que se viene en materia de endeudamiento de YPF, pues desde la próxima semana se licitarán bonos por 4.500 millones pesos (unos 920 millones de dólares al cambio oficial) en diferentes modalidades. Unos estarán atados a la cotización del dólar (que viene duplicando el ritmo de devaluación respecto al año anterior) y con una tasa de 6,25%, es decir, se ajusta por tipo de cambio más esa tasa, con lo cual la variabilidad se define por la evolución de la divisa estadounidense por la vigencia del título en los próximos cuatro años. Otros bonos en pesos y por 6 años, pagarán intereses ajustables por la tasa BADLAR, que viene en alza según informa el BCRA, y que en la actualidad cotiza por encima del 15%.

Se trata de crédito caro, en un plan de endeudamiento de la petrolera por 3.000 millones de dólares en títulos en el marco de inversiones a lograr por 37.000 millones de dólares hacia 2017, y poder materializar en sociedad la explotación de los hidrocarburos no convencionales.

Entre esos socios inversores, además de los minoristas de esta semana, se sumarán los mayoristas a captar desde el lunes 17/12, y la confirmación de inversores de capital, entre los que despuntan la familia Bulgheroni asociada a capitales chinos, y la estadounidense Chevron, demandada en la justicia argentina por 19.000 millones de dólares por daño ambiental en Ecuador, derivado de explotación petrolera entre 1965 y 1990 por la Texaco, adquirida por la transnacional estadounidense. Como siempre insistimos, además de la cuestión financiera, bien vale la pena discutir el destino de los hidrocarburos en cuestión, pero eso es otra discusión.

LA HIPOTECA

En años de la dictadura, YPF fue la empresa estatal más endeudada, algo increíble en momentos de alza de los precios internacionales del petróleo.

La explicación está en el papel del Estado al servicio de los intereses de las clases dominantes, lo que definió la política económica desde 1975/76, con el endeudamiento como mecanismo privilegiado para consolidar la dependencia argentina al capitalismo mundial.

En los años noventa no solo se privatizó YPF, sino que la deuda profundizó las reformas estructurales diseñadas para la extranjerización en tiempos de terrorismo de Estado. Esa es la hipoteca que pende sobre nuestra sociedad y que condiciona el desarrollo. Ahora YPF es de gestión estatal por la expropiación parcial, apenas administrando el 30% de la actividad hidrocarburífera, y configura aún una asignatura pendiente para revertir la situación gestada en los setenta y en los noventa.

La petrolera totalmente estatal y la investigación de la deuda pública continúan siendo una asignatura pendiente para el programa de independencia necesario para discutir modelo productivo y de desarrollo para satisfacer necesidades insatisfechas del pueblo argentino.

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2012.

TERCERA PARTE



INTRODUCCIÓN

No puede analizarse la situación económica sin reflexionar adecuadamente sobre las relaciones entre economía mundial y economía nacional, máxime cuando la primera asiste a una de sus crisis globales, sistémicas, estructurales, que afectan a la civilización contemporánea en su conjunto.

Uno de los problemas es que la política económica siempre se piensa y ejecuta nacionalmente, mientras que la economía se mueve por una lógica mundial. Eso lleva a muchos y diversos cruces y problemas entre países y a promover una mayor anarquía en el orden económico actual.

En el presente apartado analizamos las perspectivas de la economía argentina asociadas al análisis de la situación mundial. En las consideraciones incluimos referencias a posibles abordajes alternativos, tan necesarios en estos tiempos de crisis capitalista mundial.



LOS TEMAS ECONÓMICOS A COMIENZOS DE 2012

La crisis de la economía mundial es el gran condicionante del año. El Banco Mundial y otros centros de información de la economía mundial pronostican un año recesivo al estilo 2008-2009; especialmente en la zona euro. En sus «Perspectivas económicas mundiales para 2012 y 2013», la ONU comienza afirmando que «La economía mundial se encuentra al borde de otra crisis importante. El crecimiento de la producción se ha desacelerado considerablemente durante el año 2011 y para los años 2012 y 2013 se prevé que el crecimiento será anémico».

Con un mensaje desalentador, el informe destaca que «La Unión Europea (UE) y Estados Unidos de América equivalen a las dos economías más grandes del mundo, y están intrínsecamente entrelazadas. Sus problemas se pueden transmitir fácilmente de una a otra y dar lugar a otra recesión mundial. Los países en desarrollo, que se había recuperado fuertemente de la recesión mundial de 2009, se verían afectados a través de sus vínculos comerciales y financieros».

Es cierto que los países menos desarrollados, los «emergentes», —y especialmente América Latina— mantienen su perspectiva de crecimiento mayor que los países capitalistas desarrollados, pero la continuidad de la crisis no augura tránsitos similares a los del tiempo pasado, ya que el salvataje de bancos y empresas en tiempo reciente devino en problemas fiscales y crecimiento de la deuda pública, que hoy presenta dificultades para su cancelación o renegociación, con lo que es imaginable un horizonte de recesión que puede afectar las ventas desde la región.

Observando la realidad desde Nuestramérica es previsible una ralentización del crecimiento, con menores precios de la producción exportable, reducción de los ingresos por remesas de nuestra población emigrante a grandes y otrora prósperos países (sobresale el caso español, principal destino europeo de la emigración regional en tiempos no muy lejanos).

No sorprende entonces la previsión de escasas aportaciones en inversiones productivas e incluso una fuerte presión de inversores externos en la región que acrecienten sus remesas de utilidades al exterior, tal el caso de las fortísimas inversiones españolas realizadas en tiempos de aperturas indiscriminadas de nuestra economía, especialmente en los años noventa.

Uno de los impactos más importantes de la crisis según la ONU es el desempleo, especialmente juvenil. El problema del desempleo es grave en los países capitalistas centrales y presenta peculiaridades en los países en desarrollo, los cuales «siguen enfrentándose a grandes retos debido a la elevada proporción de trabajadores que se encuentran subempleados, mal pagados o sufren condiciones de vulnerabilidad laboral, careciendo de acceso a mecanismos de seguridad social».

El déficit de empleo según la ONU alcanza a 64 millones de puestos de trabajo y podría llegar hacia 2013 a 71 millones. El documento se preocupa por el efecto en el consumo, alentando un clima recesivo, y nada dice de la conflictividad social que esa situación genera.

IMPACTO DE LA CRISIS EN LA ARGENTINA

Por todo lo comentado, uno de los temas a comienzo de 2012 en la Argentina han sido las medidas de restricción y mayor control de las importaciones, para intentar mantener el saldo positivo del comercio exterior argentino. El país no imprime dólares y los necesita para cancelar sus deudas. Ante la anemia de inversiones externas, la forma de hacerse de divisas es vía exportaciones superiores a las importaciones. Un tema adicional a considerar es la reducción de los precios de exportación, también derivado de la crisis mundial, según revela el propio informe comentado de la ONU. A ello debe añadirse la cuestión climática, que impactará en menor cosecha y disminución de ingresos a los productores y al fisco, por lo cual el gobierno debió esta semana declarar la emergencia en varias provincias argentinas.

No solo se trata de la cuestión industrial o agraria, sino de otras producciones esenciales al «modelo productivo», tal el caso de la megamiinería, que en Chilecito (La Rioja) puso en pie de resistencia a la mayoría

de la población con actitud solidaria movilizadora en todo el país, obligando a definiciones de las autoridades e instituciones locales en el sentido que el «Famatina no se toca», replicando luchas anteriores por el mismo tema en la zona, en Esquel (2003) y varias zonas incorporadas a la producción minera en los tiempos que siguen a la reforma del Código de Minería y el acuerdo de Argentina con Chile en 1996. Una posibilidad surgida desde distintos ámbitos apunta a la suba de retenciones mineras, hoy del 3% en «boca de pozo» a valores entre el 10 y 12% para compensar las críticas al modelo extractivo prefigurado en los noventa, lo que no supone discutir el «modelo productivo» en curso.

La discusión sobre el modelo productivo mantiene vigencia y es una cuestión estructural del debate político y social necesario, sea por los precios de la producción, las variaciones en el clima o el impacto de esos procesos en las poblaciones (pueblos fumigados en lucha, o afectados por la contaminación de la producción minera a gran escala).

SALARIOS Y CONFLICTIVIDAD

A comienzos de año se hace evidente que uno de los temas a considerar será la cuestión salarial y de los ingresos de los sectores populares que reciben fondos por transferencia de renta: los planes. La presión empresaria y gubernamental intentará limitar la demanda de las negociaciones salariales a menos del 20%, habiéndose pronunciado varias expresiones del sindicalismo argentino con incrementos a negociar entre el 25 y 30%, a la par con movilizaciones y pronunciamientos de actualizaciones de los ingresos por planes diversos. Es una situación generadora de conflictividad.

Quedan claros los límites de política económica para 2012 respecto de los años anteriores, sea por la crisis mundial o por las características en la coyuntura de la economía local, con serias dificultades para mantener los superávits comercial y fiscal. Con restricciones para el financiamiento del mercado mundial, la política nacional se orienta a una modificación del gasto público, donde la quita de subsidios a los servicios públicos de electricidad, gas y agua es el comienzo de una práctica que desembarca en el transporte (transferencia del subterráneo a la Ciudad de Buenos Aires); lo que supone mayores precios a sufragar por los usuarios.

Los impactos serán diferenciados según los niveles de ingresos. Por ello preocupa el decreto presidencial que promueve «estudiar» los ingresos extraordinarios de los estatales nacionales, eliminados en algunas dependencias, como las primeras discusiones (especialmente los docentes) sobre pauta salarial. En el mismo sentido, las organizaciones representativas de

quienes perciben fondos por transferencia de renta demandan actualizaciones. La conflictividad social será uno de los condimentos a tener en cuenta para el año económico en curso.

Buenos Aires, enero de 2012.

LIBERALIZACIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO

Es un dato conocido que muchos analistas confunden, o aparentan confundir, el hecho de que dos fenómenos ocurran al mismo tiempo con que exista una relación de causalidad entre ambos. Este parece ser el caso de una nota recientemente publicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), donde se señalan los supuestos beneficios de la liberalización económica en términos de empleo¹. Un claro objetivo de una institución asociada a la dominación mundial y que hace propaganda por la liberalización de la economía en tiempos de crisis capitalista. Asociar la problemática liberalizadora al crecimiento del empleo apunta a deslegitimar los reclamos de los trabajadores contra el ajuste que promueven las políticas anticrisis de las clases dominantes en el capitalismo mundial.

El artículo de marras comienza planteando una pregunta típica para este tipo de análisis: ¿el comercio internacional acaba con los empleos o los genera? Uno estaría tentado a responder una obviedad: depende. Depende de en qué contexto histórico nos situemos; de qué tipo de países estemos hablando, de qué tipo de comercio, y en qué circunstancias. Una empresa puede trasladar parte de su producción de Europa a Asia en busca de bajos salarios, y esto puede generar desempleo en Europa, pero mantener el nivel de empleo global inalterado. O puede redundar en un aumento global del empleo a causa de una mayor producción, pero con menores niveles de salario y peores condiciones laborales para los trabajadores... depende.

¹ <www.oecd.org/document/31/0%2c3343%2cen_2649_37431_44171615_1_1_1_37431%2c00.html>.

Pero aceptemos la propuesta del artículo. Allí parecen quedar desmentidas varias nociones de nuestro sentido común que se fueron construyendo a partir de nuestra experiencia histórica. El artículo resume: a) «las economías abiertas, a diferencia de las protegidas, logran niveles más altos de crecimiento económico»; b) «la apertura comercial ha contribuido a la creación neta de empleos»; c) «la estabilidad laboral total ha cambiado muy poco».

DISCUTAMOS LOS ARGUMENTOS

Ahora bien, ¿de dónde surge esta información? ¿Cuáles son los argumentos a partir de los cuales podemos pensar que esto es cierto? Sobre la segunda pregunta el texto dice poco. Pero vayamos a la primera. Sabemos que, como decía de manera poco feliz el famoso economista, si uno tortura suficientemente los datos, estos acaban por confesar, ¿pero qué datos utiliza la OCDE?

Un análisis muy sencillo con datos de la CEPAL y la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS²) nos muestra algo un poco distinto. En los últimos veinte años la tasa de desempleo abierto en Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia, Suecia e Inglaterra ha crecido un 71%, 140%, 17%, 44%, 22%, 361% y 11% respectivamente. Y en términos absolutos³ en estos países, el volumen de trabajos industriales ha caído en un 20%, 26%, 22%, 1,4%, 5,4%, 30%, y 37% en el mismo período.

Hablamos de los últimos veinte años porque entendemos que es a principios de los noventa cuando podemos situar una especie de éxito por la fiebre liberalizadora, y en este sentido es útil ver los efectos de largo plazo de las medidas. Es el tiempo del fin de la bipolaridad y del sueño del «fin de la historia» y el «fin de la ideología» que permitió imaginar el triunfo del capitalismo sobre cualquier orden alternativo. En América Latina ya conocemos las consecuencias de las políticas hegemónicas en los noventa. En Argentina, si bien en la última década el desempleo ha caído, según el Indec, hasta el 7-8% de la población económicamente activa, no ha logrado recuperar los niveles cercanos al 3-5% que tuviera en todo el período que va desde mediados de la década del cuarenta hasta fines de los años ochenta. Y de hecho estamos hablando de un empleo totalmente distinto.

2 <www.bls.gov>.

3 Que haya caído el número absoluto de trabajadores es sumamente importante porque, al crecer la población, es esperable que se potencie el efecto sobre la tasa de desempleo.

Según los datos del CEPED-UBA, el poder adquisitivo del salario es en la actualidad el más bajo de toda la serie que transcurre desde aquel entonces hasta ahora, lo que explica los enormes techos en la tasa de empleo (42% de la población total) y en la población que sale a buscarlo (como señalábamos al principio... depende). En lo que respecta a Brasil por ejemplo, la tasa de desempleo en 2008 era de aproximadamente el doble de la de 1995, en México está prácticamente en el mismo nivel, y en Chile ha subido un 2%.

Pero en realidad, como decíamos al comienzo, estos datos por sí solos no alcanzan para explicar nada. Lo que sí hacen es mostrar que no parece haber una mejora sustantiva en los índices de empleo como afirman los analistas de la OCDE. Pero aunque mostrasen lo contrario (como por ejemplo en el caso de Ecuador), sería un error que no tengamos en cuenta los efectos que la coyuntura internacional en términos de los precios de los productos de exportación de nuestros países están teniendo sobre nuestras economías. Es decir, sería un error que caigamos en el mismo juego que criticamos. No se puede analizar la pregunta que plantea el artículo mostrando simplemente una correlación entre apertura económica y empleo, *porque hay una enorme variedad de situaciones intervinientes que debemos considerar...* Lo que no estaría mal que sugiramos al pasar es que revisen los datos, porque son muy sugestivos para que afirmemos todo lo contrario.

CAMBIOS EN LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Lo que sí es cierto es que en los últimos años la división internacional del trabajo tradicional de intercambio de productos primarios por manufacturas elaboradas entre periferia y centro respectivamente está siendo reemplazada por un proceso complejo donde la periferia interviene también (dado que la exportación de productos primarios sigue existiendo) en la exportación de productos elaborados, incluso aumentando significativamente su participación en la exportación de productos con un alto componente tecnológico.

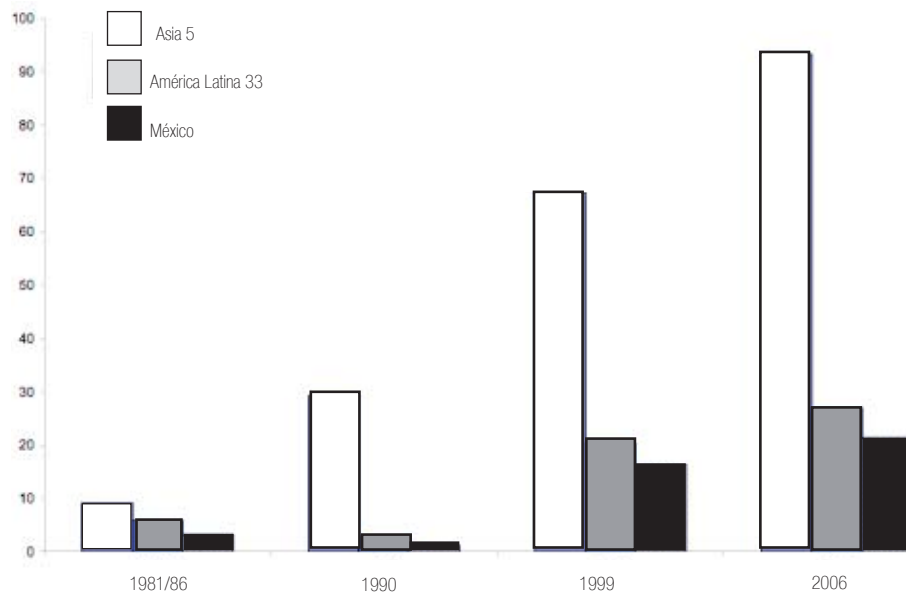
En términos muy esquemáticos, lo que sucede es que ciertas empresas con capacidad de operar a escala transnacional han adquirido la posibilidad de trasladar a la periferia segmentos enteros de las cadenas productivas (producto del desarrollo de la tecnología de la informática y las comunicaciones), utilizando al país receptor exclusivamente como plataforma de exportación.

El proceso es sencillamente la búsqueda de bajos costos de mano de obra. En palabras de Giovanni Arrighi (1997: 188), podemos decir que asistimos «a una división del trabajo donde el centro es predominante-

mente el lugar de emplazamiento de las actividades cerebrales del capital corporativo y la periferia el *locus* de los músculos y los nervios».

Asistimos a un proceso de expansión de la relación salarial, donde la fábrica del mundo se traslada desde el «centro» capitalista a la periferia. Ese es el lugar crecientemente asumido por China en la economía mundial contemporánea y que explica en buena medida el crecimiento del empleo y la explotación mundial de los trabajadores, pese a la disminución del empleo, no solo por la crisis, en los principales países capitalistas desarrollados. En plena crisis ocurren pérdidas de empleo en los territorios tradicionales e históricos del desarrollo capitalista, al tiempo que se expande la relación social de explotación en nuevas fronteras territoriales de valorización del capital.

GRÁFICO N° 1. RELACIÓN ENTRE LAS EXPORTACIONES DE ALTO CONTENIDO TECNOLÓGICO DE PAÍSES SELECCIONADOS Y LOS ESTADOS UNIDOS



Fuente: Pinazo y Piqué (2011), Desarrollo latinoamericano en el marco de la globalización, en Problemas del Desarrollo, UNAM, N° 166.

Nota: Por cuestiones de disponibilidad los primeros datos de América Latina y México corresponden al año 1986, mientras que los de los cinco países asiáticos a 1981.

Ahora bien, esta exportación de productos de alto contenido tecnológico no ha alterado ni la participación de los países en valor agregado mundial, ni ha modificado sensiblemente el nivel de sus salarios. Fundamentalmente porque se trata de un traslado de segmentos intensivos en mano de obra, en busca de una reducción en los costos, y no de un proceso

de desarrollo industrial, en ninguno de los sentidos en que se pueda pensar la palabra.

Esta última cuestión quizás nos sirva para pensar el esfuerzo argumentativo y la «tortura de datos» consiguiente, a los que frecuentemente se someten los ideólogos del libre comercio, para hacernos creer lo bueno que es para nosotros que abramos nuestras fronteras y les dejemos hacer sus negocios.

En síntesis, nos preocupan los contenidos «profesionalistas» y «objetivos» que difunden agencias internacionales que pretenden estar más allá de unos o de otros. En nuestro caso queremos enfatizar que la OCDE realiza análisis que son fuente de información para la toma de decisiones en los ámbitos de poder mundial, especialmente el G20, núcleo que define el rumbo del capitalismo mundial en crisis.

No solo se trata de denunciar y desarmar la argumentación de las clases dominantes, sino de construir pensamiento propio para la emancipación de las clases subalternas. Es que en los últimos veinte años no solo existió la ofensiva dominadora del régimen del capital por restaurar la dominación capitalista objetada por las luchas obreras y populares por décadas en un marco bipolar. El proyecto del capital trata de obturar las propuestas de emancipación de los trabajadores, pero no puede evitar la experiencia de resistencia y construcción de alternativa política, social y cultural, algo que verifica la realidad de Nuestramérica a comienzos del siglo XXI. Vale agregar que al proyecto del capital se le suma un modelo sindical conciliador y posibilista encarnado en el ámbito global por la Central Sindical Internacional, que deja fuera de la representación a millones de trabajadores, la mayoría precarizada; pero también debe registrarse la experiencia renovadora del agrupamiento de trabajadores en el Encuentro Sindical Nuestra América, expresión de un modelo unitario y de clase en proceso de extensión, que agrupa organización de trabajadores más allá de la organicidad sindical, interpelando a los trabajadores en el territorio y en las condiciones generalizadas de precariedad para la instalación de un modelo de organización y lucha de los trabajadores para la confrontación con la iniciativa de las clases dominantes y la proposición de alternativa anticapitalista.

Buenos Aires, 12 de enero de 2012

Julio Gambina, Presidente de Fisyp;

Germán Pinazo, Miembro de Fisyp;

Victor Mendibil, Secretario General FJA.



IMPORTACIONES Y DIVISAS EN LA DISCUSIÓN ECONÓMICA

La noticia alude a la denuncia de Argentina por «proteccionismo» comercial en un documento difundido en la última reunión de la OMC. El texto fue impulsado por EE.UU., la Unión Europea y otras doce naciones, que acusan a la Argentina de obstaculizar el «libre comercio», es decir la capacidad de esos países para colocar parte de su producción en el mercado interno de la Argentina.

Sin embargo, los datos publicados por el Ministerio de Economía revelan un crecimiento importante de las importaciones argentinas en los últimos años, con una evolución desde los 38.786 millones de dólares (USD) en 2009, a 56.501 USD en 2010 y 73.922 USD en 2011.

La denuncia existe pese a este importante crecimiento de las importaciones y al déficit comercial bilateral entre nuestro país y EE.UU. que durante el año pasado superó los 3.500 millones de dólares. Por el contrario, con la Unión Europea el superávit comercial alcanzó 2.147 millones, si bien en diciembre pasado se reconoce un déficit de 148 millones.

En rigor, la denuncia se presenta por las restricciones impulsadas por la Secretaría de Comercio en los últimos meses, las que apuntan a sostener el superávit comercial declinante en los últimos años.

Los registros indican una reducción del saldo favorable del comercio exterior argentino desde los 16.886 USD en 2009, a 11.632 USD en 2010 y de 8.034 USD en 2011. Con lo cual crecen las importaciones pero también las exportaciones, que pasaron de 55.672 USD en 2009, a 68.134 USD en 2010 y a 81.956 USD en 2011.

La cuestión asume importancia pues el superávit comercial es el principal medio que tiene el país para hacerse de divisas ante las dificultades para endeudarse o ser destino de las inversiones externas.

¿Para qué se necesitan las divisas? Principalmente para hacer frente a los compromisos de pago, especialmente la gravosa deuda pública. El giro normal del comercio internacional, con las tendencias declinantes del saldo favorable hace imposible el cumplimiento regular de las cancelaciones de deuda.

LA DEFENSA OFICIAL

El gobierno acusa a los denunciantes de pretender trasladar al país la crisis de sus economías nacionales, efecto directo de la crisis mundial del capitalismo. Recordemos en ese sentido la reciente declaración de la recesión española, con amenaza de constituirse en europea, y con clara desaceleración de la economía en el conjunto de los países capitalistas desarrollados.

Un argumento adicional a favor del razonamiento oficial es que otros socios importantes del comercio exterior de Argentina, especialmente China, Brasil y buena parte de la región Nuestramericana no suscribieron la denuncia.

Hay que reconocer que estos países también protestan ante las restricciones impuestas a las importaciones, aunque esos reclamos se realizan en el marco de la negociación política, sin denuncia explícita en foros globales, porque aún con límites a la venta de su producción, mantienen un saldo superavitario en el comercio bilateral con la Argentina. Durante 2011 y según informaciones del Ministerio de Economía, el déficit comercial local con China y con Brasil alcanzó los 4.550 millones de dólares para cada país.

EL PROBLEMA PASA POR LA INSERCIÓN INTERNACIONAL

La esencia del tema es el condicionante de la deuda externa pública y la subordinación del comercio internacional al orden mundial capitalista (en crisis) y al modelo productivo hegemónico. Argentina se está transformando en plataforma industrial exportadora de ensamblado, junto a la provisión internacional de productos primarios y algo de manufacturas de origen agropecuario.

Si las exportaciones industriales suman el 35% del total, las ventas restantes al exterior, del orden del 65%, son productos primarios con o sin

elaboración, más combustibles y electricidad; mientras que en cuanto a las importaciones se destaca la compra de bienes de capital y sus accesorios representando el 40% del total, a lo que debemos sumar bienes intermedios por 29%, imprescindibles para el proceso productivo local, ascendiendo así al 69% de las compras externas, lo que define la dependencia productiva del país.

La Argentina es dependiente en el comercio internacional, no solo por el tipo de producción que genera, sino por la escasa incidencia del país en la fijación de los precios internacionales de la intermediación comercial. El mecanismo de competitividad está dado por la dotación de recursos naturales y los bajos salarios de la fuerza de trabajo local en relación a los pagados en el capitalismo desarrollado.

Aparece entonces la necesidad de discutir la inserción internacional de la Argentina, no solo por lo que se vende y se compra, sino reconsiderando con qué países se realiza el intercambio.

Es una discusión de inserción internacional, incluso en la coyuntura, pensando en cuáles son los países que denuncian a la Argentina y cuáles los que discuten las políticas nacionales.

PENSAR MÁS ALLÁ DE LA COYUNTURA

Quizá se requiera ir más allá de un «pensamiento nacional», para considerar la pertenencia Nuestramericana de la Argentina, y organizar la producción local articuladamente con la región y el sur del mundo. Ello supone ir más allá del orden capitalista, al tiempo que se discute y construye otro orden productivo local, regional y mundial.

Buenos Aires, 31 de marzo de 2012.



ACERCA DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE LA ARGENTINA

El Indec¹ presentó los datos de evolución de la economía a mayo de 2011, registrando un crecimiento respecto del año anterior del 9%, aunque las estimaciones oficiales señalan un promedio para el año más cercano al 7,5%, con lo cual se espera una evolución desacelerada del funcionamiento de la economía en el segundo semestre del año. La perspectiva duplica las estimaciones que se incluyeron en el proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo y que finalmente no aprobó el Parlamento. En rigor, la información remite a un 9,9% de crecimiento de la economía nacional para el I° Trimestre del año, más elevado en el sector productivo que en el de servicios.

El dato relevante de los primeros cinco meses de 2011 es el crecimiento productivo industrial, con un aprovechamiento del 78,3% de la capacidad instalada. Esos datos sobre el crecimiento se manifiestan principalmente en la industria automotriz, con un 24,6% con relación a los primeros cinco meses del año anterior, y donde se espera un récord de producción para todo el año de más de 800.000 automotores. Hay que recordar que un 70% aproximadamente tienen destino en el mercado externo. Además, tienen escasa participación de autopartes locales, lo que pone de manifiesto el carácter de industria de ensamble que adquirió este sector manufacturero, el más dinámico de la industria local. Otro sector de crecimiento está concentrado en la construcción, donde el cemento acumula 15% de enero a mayo, y otros materiales de la construcción un 10,4%. Tanto en automotores como en la construcción, la discusión se

1 <www.indec.mecon.ar>, consultada el 18 de junio de 2011, con informes al 17/06/11).

concentra sobre quiénes son los sectores sociales que consumen esa mayor producción.

La situación presenta algunas tendencias preocupantes al considerar el sector externo, ya que en el resumen se reconoce un déficit en cuenta corriente de 673 millones de dólares en el I° trimestre de 2011, con un egreso neto en la cuenta financiera por 153 millones de dólares y una merma en las reservas internacionales de 1.159 millones de dólares en los primeros tres meses del año. El dato relevante de este conjunto deviene de la remisión de utilidades al exterior por 1.689 millones de dólares e intereses por 773 millones de dólares, totalizando entre ambos conceptos 2.462 millones de dólares. Se constatan dos trimestres consecutivos (IV° de 2010 y I° de 2011) con saldo negativo de la cuenta corriente. Es importante destacar que el superávit comercial (exportaciones menos importaciones) es equivalente a las rentas de la inversión (remesas de utilidades al exterior más intereses), con lo cual, el ingreso de divisas por el comercio de bienes y servicios se esteriliza con la salida de las utilidades y dividendos más los intereses pagados (netos) al exterior. Un agravante es que crecen a mayor ritmo las importaciones que las exportaciones, lo que explica las restricciones al ingreso de bienes dispuestas por las autoridades. Además, respecto de las exportaciones de manufacturas, conviene resaltar que evolucionan más por precios en alza que por expansión de las cantidades, situación inversa respecto de las importaciones. Cualquier cambio de ciclo en materia de precios internacionales haría más vulnerable el sector externo de la economía argentina.

En síntesis, la información nos remite al crecimiento de la economía y a algunos problemas en el sector externo. Son informaciones que merecen ser desagregadas para inferir beneficiarios y perjudicados, tanto como identificar el perfil productivo de la Argentina, crecientemente orientado en la colocación de su producción en el exterior, sean automotores, soja u otras oleaginosas, cereales y productos primarios y mineros. Conviene recordar que la distribución del ingreso y de la riqueza viene determinada por el tipo y modo de producción, tanto por quienes son los responsables de su forma de organización. Esto último nos lleva a la cúpula empresarial, donde los últimos registros del Indec nos señalan la fortísima concentración y extranjerización de la economía en la Argentina.

DATOS SOBRE LOS INGRESOS EN EE.UU.¹

A continuación, información estadística oficial sobre distribución de la riqueza en Estados Unidos:

En los últimos 20 años, los ingresos del 90 por ciento de los estadounidenses se han mantenido sin cambio, mientras que el uno por ciento de los estadounidenses más ricos han aumentado sus ingresos en 33 por ciento.

Los 400 estadounidenses más ricos tienen 1,5 billones de dólares en bienes, la misma riqueza combinada que la mitad de los estadounidenses más pobres.

Un total de 46,2 millones de personas vivía por debajo de la línea de la pobreza en el año 2010, es decir 2,6 millones más que en 2009, una cifra récord desde 1959. El porcentaje de estadounidenses que vivían por debajo de la línea de la pobreza en 2010 fue de 15,1 por ciento, el más alto desde 1993.

El porcentaje de estadounidenses que no tienen suficiente dinero para comprar comida aumentó de 9% en 2008 a 19% en 2011. En 2010, 17,2 millones de hogares, es decir 14,5 por ciento, tenían inseguridad alimentaria.

Entre 2,3 millones y 3,5 millones de estadounidenses no contaban con un lugar que pudieran llamar hogar para dormir por las noches. Entre 2007 y 2010, el número de familias sin vivienda aumentó 20%.

¹ Fuente: Fakri Rodríguez Pinelo (especialista, MINREX, Estados Unidos).

El número de personas que carecían de seguro médico en 2010 se elevó a 49,9 millones. En los últimos diez años, las muertes causadas por medicamentos de prescripción en Estados Unidos se han duplicado y cada 14 minutos una persona muere por tomar medicamentos de prescripción. Las sobredosis de medicamentos de prescripción causaron 37.485 muertes en 2009, superando las muertes de tránsito.

Los costos promedio de las matrículas de las universidades públicas estadounidenses de cuatro años de 2011 a 2012 fueron de 8.244 dólares, 631 dólares u 8,3% más que en el año escolar previo.

A nivel nacional, el desempleo entre la población negra fue de 21 por ciento, elevándose hasta 40 por ciento en los principales centros urbanos como Detroit. De las siete ocupaciones con mayores salarios, seis están dominadas por blancos.

En 2010, la pobreza entre los negros aumentó a 27,4 por ciento y la pobreza entre los hispanos aumentó a 26,6 por ciento, mucho más que la tasa de pobreza de 9,9 por ciento entre los blancos.

Los niños negros sufren de pobreza en un índice de casi 40 por ciento y más de una cuarta parte de los negros sufrió hambre en 2010.

Una tercera parte de los estudiantes son víctimas de abuso en las escuelas, principalmente los niños estadounidenses de origen asiático. Las bromas e insultos que reciben por internet son tres veces más en comparación con los niños de otros grupos étnicos.

26 de mayo de 2012.

LA POLÍTICA EN EL DEBATE SOBRE LA CRISIS MUNDIAL

Mientras en la Argentina se procesan tensiones políticas por la evolución de la economía, sea por la desaceleración económica, el precio del dólar o la demanda de sectores movilizados, especialmente los trabajadores agrupados en la CTA, que esta semana concentraron la protesta en reclamo de salario mínimo por 5.000 pesos mensuales, las Asignaciones Familiares con criterio universal y la previsión social en el reclamo histórico del 82% sobre el ingreso de los activos; en el mundo se manifiestan esas tensiones en la discusión sobre el rumbo político ante la continuidad de una profunda y duradera crisis de la economía mundial que empezó a hacerse visible en torno de 2007 y 2008, es decir, hace ya un lustro, y sin horizonte de culminación en el corto plazo.

El epicentro ahora está en España, la cuarta economía de la zona euro, luego de Alemania, Francia e Italia; donde el rescate bancario que acaba de decidirse alcanza a los 100.000 millones de euros, unos 125.000 millones de dólares. Ello supone un ajuste fiscal enorme para cancelar ese préstamo en los próximos años, proceso a cargo de un gobierno afín a las políticas de austeridad. Solo resta conocer la respuesta de la sociedad, especialmente de los más vulnerables, en una situación que registra un 25% de desempleo y un 45% de desocupación juvenil. Lo que importa es la respuesta política, precisamente porque España respondió ante la crisis con un giro a la derecha: el actual gobierno de Rajoy y el Partido Popular.

La reflexión es interesante porque la lectura política de la crisis parecía inclinarse a la derecha, con la incorporación de partidos fascistas al parlamento griego; o la inclusión de tecnócratas ajustadores y por el

rumbo de la austeridad en los gobiernos de Grecia e Italia. La dinámica política con la masividad de indignados y protestas sociales en Europa parece indicar un vuelco de la situación, luego de las presidenciales francesas y especialmente en las próximas elecciones griegas, donde una inesperada votación hacia una «izquierda radical» puede modificar el escenario, y no solo porque la izquierda gane una elección, sino porque reabre el debate sobre Grecia en la Unión Europea y el mantenimiento del euro bajo otras condiciones. Hasta ahora, solo había lugar para el destierro de Grecia asociado a la salida del acuerdo monetario. Ahora se discute el propio euro, la hegemonía alemana y francesa. La izquierda griega no acepta el chantaje y el destierro, sino que discute la lógica de los acuerdos macroeconómicos del euro y la unidad de Europa.

En fin, la tesis que sostenemos es que la política interviene en el rumbo de la economía europea y mundial, a tal punto que en EE.UU. se discute la posible renovación del mandato presidencial de Obama en función de la continuidad del elevado desempleo y la baja respuesta de la economía estadounidense a los estímulos para el crecimiento y la superación de la crisis.

Son temas de interés para la Argentina, amenazada por las tendencias recesivas de la economía mundial, que afectan la demanda de producción local y que se manifiesta en cesantías y suspensiones en algunos sectores claves de la industria, especialmente en el sector del automotor y sidero-metalúrgico. Son cuestiones que estarán en el centro de la atención en las próximas semanas, con dos reuniones que concitan el interés mundial sobre la crisis. Una será la reunión del G20 en Los Cabos (México) y la otra en Río de Janeiro (Brasil), a propósito de Río+20, para un balance de dos décadas de contaminación desde la Cumbre de la Tierra de 1992. Argentina, Brasil y México participan del cónclave del G20 y los tres expresan el mayor desarrollo capitalista de la región latinoamericana, el que se pone en cuestión en el debate sobre el modelo productivo en el cónclave mundial en la ciudad carioca.

La crisis es mundial, y como la política es nacional, sirve cuestionarse las alianzas políticas y sociales que en cada país procesan las diferentes tensiones políticas. ¿Qué reclamos y demandas atender con prioridad? ¿La voz de las cacerolas por el acceso al dólar? ¿La defensa de los ingresos populares demandada en las calles, negociaciones paritarias, junto al reclamo de aquellos que pretenden actualizar subsidios o ingresos previsionales? La política económica no satisface todas y cada una de las demandas. Siempre supone beneficiarios y perjudicados. La continuidad de la crisis requiere se aliente una iniciativa política que resuelva demandas económi-

cas y construya sujetos para objetar y transformar la realidad del modelo productivo capitalista que condena a la depredación de la naturaleza y la sobreexplotación de la fuerza de trabajo. Es un debate que se transitará en los próximos cónclaves mundiales, en México y Brasil.

Buenos Aires, 10 de junio de 2012.



LA ECONOMÍA ARGENTINA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS MUNDIAL

ENTREVISTA DE MARIO HERNÁNDEZ (MH) A JULIO GAMBINA (JG)

MH: Si se reconociera la inflación se podrían tomar una serie de medidas estructurales y no un conjunto de parches

Julio Gambina (JG): Se está enfriando. No estamos en el momento de crecimiento de los últimos años, influyen los problemas globales pero también los hay locales. Hay desaceleración más que enfriamiento. Hay un menor ritmo de crecimiento que ocurre también en la economía mundial. Uno de nuestros principales compradores, Brasil, está creciendo mucho menos. Prácticamente hay recesión en Brasil, comparando los ritmos de crecimiento de los años anteriores, y eso sucede porque los compradores de Brasil también crecen menos. Hay recesión en Europa y desaceleración de la economía en países que venían creciendo muchísimo como China e India, es decir, crecen menos, no están en recesión, pero después de años de mucho crecimiento los datos actuales preocupan, por eso se habla de una crisis mundial.

MH: El jueves de la semana pasada The Wall Street Journal, citando fuentes del FMI, le puso cifras al rescate español: 300.000 mil millones de euros y también en EE.UU. hubo una fuerte caída en la generación de empleo en mayo.

JG: Por eso para nosotros era erróneo el diagnóstico de muchos gobiernos y estudiosos de América Latina que hablaban que la crisis estaba en el capitalismo desarrollado. Parecía que estábamos fuera del mundo.

¹ Entrevista a Julio Gambina en *Argenpress*, publicada originalmente en <www.argenpress.info/2012/06/entrevista-julio-gambina-si-se.html>.

MH: No estábamos «blindados» como afirmaban...

JG: Por supuesto, y no es que la crisis algún día iba a llegar. Yo decía en aquel momento que nuestro propio crecimiento se explicaba por la crisis, porque los precios de las materias primas aumentaban, el de la soja, por ejemplo, el del oro, el petróleo, precisamente por la crisis. La crisis se manifiesta de distintas maneras, no es solo crecimiento o decrecimiento, tiene que ver con dificultades que se le presentan al capitalismo en el funcionamiento de su economía, especialmente en la capacidad de obtener ganancias. Por eso las ganancias de las empresas transnacionales que dominan la economía de América Latina sirven para tapar baches que se generan en sus casas matrices. Por eso Repsol se llevó de la Argentina en los últimos 10 años U\$S 13.000 millones para resolver una serie de inversiones globales para mantener su tasa de ganancia.

MH: O el Banco Santander que acaba de vender su sucursal colombiana por U\$S 600 millones.

JG: Repsol no invertía en Argentina pero lo hacía en otros países latinoamericanos o en África. Se transformó en una empresa petrolera mundial gracias a los excedentes que obtuvo en nuestro país y los reinvertió en otros países. Acaba de salir de Cuba donde estaba invirtiendo en la zona del Golfo de México, pero se ha consolidado muy fuertemente en África. Podríamos decir que ha invertido en el sur del mundo, pero en «otros sures», mientras en Argentina agotaban las reservas porque le importaba la explotación, la exportación y la obtención de ganancias para acumular en otros países.

MH: Volviendo a la economía argentina, ¿podemos hablar de desaceleración o de recesión?

JG: Cuando venís de crecer en los dos últimos años en cifras tan altas y ahora hablás de 0, 1, 2% de crecimiento, técnicamente se habla de desaceleración, pero de hecho es una recesión. No hay duda que ha caído el consumo, la inversión, el saldo comercial, porque hay menos exportaciones y hay una política para disminuir las importaciones. Todo es menos. Técnicamente se considera a un país en recesión cuando decrece en dos trimestres consecutivos por debajo de cero. No es el caso argentino. Hay problemas económicos como la inflación, pero diría que el principal problema es que las autoridades no lo reconocen. Si se reconociera que las cifras son las que todos sufrimos al momento de hacer las compras para el consumo cotidiano, se podrían tomar medidas estructurales y efectivas y no un conjunto de parches. Por ejemplo, a fines del año pasado comenzó a plantearse el tema de los subsidios y luego se paró.

MH: ¿Esta negativa a reconocer el índice real de inflación en qué medida esta vinculada con la discusión de las paritarias?

JG: La economía es un conjunto complejo de relaciones sociales. Si suben los precios se afectan múltiples relaciones sociales, gente que puede o no comprar determinados bienes y la relación salarial es fundamental. Recientemente los metalúrgicos firmaron 23% de ajuste salarial, porque no se trata de un incremento sino de un ajuste. ¿Cuánto es la inflación? Si es la del Indec del 8% anual podemos hablar de incremento, pero todos sabemos que no es así y por eso los acuerdos salariales rondan entre el 20-30% como piden los camioneros. Los judiciales bonaerenses terminaron una lucha terrible pidiendo la porcentualidad entre el mejor salario de los jueces y el peor salario del ingresante a la justicia.

MH: Me hacen acordar a las negociaciones salariales de mediados de los ochenta.

JG: También en los años cuarenta se decía «los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera». En los ochenta se instaló la flexibilización laboral y salarial. Las recesiones o desaceleraciones siempre terminan golpeando más fuerte a los de abajo donde hay muchos que viven de un ingreso fijo llamado subsidio: asignación familiar por hijo, Argentina Trabaja, cooperativas vinculadas a procesos productivos o de servicios en los municipios, o de jubilaciones mínimas. De 6.000.000 de jubilados nacionales el 73% cobra la mínima. Tenemos una cantidad de población muy grande que vive de subsidios que no les permiten salir de la pobreza y están congelados desde hace mucho tiempo y no absorben el deterioro inflacionario del presente año ni del anterior, con lo cual se deteriora su capacidad de reproducción de la vida, de consumo de esas familias. A la mayoría de la población, lo que le interesa es la cotización de su ingreso mensual. Muchos hablan del dólar, pero el dólar es un precio más, uno de los tantos. Otros dicen que está atrasado, cuando en realidad lo están los ingresos populares de los que viven de un subsidio, de un salario o los que les venden a esos sectores como el almacenero instalado en una barriada.

MH: En un artículo reciente Ud. señala: «El promedio de ingresos del conjunto de los ocupados, provenientes de su ocupación principal, al cuarto trimestre de 2011, ascendía a \$ 3.198 mensuales. Es un monto insuficiente para una canasta de consumo que oscila en torno a los 6.000 pesos».

JG: Ese sería un nivel de ingreso para satisfacer las necesidades básicas de una familia tipo.

MH: A ver si entendí bien, con \$ 6.000 de ingreso mensual podemos tener un dólar a \$ 6.

JG: Insisto, el dólar es un precio más. A los trabajadores, a los jubilados, a los desocupados que reciben subsidios, a la mayoría de la población, a los tres millones de Asignaciones Universales por hijo, a los dos millones de jubilados que no tenían aportes suficientes y están en la mínima, entre estos dos últimos sectores está el 15% de la población argentina, a esa población le interesa la cotización de su ingreso mensual, no la del dólar. No están preocupados por ir a buscar un «arbolito» ni una casa de cambio. El precio del dólar se instala tan fuerte porque es ideológico, no quiero decir que no sea un problema económico, político, pero la preocupación de la mayoría de la sociedad transita por otros lugares. El tema del dólar es importante porque está expresando que hay problemas en la economía argentina. Aquellos que tienen pesos quieren cambiarlos por dólares, se quieren resguardar, es lo mismo que pasa en la economía mundial donde hay crisis y problemas con las monedas de los países donde esa crisis se manifiesta. Los inversores estadounidenses y europeos buscan oro y por eso crece su precio y así como ellos se desprenden de los euros y los dólares para buscar oro, en Argentina a los que le sobran pesos buscan una divisa, un resguardo de valor, que también puede ser el oro, pero lo más accesible y tradicional es el dólar. No hay un problema cultural, hay un problema de crisis y el que tiene un poquito trata de resguardarlo, por eso la construcción que ha crecido en los últimos años ha sido para especular.

MH: Hay más de 200.000 viviendas desocupadas en la Ciudad de Buenos Aires. Según datos censales en 1991 había 31.559 viviendas vacías, que ascienden a 126.956 en 2001 y a 288.564 en 2010, un 20% del total de 1.424.571 existentes para la época.

JG: En las grandes ciudades se repite este fenómeno, en Córdoba, en Rosario, y todos sabemos que hay déficit habitacional. Mucha gente a la que le sobra dinero, en vez de tenerlo en el banco, por miedo a otro «corralito», a que le intervengan las cajas de seguridad o a tenerlo en la casa y que se lo roben, tiene un activo en ladrillos. Si puede lo alquila, pero no le preocupa porque sabe que en algún momento lo va a poder liquidar sin perder dinero. Estamos hablando de inversores, de gente que no necesita ese dinero. También pueden ser otros bienes como un auto o electrodomésticos. El año pasado crecieron mucho las ventas de televisores y celulares complejos porque, insisto, a los que les sobra dinero prefieren invertir en bienes físicos como forma de resguardarse. En la Argentina hay problemas económicos y muchos, y pareciera que la política económica consiste en resguardar algunos equilibrios macroeconómicos más allá de cómo impacte en la calidad de vida de esta gran parte de la población.

Buenos Aires, 13 de junio de 2012.

ANUNCIOS ECONÓMICOS Y CUMBRES GLOBALES

Antes de partir hacia Estados Unidos para participar del Comité de Descolonización de Naciones Unidas, para denunciar el colonialismo británico a treinta años de la derrota en Malvinas, la presidenta anunció un nuevo Plan para mantener el nivel de actividad económica ante la evidente desaceleración confirmada por el Indec.

En esta ocasión, lo anunciado apunta a un plan de créditos por 20.000 millones de pesos para atender unas 100.000 solicitudes de préstamos para la construcción de viviendas. El programa establece beneficiarios de 18 a 65 años, con tasas de interés por debajo de la inflación, de 2% al 14%, con un máximo de 200.000 a 350.000 pesos según sea la capacidad de pago del usuario, con cuotas de hasta el 40% del ingreso personal.

Los fondos serán aportados por la ANSES, lo que resulta el punto más discutido. Es una crítica, especialmente realizada por los trabajadores jubilados, que se quedan (por razones de edad) afuera del beneficio crediticio y confirman, nuevamente, la resignación de recursos que podrían mejorar sus ingresos, sobre todo si se considera que el 73% de los 6 millones de jubilados nacionales perciben la mínima prevista en los ingresos previsionales.

La operatoria a desarrollar mediante el Banco Hipotecario, supone acuerdos de precios con las empresas proveedoras de la construcción, a la sazón, grandes grupos monopólicos de capital extranjero que se verán beneficiados con la reactivación de la construcción, sector que venía en baja en la coyuntura.

Entre los objetivos de la iniciativa se apunta a mantener el nivel de actividad económica y abastecer la demanda de financiamiento para

contrarrestar el déficit habitacional. Queda claro que junto a las motivaciones económicas es una iniciativa que pretende incidir en la disputa del consenso social, afectado por los problemas económicos y puestos en evidencia en protestas que ganaron la calle y el debate político.

No es la primera vez que se anuncian soluciones habitacionales que finalmente no prosperan. En rigor, existen aún algunas dudas sobre la operatoria concreta y quiénes serán los receptores de una línea de créditos subsidiada hasta ahora con fondos previsionales administrados por el Estado. Las expectativas generadas son muchas y se expresan en cuantiosos inscriptos que imaginan solución al ansiado techo propio.

A LA BÚSQUEDA DE INVERSIONES

La presencia de la presidenta en Nueva York sirvió para que se reuniera en la sede del Consejo de las Américas con empresarios estadounidenses. El objetivo era presentarles el cuadro de situación de la economía argentina con vistas a lograr radicar inversiones en nuestro país.

Ante la crisis de la economía mundial y su efecto expansivo, con impacto en Brasil y otros importantes compradores de la producción local, la Jefa de Estado difundió una visión de la economía local favorable a las inversiones externas. El mensaje fue escuchado por ejecutivos y empresarios necesitados de inversiones rentables para paliar resultados escuálidos de sus emprendimientos ante la crisis mundial, aún con las restricciones vigentes en la Argentina actual, sea para las importaciones o la salida de divisas. Especialmente el mercado del dólar y las divisas interesa al capital externo, que a la hora de definir sus inversiones piensan en términos de obtención y remisión de utilidades en función de su estrategia de acumulación.

El mejor ejemplo de ello es la experiencia de Repsol, que se transformó en una de las principales petroleras globales desde su incursión en la compra de YPF, base empresarial y de excedentes para financiar la expansión mundial.

En su intervención en el Consejo de las Américas, la presidenta destacó la compra del 8% de las acciones de YPF por parte del multimillonario mexicano Carlos Slim, ahora desarrollando sus activos en el negocio petrolero. Mencionó ante los interlocutores neoyorquinos las conversaciones con Chevron, una de las grandes transnacionales del petróleo, para asociarla a los planes de inversión para la explotación energética y el autoabastecimiento propuesto desde la expropiación parcial de YPF.

Destacó también en su discurso ante los empresarios el papel de las inversiones de EE.UU., señalando que Walmart anunció nuevas inversiones en el país, y relató conversaciones con «Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy importante en materia de maíz. Ustedes saben que nosotros somos sextos productores de maíz a nivel global, pero somos segundos exportadores porque tenemos un excedente muy grande producto de las conductas alimentarias de los argentinos. Y además estaban muy contentos porque Argentina hoy está –digamos– a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos.»¹ Anunció las próximas inversiones de Monsanto en Córdoba y Tucumán, enfatizando la cooperación entre el gobierno y la empresa.

Esos anuncios le permiten mostrar el rumbo gubernamental privilegiando la biotecnología aplicada a la alimentación, eje central del Plan agroalimentario hacia 2020; la megaminería y un plan industrial sostenido en nuevas inversiones energéticas; todo lo cual se apoya en un programa científico con base en la biotecnología. Son temas muy importantes que explican buena parte del crecimiento económico de la Argentina, y la discusión estructural sobre si ese debiera ser el rumbo del modelo productivo y de desarrollo en la Argentina.

La apuesta a la extensión agrícola sojera, a la biotecnología, y a la megaminería, comentadas como oportunidades de inversión en la Argentina, fueron en paralelo a la exaltación del país como pagador riguroso de la deuda pública, destacando el próximo vencimiento del Boden 12, herencia de la crisis de 2001. La política de cancelación de la deuda es destacada en las condiciones de crisis vigente en el mercado financiero mundial. Es una conducta que se difunde para atraer capitales externos, en una muestra de confiabilidad del capitalismo existente en el país.

CAPITALISMO EN CRISIS Y CUMBRES GLOBALES

La gira presidencial sigue desde nueva York a México y Brasil. Entre el 17 y 19 de junio se realiza la cumbre del G20 en México, y luego, del 20 al 22 de junio la reunión de la ONU «Río+20» en Brasil. En esos cónclaves se consideran aspectos centrales de la crisis contemporánea, donde la discusión es sobre la crisis capitalista y las opciones de desarrollo. La posición de la Argentina se asienta en los datos del crecimiento económico de la última década, aún con el traspié de 2009 y la desaceleración actual.

1 En <www.presidencia.gob.ar/discursos/25918-almuerzo-en-el-council-de-las-americanas-palabras-de-la-presidenta-de-la-nacion>.

Las definiciones de Cristina Fernández ante los empresarios estadounidenses explicita el modelo productivo y de desarrollo capitalista sugerido al mundo. Se insiste que el problema mundial es de liderazgo político, sugiriendo que la Argentina es el modelo a imitar. En rigor, el país, marginal en la producción mundial, disputa localización de inversiones de transnacionales en nuestro territorio, sin modificar la pauta productivista puesta en debate en Río de Janeiro, especialmente por ambientalistas, trabajadores y campesinos, de diversos movimientos que reivindican otro mundo posible, cuestionando la explotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales.

Sea en las cumbres globales, la de los gobiernos, los que se organizan como alternativas por parte de los movimientos sociales, el debate se concentra en la crisis y sus mecanismos de salida. Unos, desde el poder sostienen la necesidad de relanzar el ciclo de acumulación de capitales afectado por la crisis, y para ello no dudan en reiteradas propuestas de ajuste que descarguen el costo sobre millones de personas. Otros, la mayoría social, por ahora se indigna y se manifiesta por el no, en contra de las políticas antipopulares, en una búsqueda por otorgarle nuevo horizonte programático a la perspectiva emancipatoria.

La coyuntura económica y política en la Argentina está atravesada por los debates sobre el devenir en el país y en escala global, lo que supone discutir el lugar del país en el sistema mundial, y especialmente la política de alianzas en el mundo para afirmar una u otra de las variantes antes mencionadas. ¿Qué sentido le impone la Argentina a su participación en las cumbres globales? Es un interrogante a realizar, según sea la participación en los cónclaves oficiales, o en las reuniones alternativas convocadas por los movimientos populares.

Buenos Aires, 16 de junio de 2012.

RESOLUCIONES DEL G20 EN LOS CABOS (MÉXICO)

La principal decisión asumida en Los Cabos, México por el cónclave de los presidentes del G20 es la capitalización del FMI por 456.000 millones de dólares. Como parte de ese monto, la zona euro le aportará al organismo 200.000 millones, de los cuales, los españoles se comprometieron con 18.800 millones. Es sabido que Europa y el euro estuvieron en el centro de los debates, por la crisis y el ajuste que ella supone. Así y todo, los gobernantes de la eurozona transferirán nada menos que 200 mil millones de dólares al FMI..., para prestarle a los «países en problemas». Suena increíble pero es verdad.

La crisis se manifiesta en crecimiento del desempleo, la marginación, el empobrecimiento, y dificultades de la población de menores ingresos; y la solución es acrecentar la capacidad de préstamos del FMI. Si hay un organismo responsable de la crisis en curso es precisamente el FMI.

Sorprende que países como Brasil e India, con inmensos bolsones de pobreza y atraso, cada uno aportará 10.000 millones de la moneda estadounidense al Fondo; igual que Rusia con una cifra similar. China, otro que concentra inmensa población empobrecida contribuirá con 43.000 millones; y Sudáfrica con 2.000 millones. Imaginemos esos fondos aplicados a políticas alternativas en beneficio de los más necesitados entre los pueblos de esos mismos países.

Todos ellos son los países BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica), los «emergentes» que están de moda; los que se supone disputan la hegemonía mundial desde su lugar ascendente en la economía; que obviamente incluye el financiamiento de la crisis. Alguna vez mencio-

namos que la categoría «emergente» supone una calificación funcional a las necesidades de inversión del capital global. Se es emergente ante la vista del inversor que busca niveles adecuados de rentabilidad. En la crisis «emergen» ciertos países donde conviene invertir.

Son emergentes para los inversores. No es una calificación que destaca virtudes sobre las condiciones de vida de la población, sino que apuntan a virtudes requeridas por los capitales en búsqueda de ganancias, precisamente en momentos de crisis, donde el eje es la dificultad para valorizar a los capitales.

Otros emergentes también aportan, tal el caso de Corea del Sur, que contribuirá con 15.000 millones de dólares; México lo hará con 10.000 millones; Turquía con 5.000 millones; y Colombia con 1.500 millones. Por su parte, Japón se anotó con 60.000 millones, y EE.UU. se abstuvo de aportar en la ocasión, en un claro acto de transferencia de los costos de la crisis mundial al resto del mundo.

El G20 recapitaliza al FMI, tal como ya hizo en ocasiones anteriores, ahora con 456.000 millones de dólares. ¿Para qué? Para prestarle a los países endeudados («países con problemas»), para que puedan cancelar sus deudas con los bancos y aportar al «salvataje» del sistema bancario en crisis.

La voz de los «20», más allá de altisonantes declaraciones a favor del «crecimiento y del empleo», volvieron a salvar a los bancos en problemas, y lo hicieron con recursos públicos.

El Estado salió nuevamente a resolver los problemas del capitalismo en crisis. ¿No era que había que evitar la participación del Estado en la Economía? ¿Dónde quedó el credo liberal, o neoliberal? ¿Son todos keynesianos? Keynes era un neoclásico, que pensó en la renovación del pensamiento hegemónico ante la crisis para salvar al capitalismo en la década del treinta del siglo XX; que ahora se manifiesta como un modo de pensar «pragmático» en la coyuntura de la recidiva crisis del capitalismo.

TODAS LAS FICHAS AL CRECIMIENTO

Lo que hay que salvar es el funcionamiento del capitalismo, y por eso las llamadas a la salida de la recesión o desaceleración económica. El G20 se pronuncia por aplicar «políticas de crecimiento», como si cualquier crecimiento fuera bueno en sí mismo.

Es algo a interrogar a los ambientalistas reunidos en Río de Janeiro a propósito de la contaminación de la *cidade maravilhosa*, con la Bahía

de Guanabara *poluída* (altamente contaminada), situación similar a lo que ocurre en las grandes ciudades de Nuestramérica (de la crónica de María Elena Saludas, participante de la cumbre popular en Río+20).

Vale la crónica ya que una de las propuestas del G20 se concentra en la inversión para infraestructura, que suena muy bien a los oídos «keynesianos, desarrollistas, o neodesarrollistas», que asocian «inversión» con «crecimiento» y «bienestar».

Así se justifica la inversión en infraestructura para saquear las riquezas naturales de Nuestramérica, para lo que vale recordar la vieja «conquista», y por qué no, la nueva aventura por la megaminería a cielo abierto, o la *sojización* de los países del Mercosur, proceso que entre otras cuestiones, desestabiliza al presidente paraguayo, tal como denuncia Idilio Méndez en su artículo: «Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguay y el juicio político a Lugo».

Es Monsanto la misma empresa que enorgulleció a la presidenta de la Argentina en la reciente reunión en Nueva York con los empresarios estadounidenses, donde se conocieron las inversiones de la transnacional por 150 millones de dólares en las provincias de Córdoba y Tucumán.

¿Estamos contra el crecimiento y las inversiones? No. El problema es que no se trata de cualquier crecimiento, ni de cualquier inversión. Si la inversión capitalista se define por la obtención de ganancia del inversor, resulta conveniente discutir bajo qué circunstancias se define la inversión capitalista, especialmente cuando se alude al capital global. El G20 apunta a la búsqueda de nuevas fuentes de rentabilidad del capital, y no necesariamente a satisfacer necesidades de la población.

En los medios de comunicación y en la sociedad se instaló un debate donde los «buenos» son los que recomiendan políticas de crecimiento, entre los que estaría EE.UU. (Obama necesita un repunte económico para ganar un segundo periodo en las próximas elecciones de renovación presidencial en noviembre) y los países emergentes (recordar el significado de *emergente*); y los «malos» los que sostienen políticas de austeridad y ajuste, especialmente Europa, y más precisamente Alemania.

Entre los primeros están los críticos de las políticas neoliberales, aunque no tengan reparos a la hora de otorgarle 456.000 millones de dólares al FMI para facilitar créditos condicionados a los países en problemas. Son condicionamientos que incluyen la campaña electoral, como en Grecia, donde el FMI chantajeó para que la izquierda radical no triunfara en las elecciones recientes, claro que fue una gestión en la que estuvo acompañado por el Banco Central Europeo y las autoridades de la Eurozona.

No hay buenos y malos en la consideración de la crisis; solo matices sobre cómo «resolver la crisis capitalista», y por eso el «crecimiento», para restablecer el consumo, sí, pero especialmente la valorización, esencia del desarrollo de la sociedad capitalista. Es necesario que aparezca una voz diferenciada, con críticas al capitalismo en crisis, y que proponga superar no solo la crisis, sino el capitalismo.

RESTAURAR LA CONFIANZA

Junto al crecimiento buscado, se puede leer en las Declaraciones finales del G20 que superar la recesión y desaceleración restablecerá la «confianza». Es bueno interrogarse ¿confianza en qué, para qué, en quiénes?

Entre las medidas sustentadas en la Declaración del G20 se puede leer el estímulo a la búsqueda de acuerdos para una unión bancaria en Europa, para «examinar medidas concretas en vista a una arquitectura financiera más integrada, que incluya la supervisión, la reestructuración y la recapitalización bancarias, así como la seguridad de los depósitos», junto a promover «empleo de calidad». Confianza en el sistema bancario.

El discurso de la regulación bancaria y la arquitectura financiera está dicho luego del salvataje de la banca española por 100.000 millones de euros; de la estafa de banqueros y ejecutivos de cuantiosos ingresos pese a la crisis, al desempleo y a la miseria. Claro, todo para salvaguardar el sistema, los depósitos y los «empleos de calidad».

Resulta poco creíble pensar en las resoluciones del G20 como «medidas necesarias para reforzar el crecimiento mundial y restaurar la confianza», como si en ello fuera el buen vivir de la población vulnerable. ¿Cuántos recursos públicos han sido ya canalizados al salvataje de bancos y empresas quebradas?

Parte de la búsqueda de la confianza se concentra en el llamado a una «tregua» en las acciones proteccionistas sobre el comercio mundial, por lo menos hasta 2014. Es el eufemismo para instalar el discurso hegemónico del capital transnacional por la liberalización de la economía mundial.

Es el programa de la OMC, de los Organismos financieros internacionales, y el legado principal de lo que se llamó el Consenso de Washington: la promoción del libre comercio, del libre cambio, de la apertura de los mercados para la penetración de los capitales más concentrados.

Cada G20 termina siempre con evocación al programa de máxima: la liberalización de la economía mundial, base de sustentación del pro-

grama de salida de la crisis de los setenta, y que en la región americana se manifestara a través del ALCA, y luego en los tratados regionales o bilaterales por el libre comercio. No en vano una de las noticias que presentó Obama a los anfitriones fue la invitación a México para ser parte del Acuerdo de Asociación Transpacífica, una negociación comercial plurilateral que involucra además del país azteca a Nueva Zelanda, Australia, Brunei, Malasia, Singapur, Vietnam, Chile, Perú y Estados Unidos.

Este es un proyecto que involucra a 500 millones de habitantes; un 26% del PBI mundial; un 15% de las exportaciones mundiales y un 18% de las importaciones globales. Es un acuerdo que EE.UU. utiliza para su proyección sobre el Pacífico en competencia con China.

La confianza buscada es para relanzar el proyecto capitalista y superar la crisis. En el próximo tramo brasileño de los debates, «Río+20», se incorporarán los mensajes de un «capitalismo verde», con «empleos verdes». Es un mensaje que busca consenso social ante la conciencia ecologista vigente. Pero ese proyecto verde, de ensoñación de los ideólogos del capitalismo contemporáneo, se asocia a la explotación depredadora de los recursos naturales. ¡Ojo con la confianza a restaurar! La confianza puede hacernos cambiar nuestras riquezas naturales por espejitos de color, verde, por supuesto.

LA PROPUESTA ES POR OTRO MODELO PRODUCTIVO Y DE DESARROLLO

En variados debates me señalan mi pesimismo en las «soluciones» que se ensayan, incluso en «gobiernos progresistas» (que no dejan de ser capitalistas). Son los mismos que me endilgan mi optimismo por la creciente «indignación» de un movimiento social que no tiene claridad sobre el rumbo a seguir, y solo se afirma en el NO a la realidad que les toca vivir, la del ajuste y la austeridad (Grecia, Italia, Europa en general, ahora, y de Nuestramérica en las últimas dos décadas del siglo XX).

No es menor afirmarse en el NO. A veces es un grito de dignidad, aunque no se conozcan los SI, y que sin embargo se abren paso entre nuevos desafíos que instala el constitucionalismo renovado en Bolivia, Ecuador o Venezuela; la propia renovación socialista en Cuba, e incluso las búsquedas de expresiones organizadas del movimiento popular por un movimiento de constituyentes sociales, que emergen en Argentina, Chile, Colombia, entre otras experiencias de organización popular en la construcción de un proyecto emancipador. En ese camino se inscribe la lucha por la soberanía alimentaria, energética, financiera, ambiental.

Los NO son el modelo productivo y de desarrollo capitalista contemporáneo, sustentado a la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y la depredación de los recursos naturales. Los SI apuntan a nuevas formas de relación económica, social, política y cultural para reproducir la vida cotidiana en armonía con el conjunto social y los bienes comunes.

En definitiva, ni pesimismo ni optimismo, sino reivindicación del NO y emergencia y difusión de nuevos SI. ¿Resulta simple? Claro que no. Es parte de la búsqueda por una nueva sociedad. El fantasma de los indignados recorre el planeta, y no se trata de «jóvenes interconectados» mediante nuevas tecnologías de comunicación y redes sociales, sino de trabajadores sin empleo, flexibilizados, precarizados, sobreexplotados, mayoritariamente jóvenes que rechazan el presente sin futuro y reescriben su propia historia emancipadora, liberadora.

Si el ciclo inaugurado por el Manifiesto hizo evidente el surgimiento de la práctica y teoría revolucionaria que inspiró históricas luchas de clases entre 1848 y la ruptura de la bipolaridad; el presente es un momento de imaginación creativa en la emergencia de renovadas perspectivas para la teoría y práctica de la Revolución.

Buenos Aires, 20 de junio de 2012.

ENTRE LA CRISIS MUNDIAL Y LAS TENSIONES POLÍTICAS: DATOS PARA UNA SEMANA TURBULENTA

Transitamos una semana turbulenta, con muchos asuntos globales, regionales y locales para considerar. En el plano global se mezclan la finalización de dos cónclaves gubernamentales que analizaron la crisis: el G20 en México y Río+20 en Brasil. A nivel regional destaca el golpe institucional en Paraguay, con mucho olor a soja. Localmente creció la tensión entre la CGT y el gobierno.

EL MUNDO Y SU CRISIS

Del encuentro en México, más allá de declaraciones por el crecimiento de la economía y el empleo, lo real resultante es la recapitalización del FMI por 456.000 millones de dólares, sin aportes de EE.UU. y compromisos de contribuciones sorprendentes. Entre otras, las de Europa con 200.000 millones de dólares, que confirma que el «salvataje» es a los bancos y empresas en problemas más que atender las necesidades de desempleados y empobrecidos por la crisis.

Más sorprendente aún resulta el apoyo de los países emergentes, donde China se anota con 43.000 millones; Brasil y México con 10.000 millones cada uno, e incluso Colombia con 1.500 millones. Imaginemos esos recursos aplicados soberanamente al desarrollo alternativo de nuestros países.

¿En qué piensan aquellos que imaginan un buen destino de esos cuantiosos recursos en manos del FMI? ¿Cuánto cuesta que emerja el Banco del Sur y con qué facilidad resurge el FMI desde la existencia del G20? En Río+20 no puede disimularse el fracaso, aún con la colorida propuesta por una «economía verde», que no es otra cosa que la mercantilización de la naturaleza.

Pintar de verde la mercantilización de la producción en curso no esconde los problemas económico-sociales y la crisis mundial del capitalismo contemporáneo, donde se verifica el crecimiento de la desigualdad, con millonarios más millonarios, en el mundo y en la región Nuestramericana, según Informe de la Consultora Capgemini-RBC Wealth Management, y sin sorpresa, estos millonarios en dólares provienen del sector minero, agrícola y energético, es decir, del negocio de los recursos naturales, de la llamada «economía verde».

No hay duda de que la apuesta a la industrialización transnacionalizada de la producción agraria y minera tiene entre sus beneficiarios a grandes corporaciones económicas que privilegian sus beneficios por encima de la calidad de vida de las poblaciones en que asientan sus inversiones; y aún hablando de «trabajos verdes» la apuesta es a la reducción de los ingresos de los trabajadores, ya que el salario es concebido como un costo que debe reducirse para enfrentar la crisis; y ni qué hablar de la depredación de los recursos naturales.

El fracaso de Río+20 era un resultado esperado, más allá de la magnitud del cónclave con presencias prácticamente de todo el mundo. El problema es que el modelo productivo capitalista, aún en crisis, es contaminante, sobreexplotador, depredador y destructor.

Las cumbres populares desarrolladas en México y Brasil demandan un debate en la sociedad para modificar el modelo productivo y de desarrollo, pensando en soluciones alternativas. En ese sentido sorprende el llamamiento de los movimientos campesinos que destacan la potencia de la producción alimentaria indígena, campesina y de agricultura familiar, contra la segmentación irracional de la industrialización que domina desde el paquete tecnológico inicial a la comercialización en grandes tiendas y supermercados, que achica la diversidad de la dieta y la riqueza proteica necesaria para una vida cotidiana saludable.

Pero también destaca las convocatorias realizadas a investigar el delito económico cotidiano, especialmente con el movimiento de dinero y principalmente con la deuda pública, gran condicionante de nuestras economías, y por supuesto rechazar el accionar de los organismos internacionales y el salvataje de bancos que continúan acumulando grandes ganancias a costa del empobrecimiento de gran parte de la población.

EL PARAGUAY «VERDE» GOLPEA

Es más, no puede entenderse el fenómeno del golpe institucional a Lugo, el presidente paraguayo, sin la dominación de la producción sojera que pinta

de verde la agricultura de los países del Mercosur, la región productora y exportadora por excelencia de la oleaginosa y sus derivados.

Horas previas al golpe, en una potente denuncia, el periodista paraguayo Idilio Méndez anticipaba el «duro revés a la izquierda, a las organizaciones sociales y campesinas, acusadas por la oligarquía terrateniente de instigar a los campesinos; avance del agronegocio extractivista de manos de las transnacionales como Monsanto, mediante la persecución a los campesinos y el arrebato de sus tierras y, finalmente, la instalación de una cómoda platea para los oligarcas y los partidos de derecha para su retorno triunfal en las elecciones de 2013 al Poder Ejecutivo».¹

Todavía no se había producido el Golpe, pero había claridad sobre quiénes había provocado la maniobra que terminó con la muerte de 18 personas, policías y campesinos, y que el poder endilgó a Lugo para destituirlo en pocas horas, poniendo en discusión la debilidad de las democracias en nuestra región.

Los campesinos ocupan tierras ante la creciente ocupación terrateniente, de paraguayos, y vecinos, especialmente brasileños («brasiguayos»), todos sustentados en el paquete tecnológico de las transnacionales de la alimentación y la biotecnología con Monsanto a la cabeza. Es algo para pensar en el conjunto de los países del Mercosur.

Queda el interrogante si Paraguay se sumará a la experiencia de Honduras, que luego de fuertes declaraciones críticas de los gobiernos, el golpe institucional finalmente se abrió camino. El gran interrogante será la movilización popular que eludió el presidente destituido.

El cambio político en la región tiene el límite del poder económico, lo que supone una lección a considerar, que si no se afecta estructuralmente ese poder, enfrentándolo con otro poder (anticapitalista), para otra ecuación de beneficiarios y perjudicados, el sistema capitalista retoma la iniciativa y el rumbo de la acumulación.

No solo se trata de derechas, izquierdas o centroizquierdas, sino de orientación del rumbo económico; si afirmando las tendencias de la acumulación capitalista en curso más allá de la crisis mundial, o promoviendo rumbos alternativos al capitalismo.

Queda claro por la experiencia reciente que el poder económico no solo recurre a las armas en su iniciativa política, aunque tenga el apoyo de las crecientes bases militares en la región, la aplicación generalizada de

1 Idilio Méndez; «Monsanto golpea en Paraguay: Los muertos de Curuguaty y el juicio político a Lugo».

leyes antiterroristas y otros mecanismos de intromisión e incidencia; pues con los medios de comunicación y las formas que asume la democracia representativa (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) mantiene la hegemonía del régimen del capital.

EL CONFLICTO ES POR LA APROPIACIÓN DE LA RIQUEZA SOCIAL

La discusión es por las riquezas. Es lo que se discute en la coyuntura de la Argentina. Es un debate sobre la riqueza y la pobreza. Un reciente estudio de Flacso da cuenta de que en la última década la tasa de ganancia es altamente superior a la de la década anterior, la del menemismo.²

El promedio de la tasa de ganancia durante 2002-2010 alcanzó al 37,2%, mientras que entre 1993-2001 fue del 24,8%. En los últimos años se verifica un porcentual de ganancia mayor al 50% que en tiempos del menemismo.

¿Cómo se explica ello? En economía no hay magia, en todo caso la riqueza cambia de bolsillo. El documento lo explica con la disminución de los salarios y el incremento de la productividad. Esa es la razón de la recurrencia en el debate sobre distribución del ingreso, porque aún bajando el desempleo del 22 al 7% en una década, no solo se está por encima de la media de los años previos, los ochenta, y ni hablar de los setenta, sino que se trata de una recuperación del empleo sobre la base de ingresos disminuidos históricamente, y ganancias en alza.

La turbulencia de la semana, con opiniones políticas muy diversas, sobre quien juega el partido que pretende la derecha, el conflicto continuará ante la convocatoria a movilización de la CGT, con un tema sensible para el debate: el aporte de los trabajadores al financiamiento del Estado vía Impuesto a las Ganancias.

Tal como señalamos para el caso paraguayo, si no se afectan los intereses del poder económico, este retoma la iniciativa política para asegurar su utilidad, y con ella el modelo de acumulación. Sea por las cumbres globales o la experiencia paraguaya, en la Argentina se abre paso la discusión sobre el modelo económico y el rumbo político, es decir, sobre el modelo productivo y de desarrollo, tanto como sobre el gobierno del capitalismo local, incluso, una perspectiva alternativa.

No es una cuestión de apoyo o crítica al gobierno, sino de la orientación de la política económica y la estructura de dominación que surge de

2 Pablo Manzanelli, «La tasa de ganancia durante la postconvertibilidad. Un balance preliminar», en <www.apuntesparaelcambio.com.ar/apc_n3.pdf>.

allí, con el interrogante de si es posible consolidar un rumbo por transformaciones profundas, estructurales, contra la ganancia y por los ingresos populares.

Buenos Aires, 23 de junio de 2012.



LA CRISIS MUNDIAL TAMBIÉN SE SIENTE EN LA ECONOMÍA LOCAL

Las autoridades de la zona euro aprobaron un rescate de la banca española por 100.000 millones de euros a cambio de un gravoso ajuste que supone aumentar el IVA del 18 al 21%, los mismos niveles que ese tributo tiene en la Argentina, y que como sabemos afecta en mayor medida a los sectores de menores ingresos de la sociedad.

Esa ofensiva contra el gasto social también se concentra en los trabajadores, ya que se presiona para profundizar las reaccionarias medidas que viene asumiendo el Partido Popular en la gestión del Estado español, ahora reduciendo los subsidios al desempleo, el que se acerca al 25%, y si se considera solo la demanda laboral juvenil al 45%.

La decisión del ajuste está legitimada por el Parlamento, de una mayoría de derecha recientemente electa en castigo a la previa gestión de la socialdemocracia (¿izquierda?), gobernante durante las primeras manifestaciones de la crisis.

TRATAMIENTO POLÍTICO SOBRE LA CRISIS

Es importante destacar como la institucionalidad europea, con larga tradición democrática y puesta de ejemplo por su «Estado benefactor», es la que aboga por el ajuste, más allá de declaraciones de fracciones que son corresponsables de la situación de crisis, y especialmente del ajuste, que tiene historia y no empezó ahora con la derecha en el gobierno.

Terminar con el Estado benefactor es la tarea del capitalismo contemporáneo, que solo se justificó mientras el mundo era bipolar, no ahora,

luego de la caída del socialismo en el Este europeo. Vale destacar que el ajuste continúa siendo resistido en España con masivas movilizaciones que incorporan otra opinión política sobre el tratamiento de la crisis.

Los partidos del sistema, sean la derecha (PP) y la izquierda (PSOE), tanto como sus organizaciones sociales y sindicales vinculadas y/o asociadas, son responsables de la política que desemboca en la crisis actual. El otro actor es la movilización popular, que incluye por cierto a organizaciones políticas y sociales de izquierda.

Son elementos para considerar el carácter político de la crisis, la que no solo puede definirse por sus facetas económicas o financieras. Las movilizaciones intentan llamar la atención sobre la crisis desde otra perspectiva, donde lo que predomina es el NO al ajuste, sin quedar muy en claro cuáles son los SI para sustentar un programa alternativo al hegemónico capitalista en curso.

El NO es algo que se generaliza en el movimiento de indignados que recorre el mundo. De hecho, presenta una situación similar a los NO del reclamo sustentado en las movilizaciones de 2001 en nuestro país.

El interrogante es si esas movilizaciones pueden torcer el rumbo del ajuste y la regresiva reestructuración en Europa y encaminar un rumbo de cambio político, asunto esencial para pensar en otro desarrollo económico.

Las clases dominantes sugieren profundizar el rumbo neoliberal, de apertura y cambios estructurales del orden capitalista, contra el trabajo y a favor del capital y la seguridad jurídica de las inversiones. Otra variante es la «Tercera vía», que en su momento difundió el laborismo inglés y los demócratas estadounidenses, como rumbo entre el «salvajismo ortodoxo» y la socialdemocracia tradicional de los gloriosos treinta años (1945-1975).

Es interesante destacar la aparición del «otro» en la lucha política (de clases se decía en otra época). Ese otro es el sujeto movilizad. No solo hay disputa de proyecto en el marco del capitalismo, sino nuevas búsquedas sin precisiones, tal como ocurría en un largo ciclo que se reconoce desde la aparición del Manifiesto Comunista hasta la caída del socialismo en el Este de Europa. He aquí el dato relevante de la época.

Una conclusión (muy rápida a mi criterio) que se venía construyendo en el último tiempo era que la salida de la crisis suponía una mayor ofensiva de las derechas, y con ella el restablecimiento del programa de apertura y liberalización de la economía, algo que se materializaba, por ejemplo, con los gobiernos tecnócratas en Grecia e Italia.

Se enfatizaba esa opinión luego de la reciente votación griega, que desplazó a un segundo plano a las expresiones electorales de la resistencia, el Syriza (la izquierda radical asociada al movimiento altermundialista) y el KKE (los comunistas, liderando buena parte del sindicalismo clasista).

Lo que no se vislumbra, más allá de los matices de las proposiciones de la resistencia griega, es que estas propuestas instalaron en el debate programático medidas como la auditoría de la deuda y el rechazo a los «salvatajes» con cláusula de ajuste, algo que recordó por estas horas el economista heleno Costa Lapavitsas, de paso por la Argentina.¹

Pretendo enfatizar que no solo existe la mentada ofensiva de la derecha, sino también la irrupción de los NO y en forma emergente de los SI, los que comienzan a constituirse en programa de un sujeto transformador en formación.

Es un proceso que se desarrolla en un ciclo de luchas sociales y políticas que supone una nueva experiencia humana, que aprende del pasado y renueva la perspectiva, sin las certezas de otras épocas, pero en la búsqueda de nuevos horizontes emancipadores. De ello da cuenta la realidad Nuestramericana de este comienzo del siglo XXI.

EL EJEMPLO REGIONAL, ENTRE LA PRODUCCIÓN Y LA POLÍTICA

El interés del profesor griego en el acontecer de la región latinoamericana se asocia al aprendizaje que puede obtenerse de los cambios políticos ocurridos, ya que es impensable repetir en cualquier territorio y condiciones, unas políticas, que están asociadas a determinada estructura económico-social y productiva.

Para ser concretos, Grecia no tiene soja, ni la diversidad y extensión de recursos naturales que nutre a Sudamérica. ¿Cuál es la base productiva para pensar políticamente una superación alternativa de la crisis griega, española o europea, e incluso mundial?

Queda claro con las movilizaciones que los pueblos rechazan el ajuste, y que muchos teóricos, políticos o militantes extracontinentales miran hacia Nuestramérica en búsqueda de inspiración, ya que nuestros países ofrecen una evolución macroeconómica que en apariencia la aleja de los problemas que hoy presentan países del norte desarrollado.

¹ Lapavitsas destacó «el éxito de la renegociación de la deuda argentina luego de 2001» tal como puede leerse en el sitio en internet del Ministerio de Economía, con foto de Hernán Lorenzino y el profesor de Economía y Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Londres.

Digo en apariencia, porque el crecimiento económico esconde en el diagnóstico el fenómeno de la crisis. Buena parte del crecimiento regional está condicionado al alza de los precios de exportación de nuestros países, los que se explican por la crisis.²

Ni el oro, ni el petróleo o la soja expresan subas de precios por cambios en la productividad de sus ramas específicas, sino por imperio de multiplicidad de crisis, entre las que destaca la alimentaria, la energética o medioambiental, los problemas financieros, especulativos y de mercado.

Es más, ahora empieza a sentirse en forma directa el impacto de la crisis, con la desaceleración de Brasil e incluso de China e India; tres motores del fenómeno «emergente» de los últimos años.

Las autoridades argentinas explican la caída de la producción local por la baja en la demanda brasileña, especialmente de automotores, adonde se dirige la mitad de la producción automotriz del país. En efecto, el Indec informa que en mayo de 2012 la producción se retrajo un 0,5% contra el mismo mes de 2011³, un leve crecimiento del 0,2% contra el mes de abril de 2012, y una evolución del 3% para el año transcurrido, bastante menos que el crecimiento de 2011 y lo previsto en el Presupuesto para el 2012 en curso.

Los registros del Indec dan cuenta de 360.000 puestos de trabajo perdidos durante el semestre transcurrido desde octubre de 2011 a marzo de 2012, con la consecuente suba de la tasa de desempleo respecto del registro trimestral previo.

La situación más delicada, según las cifras oficiales, se presentan en la retracción industrial. La contracara es el agro, con precios record de las *commodities*, especialmente el maíz y la soja. Más allá de los datos del crecimiento o la desaceleración, se confirma el sentido del modelo productivo y de desarrollo extractivista, acompañando la tendencia de la demanda mundial. Se confirma una producción local para el mercado mundial, lo que condiciona a la baja los salarios.

Sea para aquellos que analizan desde afuera la realidad de cambio

2 No es solo por el comercio internacional, ya que buena parte del crecimiento industrial (automotores, por ejemplo), de la construcción, o de los planes sociales, se asocian al superávit comercial o fiscal que genera la situación de elevados precios de los bienes de exportación. El consumo y la inversión en crecimiento no es ajena a la evolución extractivista del comercio exterior.

3 Indec. Estimador mensual de actividad económica, al 20/7/2012, consultado el 21/7/12, en <www.indec.mecon.ar>.

político en la región, o incluso para el pensamiento de nuestros pueblos, la mirada no debe colocarse solo en la producción, o en lo económico propiamente dicho, sino y principalmente en la política, en las condiciones subjetivas de lucha política que motorizan las mutaciones en la región.

Es un debate no cerrado, en especial sobre los beneficios, o no, de la orientación esencialmente extractivista del modelo productivo generalizado en nuestra región, más allá de definiciones a la derecha o a la izquierda de los gobiernos.⁴

Precisamente, en estas horas se discute en Paraguay la base económica y productiva (sojera) del Golpe institucional, que a horas del ilegítimo acontecimiento de desplazamiento de Lugo, el viejo nuevo régimen aprobó trascendentes medidas para la difusión de los transgénicos en el agro y consolidó posiciones de transnacionales en la actividad económica.

La reflexión apunta a pensar que haber favorecido y fortalecido en Paraguay en estos años la economía extractivista, contra otras formas de producción agraria, sea campesina, indígena, cooperativa, o de producción familiar, es parte de la desmovilización popular en el sustento de un cambio estructural.

Nuestros comentarios apuntan a destacar el papel de la política y la construcción de sujetos organizados y movilizadas por objetivos de cambio estructural, de modelo productivo y de desarrollo. No hay economía al margen de la política, ni viceversa.

EL QUE NO LLORA NO MAMA, PERO... ¿CUÁL ES EL RUMBO DEL RECLAMO?

Quizá convenga, a propósito de lo dicho, reflexionar sobre el tema del pago del aguinaldo a los estatales de la provincia de Buenos Aires. Más allá de las disputas en el gobierno, entre CFK y Scioli, fue la movilización de estatales, judiciales, médicos o docentes los que indujeron una «solución», la que se ejecutará con aportes de la ANSES y el endeudamiento del Estado bonaerense.

Convengamos que es una solución a medias, porque en el camino queda el compromiso público de cancelar las nuevas deudas públicas, lo que puede significar nuevas propuestas de ajuste al salario de los estatales o al gasto social, ya que sería una gran sorpresa que el tema se resolviera

⁴ Venezuela o Colombia; Chile o Bolivia; Argentina, Brasil, Paraguay o Uruguay, con diferencias o matices políticos en sus gobiernos, todos definen en el extractivismo la base de la acumulación económica.

con reformas progresivas del régimen tributario.

Se sugiere en discursos oficiales que el «modelo resuelve más que la protesta». Lo reiteró la presidenta en varios discursos, especialmente con los sindicalistas empresarios de la «nueva CGT». La realidad demuestra lo contrario, dando la razón que asiste al tango cuando frasea que «el que no llora no mama».

La coyuntura mundial, regional y local evidencia que la crisis continúa y se profundiza, afectando a los sectores más desprotegidos, que son los mismos que salen a las calles reclamando en contra del ajuste, y que en algunos casos empieza a dotarse de un programa en otro sentido al hegemónico. ¿En qué sentido? Ese es uno de los problemas, ya que el rumbo alternativo a la crisis capitalista no está delineado *a priori*. Lo llaman socialismo en Cuba, en proceso de renovación; socialismo del siglo XXI en Venezuela, en situación de discusión permanente, especialmente ahora en época electoral; o socialismo comunitario en Bolivia, recogiendo la tradición de organización y cultura comunal en el Altiplano.

No es tanto el problema sobre cómo se lo denomina, sino el sentido de las medidas que se asumen. El problema no es crecer o no crecer, sino qué, cómo, con quién y para quién producir; qué necesidades se pretende satisfacer. La cuestión es el contenido y objetivo del orden económico, social, político y cultural que se propone. La discusión es de orden civilizatorio.

Buenos Aires, 21 de julio de 2012.

CANCELACIÓN DEL BODEN 12. ALGUNAS REFERENCIAS Y REFLEXIONES

El viernes de 3 de agosto la Argentina canceló el Boden 12 por un total de 2.198 millones de dólares. En la información provista por el Ministerio de Economía¹, con la difusión de los gráficos presentados en el 158º aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires por Cristina Fernández de Kirchner (CFK), se destacan las consecuencias del pago.

La conclusión oficial es el «desendeudamiento» y la «independencia». La primera es muy discutible, sea por deuda pública no registrada y demandada en fueros internacionales, como por utilización de fondos locales a cambio de compromisos a futuro, los que serán cancelados por el Tesoro nacional. La segunda afirmación resulta dudosa, ya que la independencia supone una utilización en el país del excedente económico producido localmente. Profundizar esta concepción supone discutir quiénes recibieron los dólares de la cancelación del título público en cuestión.

Nuestras reflexiones apuntan a señalar el condicionante estructural que supuso, supone y supondrá el endeudamiento externo, como elemento sustantivo de la lógica capitalista. Con ello se profundiza la dependencia de la Argentina al capitalismo mundial.

¹ <<http://www.mecon.gov.ar/wp-content/uploads/2012/08/Presentacion-Boden-2012.pdf>>, visitada el 4/8/2012.

¿A QUIÉN SE LE PAGÓ 2.200 MILLONES DE DÓLARES?²

- 1.706 millones de dólares se pagaron a tenedores externos, un 78%.
- 492 millones de dólares se cancelaron a tenedores domésticos, el 22% restante.

Los principales beneficiarios de la cancelación del Boden 12 son acreedores externos, principalmente bancos y fondos de inversión, en una coyuntura mundial de crisis, donde esos acreedores empujan los «salvatajes» de los países con serios problemas de deuda pública. Vale confirmar que los bancos transnacionales tienen problemas para cobrar a los países endeudados. El FMI, los Bancos Centrales de los principales países capitalistas y sus gobiernos, impulsaron «salvatajes» que se orientaron principalmente a la banca en problemas desde 2007-2008 en EE.UU., Europa y Japón.

¡La Argentina acaba de depositar 1.706 millones a esas entidades que no cobran si no se instrumentan los «salvatajes» globales! Acreedores externos felices. Las reservas internacionales cayeron en un día por ese monto, quedando reducidas a 45.000 millones de dólares debido a las transferencias realizadas. En febrero de 2011, el BCRA registraba 52.427³ millones de dólares, los que disminuyeron progresivamente por 7.500 millones de dólares en los últimos 17 meses.

¿Y LOS PEQUEÑOS AHORRISTAS?

Qué curioso el funcionamiento del capitalismo. La discusión en estos días, previos a la cancelación, aludía a que se «terminaba con el “corralito”», que debe recordarse sufrían los depositantes en bancos, a quienes se les aplicaron restricciones para retirar sus depósitos bancarios desde fines de noviembre de 2001. En rigor, el tema se extiende al «corralón» que supuso la pesificación asimétrica, como mecanismo de salida del régimen de convertibilidad.

Para facilitar el retiro de los fondos «acorralados» en 2002, se emitieron una serie de bonos, entre ellos el que se acaba de cancelar, el Boden 12, que los pequeños ahorristas recibieron y liquidaron por debajo de su valor nominal para así hacerse de dinero. Esos bonos pudieron usarse también para cancelar deudas o adquirir bienes. Lo que ocurrió fue que grandes operadores financieros, principalmente bancos, compraron esos

2 Ib.

3 Sitio del BCRA, en <www.bcra.gov.ar>, visitado el 4/08/12.

bonos y los *aguantaron* hasta ahora, cobrando en tiempo y forma, en dólares, algo que muy pocos pueden hacer en la coyuntura.

Vale recordar que Duhalde asumió la gestión del gobierno a comienzos de 2002 afirmando: «el que invirtió en dólares recibirá dólares». Eso no fue real para los pequeños inversores que recibieron bonos y cambiaron por debajo de su valor; pero si se convirtió en realidad para aquellos que *aguantaron* los Boden 12 hasta el vencimiento, que no solo cobraron en dólares, sino que el propio BCRA les transfirió al exterior los 1.706 millones de dólares, en momentos de restricción a la salida de divisas.

Los tenedores de Boden 12 con menos de 125.000 dólares, apenas representan el 12% de la totalidad, es decir, percibieron el pasado viernes una suma de 271 millones de dólares⁴. El resto de los tenedores domésticos de este título completan un 5% del total, con títulos por más de 125.000 dólares cada uno; y distintas dependencias del sector público recibieron otro 5% del total restante, por 112 millones de dólares. En síntesis, los «ahorristas» originarios son minoritarios a la hora de la cancelación del Boden 2012.

RELATO PRESIDENCIAL PARA DISPUTAR CONSENSO

Resulta interesante el ámbito del anuncio del fin del «corralito»: la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, uno de los símbolos del poder económico local, y sede de negocios y especulaciones bursátiles discutidas globalmente en la situación de crisis contemporánea.

Se trata de uno de los ámbitos del poder económico local, emblemático si se quiere. Hacía pocos días se había inaugurado la exposición de la Sociedad Rural y vaciado de presencia oficial. La Bolsa receptó en su aniversario al conjunto del Poder Ejecutivo, con la sola y obvia excepción del vicepresidente, en juicio con el titular de la entidad bursátil. Es curiosa la denuncia de Amado Boudou, que parece no convalidar CFK.

El discurso de CFK reivindicó «con orgullo» las ganancias del sector empresario y bursátil obtenidas durante la activación económica desde mayo de 2003, obviando el que esa tendencia tiene antecedentes en la gestión anterior, con el mismo ministro Roberto Lavagna, y que se puede explicar también con dos medidas previas que Néstor Kirchner (NK) nunca avaló explícitamente, ni involucraron a Lavagna, como la cancelación parcial de los pagos de deuda (Rodríguez Saá), y la devaluación vía pesificación asimétrica (Duhalde).

⁴ Ib.

Resulta interesante la comparación de la variación del índice Merval, de +5% en el periodo convertible desde abril de 1991 a fines de 2001 (periodo de estabilidad de precios), contra un +254% desde mayo 2003, la asunción de NK (con aceleración de precios desde 2006).⁵ Alguna vez, allá por el 2006, NK en New York señaló con relación a Wall Street que era «El lugar de donde no debimos salir»⁶. Fue dicho luego de tocar la campana del mayor recinto de la especulación global, y reuniones con inversores estadounidenses que elogiaban la evolución económica del país, quienes expresaban su satisfacción con la rentabilidad obtenida, clara lógica esencial del capitalismo.

Junto a la evolución de la deuda y las ganancias empresarias, el relato presidencial se detuvo en el progreso de los ingresos previsionales, anticipando el ajuste desde septiembre próximo, el que se percibe a comienzos de octubre. El sentido discursivo apuntaba al pago de deuda, aumentos de las ganancias e inclusión de sectores de bajos ingresos, pues aún con siete millones de jubilados y pensionados, la mayoría de ellos percibe ingresos mínimos que no satisfacen sus necesidades.

El relato en la Bolsa se propuso la disputa del consenso a dos puntas. Una de ellas apuntaba hacia el bloque de la dominación de clases, demostrando al poder económico que no se puede estar mejor que producto de la política económica en curso. Es lo mismo que hizo NK en septiembre de 2006 en EE.UU. ante los empresarios transnacionales a quienes se invitaba a invertir en el país. Es la lógica de la ganancia como atractivo para invertir, ganar y por ende acumular, algo dificultado en la coyuntura mundial del presente y el futuro cercano. La otra de las puntas apuntó hacia los menos favorecidos, en este caso, trabajadores jubilados y pensionados. Ya había dicho a los disidentes de Moyano que lo mejor era recibir los beneficios de la política oficial que disputar reivindicaciones desde el conflicto.

Se trató de un ejercicio que intenta demostrar la satisfacción por ingresos del sector dominante y del subalterno, a quienes se los incluye en el sistema vía consumo. Nada queda afuera de la política (económica), y todos están entre los favorecidos, unos con cuantiosas ganancias y otros con ingresos de subsistencia. ¿Es posible otro relato, y más aún, otra política, para otra ecuación de beneficiarios? Responder al interrogante nos llevaría a cuestionar la lógica de la ganancia, o sea, la del capitalismo.

Buenos Aires, 4 de agosto de 2012.

5 Es evidente que hace falta una comparación de valores relativos, no afectados por la importante variación de precios.

6 Nota de Fernando Cibeira en *Página 12* del jueves 21 de septiembre de 2006, en <www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-73327-2006-09-21.html>, visitada el 4/08/12.

NOTAS SOBRE EL PRESUPUESTO 2013 PARA LA ARGENTINA

El Poder Ejecutivo nacional presentó el proyecto de Presupuesto para 2013, y en estas horas lo defiende ante el Parlamento, donde se discutirá, y probablemente aprobará hacia fines de noviembre. Es bueno discutir estos temas en simultáneo en el conjunto de la sociedad. En primer lugar para intentar reorientar recursos para satisfacer necesidades de la población, y en segundo lugar para ganar consenso sobre asuntos estructurales que no se tratan necesariamente en las proyecciones anuales de las cuentas públicas.

La presentación del Presupuesto incluye el pronóstico de evolución económica para 2012, es decir, cómo termina el periodo económico en curso, especialmente si se sabe que en la primera parte del año existió una desaceleración respecto del año anterior (2011).

En efecto, el Indec dio cuenta de un crecimiento del 2,4% para el periodo que se extiende de enero a junio del presente; y el pronóstico anual, del Ministro de Economía, alcanza al 3,4%. Ello supone un fuerte crecimiento económico en lo que resta del año. Una cifra parecida al 4,4% imaginado para todo 2013.

Ese crecimiento pronosticado para 2012 significará pagar los bonos de deuda pública atados al crecimiento del PBI por más de 3.000 millones de dólares. Claro que si existe error y en vez de crecer al 3,4 tal como anunció Lorenzino y se crece por debajo del 3,25%, entonces el gobierno se encontrará con 3.000 millones de dólares en el Presupuesto, liberados para inversión pública en bienes de capital. La disposición de esos fondos será la situación más probable, y por ahora sirve para que los inversores sigan apostando a los títulos de la deuda pública argentina.

EXPECTATIVAS EN COMPRAS CHINAS Y BRASILEÑAS

Respecto de los datos para 2013, las expectativas favorables para el crecimiento económico se concentran en la demanda externa, principalmente de China y Brasil. Claro que la novedad es el anuncio del gigante asiático por suspender compras de granos de soja durante seis meses, cubriendo su demanda con existencias en stock, acumuladas en el último tiempo¹.

El comentario periodístico alude a que China quiere bajar los precios y no convalidar las subas de los últimos tiempos. Se argumenta que con el solo anuncio del gobierno chino la soja bajó de los 600 dólares la tonelada y pareciera alejarse de la reciente tendencia a una evolución del precio sin techo. Aquellos que no vendieron esperando mejores precios perdieron la oportunidad del mayor precio conseguido por la oleaginosa.

El caso brasileño es distinto, ya que ante la evolución de su economía, el gobierno del PT decidió fuertes estímulos para favorecer la recuperación económica, con incidencia en el crecimiento de las compras en la Argentina, especialmente de automotores. La industria automotriz en el país es clave para pensar en el sector industrial en su conjunto.

Es curioso, pero en los fundamentos del proyecto de presupuesto se alude a la crisis mundial, cuando las expectativas de crecimiento provienen más de la animación de la demanda externa que de mejoras en las condiciones del mercado interno. Decimos esto porque, aun cuando la proyección inflacionaria es baja a la realidad de mercado, pues se ubica levemente abajo del 11% anual (10,8%), el efecto real se descargará sobre los sectores de menores ingresos relativos en la sociedad argentina. Es algo que incidirá negativamente en la recuperación económica vía mercado interno y es fuente para pensar en la extensión del conflicto social en la disputa por los ingresos.

EMPLEOS E INGRESOS

Uno de los afectados será el sector de trabajadores, ya que estructuralmente se paró el efecto de «generación de puestos de trabajo» producto de la reactivación económica ocurrida entre 2002 y 2007, interrumpida por efectos de la crisis global en 2008 y 2009, y levemente recuperada en 2010 y 2011, para detenerse en 2012, incluso con pérdidas de puestos de trabajo por primera vez en el ciclo de expansión de la década (2002-2012).

1 Merino Soto, «China deja de comprar soja por seis meses y hará uso de sus reservas», diario BAE, página 4 del 24 de septiembre de 2012.

El temor no es solo por la evolución de las cuentas macroeconómicas, sino por el posible conflicto social en demanda de ingresos, sea en la disputa salarial de los trabajadores regularizados, como entre los beneficiarios de planes sociales por mejoras y ampliación de los ingresos. Aunque también se expresará por la no modificación del mínimo no imponible en el Impuesto a las Ganancias, una de las principales reivindicaciones que mueve la protesta sindical en la coyuntura. Al mismo tiempo, las expectativas del presupuesto en la recaudación por bienes personales, sin modificar los mínimos pueden impactar en sectores de trabajadores.

En el Presupuesto existe la reducción de subsidios, entre otros desaparecen aquellos destinados a los subterráneos. El gasto público social está discutido por las restricciones al gasto que presentan las cuentas a corto plazo. Ello incluye los ajustes sobre los ingresos de los trabajadores estatales y los fondos que finalmente se apliquen para cancelar las sentencias judiciales a demandas de los trabajadores jubilados. Algo parecido ocurre con las actualizaciones de Asignaciones Familiares o los ingresos previsionales.

INVERSIONES Y ¿DESENDEUDAMIENTO?

Las previsiones no contemplan soluciones vía ampliación de la inversión privada, y el acento se concentra a lo que realice el sector público, tal como viene ocurriendo en los últimos tiempos. Es parte de lo que se supone viene realizando en estos días Julio De Vido en su gira por Brasil, China y Rusia, a la búsqueda de inversores externos para proyectos de infraestructura en el sector energético. En el mismo sentido se mueven las autoridades de YPF y la propia presidenta en sus actividades en el extranjero.

Un tema especial se concentra en la cuestión del endeudamiento público, ya que se ratifica, tal como en años anteriores, la orientación de aprobar un «Fondo de Desendeudamiento», en este caso por 7.967 millones de dólares, que incluye los pagos del bono por crecimiento del PBI, que como sostuvimos, es muy probable que no deban pagarse. En este caso, más de 3.000 millones de dólares podrán ser usados para obra pública, especialmente en «el sector energético o satelital» según anunció el ministro Hernán Lorenzino.²

La deuda se lleva el 27% del gasto total, solo superado por «seguridad social», que utilizará el 32,76% del total. Los pagos previstos de deuda superan ampliamente el gasto en «educación y cultura», previsto en 5,36%; de Ciencia y Técnica por 1,15%; y el de «salud» que tiene previsto un 2,7% del gasto total. El gasto del conjunto de la Administración gubernamental alcanza el 4,48%.

2 Hernán Lorenzino, reportaje diario *Página 12*, sábado 22/9.

Vale mencionar que el Presupuesto 2013 establece un endeudamiento ordinario por 48.000 millones de dólares y operaciones de crédito adicional por 34.341 millones de dólares, sumando más de 82.000 millones de dólares de nuevo endeudamiento, poniendo en discusión la categoría de desendeudamiento. Debemos adicionar a esa cifra «avales al Estado», sea YPF, Enarsa u otras empresas, por 33.585 millones de dólares.

La deuda pública continúa siendo un tema destacado en el Presupuesto y por lo tanto condiciona el uso de los recursos públicos, mucho más de lo que sugiere el relato oficial, que concentra la opinión en la real disminución de la relación de la deuda con el PBI, o con el comercio exterior.

UTILIDAD DEL DEBATE MÁS ALLÁ DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

Concluamos señalando que el debate presupuestario en la sociedad puede incidir en cambios de la orientación del uso de los recursos, incluso las fuentes de los mismos.

El cálculo de ingresos no presenta sorpresas, donde el IVA, Ganancias y retenciones siguen siendo lo principal de los recursos fiscales. Pero junto al debate por la disputa de los recursos del Estado, hace falta discutir la orientación general de la economía y su modelo productivo.

Las suspensiones temporales de compras desde China puede hacer reflexionar sobre las desventajas del mono producto y las consecuencias sobre la producción y la sociedad que reclaman productores y habitantes de pueblos fumigados y subordinados al agronegocio manejado por transnacionales de la alimentación y la biotecnología.

Se trata de habilitar un debate más allá de las posibilidades de modificar o no el proyecto de Presupuesto 2013. Lo que interesa es politizar a la sociedad en la discusión sobre qué presupuesto se requiere para reorientar las políticas públicas.

La cuestión es si el Presupuesto define un rumbo para asegurar los intereses de la dominación capitalista, o si la discusión permite acumular fuerzas sociales para una política alternativa, transformadora, que suponga el cuestionamiento estructural de la orientación por construir el capitalismo nacional, lo que supone la lógica de la ganancia y su acumulación para la dominación. El asunto sigue siendo construir fuerza social, política y cultural para el cambio social en momento de crisis capitalista.

Buenos Aires, 24 de septiembre de 2012.

CRUCES DIALÉCTICOS CON EL FMI Y LOS ACUERDOS CON LAS TRANSNACIONALES

Comentar la coyuntura de la economía en estas horas nos lleva a considerar la presencia de funcionarios argentinos en el exterior, sea la asistencia y discurso de la presidenta en la reunión de la ONU y sus encuentros con empresarios, aunque también con estudiantes; y los del titular de YPF y el ministro de planificación, todos en la búsqueda de inversores para la producción energética.

Por un lado se reconoce en las presentaciones realizadas en el exterior las opiniones de los principales referentes del oficialismo en la Argentina, y claro, también la réplica de la oposición (de derecha). Eso es lo que refleja la discusión mediática sobre lo acertado o no de las sucesivas intervenciones públicas de los protagonistas, principalmente de la presidenta. Pero también, más allá de lo discursivo, surge para nuestra consideración y propósito, llamar la atención sobre la preocupación central del gobierno por lograr inversores externos para dinamizar la economía local.

Pretendemos destacar que más allá del debate mediático sobre los discursos, lo que interesa son los acuerdos relativos a inversiones productivas, ya que estos definen mucho más el rumbo del país que cualquier polémica.

No se trata de minimizar los debates discursivos con el FMI, o si los interrogantes estudiantiles en EE.UU. estaban organizados de antemano con fines políticos, situación muy probable por cierto; sino que intentamos resaltar que resulta más difundido el análisis de las conferencias presidenciales en Georgetown y Harvard que las conversaciones sostenidas con la Exxon para avanzar en la producción de hidrocarburos no convencionales.

Este es en nuestra opinión un tema sustancial para el debate profundo en nuestro tiempo, ya que se trata de una actividad de carácter extractivo que puede afectar seriamente a la población, especialmente por la tecnología a aplicar, la fractura hidráulica o *fracking*, lo que implicará el uso de cuantiosas cantidades de sustancias tóxicas y de agua.

En el mismo sentido, señalamos que más prensa tuvo la adecuada amonestación a la titular del FMI por su descalificada manera de criticar a la Argentina (por las insuficiencias en las estadísticas), que las consecuencias que surgen de los acuerdos logrados en China por Julio De Vido para la cooperación atómica entre ese país y Argentina. ¿Cuánto debate genera el desarrollo atómico como energía alternativa y cuánto la discusión sobre lo sostenido por la titular del FMI, o la intencionalidad de los encuentros con los estudiantes de universidades estadounidenses?

EL ORDEN MUNDIAL Y SU CRÍTICA

En lo discursivo aparece una crítica no desdeñable de la presidenta al poder económico mundial, especialmente a los organismos internacionales con pretensión histórica de constituirse en reguladores globales de la economía, algo que remite a su creación en 1945.

Es muy importante criticar en la ONU al FMI, pues se trata de un organismo subordinado al sistema mundial que articula Naciones Unidas, y que curiosamente retomó protagonismo desde la existencia del G20, agrupamiento que aborda desde 2008 lo relativo a la crisis mundial y que la Argentina integra desde su surgimiento. Si hasta autocríticamente en Harvard, relató Cristina Fernández, que el G20 no asume discursos críticos sobre «paraísos fiscales» u otros asuntos importantes del orden contemporáneo, porque no hacen a la preocupación de quienes ejercen la hegemonía en ese ámbito y en el de la economía mundial.

Queda claro dónde radica el poder económico mundial, que se hace visible entre los organismos internacionales y los más poderosos estados nacionales. Sin embargo, el poder que construyó a ambos instrumentos, a los organismos y a los Estados, es el capital más concentrado.

La cuestión de fondo a que aludimos es que el poder económico mundial son las empresas transnacionales y el apoyo que estas reciben de sus estados nacionales de origen, y del entramado de organizaciones pensadas para gobernar el mundo capitalista contemporáneo, sea el FMI, el BM, o la OMC, más allá del fracaso de estas organizaciones. Lo esencial es el poder del capital y junto a él, las mediaciones institucionales creadas históricamente para satisfacer las necesidades del ciclo de valorización y acumulación del capital.

Apuntamos a señalar que la crisis actual incluye junto a la esencialidad del problema para la valorización, la capacidad de la institucionalidad del sistema capitalista mundial para normalizar el ciclo. En ese sentido es que se discute la nueva arquitectura del poder mundial, y desde ese ángulo pueden entenderse críticas al orden capitalista desde el propio régimen. Es que el fracaso de la organicidad del sistema demanda actualizaciones para la regulación económica y financiera, cuestiones que se intentan procesar en el G20, entre países hegemónicos y emergentes en expansión. Nuestra reflexión apunta a la crítica del salvataje del capitalismo, de sus empresas y de su institucionalidad.

Nos afirmamos en un diagnóstico de fracaso ante la responsabilidad del FMI en la crisis contemporánea y el permanente ajuste sugerido para hundir a los pueblos en la miseria y resolver los objetivos de ganancias y acumulación de los grandes capitales; o un BM surgido para la reconstrucción de países destruidos durante la Segunda Guerra Mundial y ser hoy promotor de la subordinación de los países y proyectos económicos a la estrategia de la liberalización que demandan las grandes transnacionales que dominan la economía mundial.

Pero también la OMC es expresión del fracaso, por ejemplo ante la promoción discursiva del liberalismo y la apertura, cuando todos los países despliegan medidas proteccionistas. Esta semana pasada, Europa demandó a EE.UU. por protecciones recurrentes a la industria aeronáutica, especialmente a la Boeing, situación que perjudica a Airbus; y al mismo tiempo, desde Washington se denuncian otros fenómenos de proteccionismo europeo contra empresas estadounidenses. Es lo habitual, como observamos en demandas contra la Argentina por medidas proteccionistas, o de nuestro país sobre otros países por disposiciones que frenan la circulación mundial de producción local. La ronda de Doha de la OMC está estancada por la crisis y las políticas proteccionistas que chocan contra el discurso aperturista. El problema es que la crisis es mundial y las respuestas se organizan desde los Estados nacionales.

Por todo ello es correcto el planteo de que el problema de la crisis tiene base en la Política, tanto como en la Economía, y convengamos que no puede separarse una de otra; que no hay Economía sin Política, ni viceversa; y por ello sostenemos con orgullo la denominación original de la disciplina que enseñamos e investigamos como «Economía Política». Ante la crisis mundial en curso hay que discutir de Economía y de Política; del orden económico social mundial y de la institucionalidad que lo preside. ¿Por qué el G20 y no la propia ONU? ¿Por qué la revitalización del FMI y no la estructuración de un nuevo orden global, económico, financiero, productivo?

¿QUÉ POLÍTICA PARA QUÉ ECONOMÍA?

Pero si esta es la cuestión, bien vale discutir el sentido político de las decisiones económicas, o dicho de otro modo qué rumbo de desarrollo suponen las decisiones de evolución económica, más allá de los discursos que se formulen.

Una opción asumida por la Argentina se concentra en el privilegio de la actividad productiva y se destaca incluso el carácter desarrollista del modelo productivo contra el especulativo, hegemónico en los años noventa. Desde esa definición entonces, convengamos que el proceso de producción capitalista requiere del inversor que ponga en funcionamiento el ciclo económico, lo que supone compras de medios de producción articulados con la contratación de fuerza de trabajo.

Más allá de los debates teóricos sobre el papel del Estado en la actualidad, en su carácter de sujeto con capacidad de invertir ante la ausencia de una burguesía con capacidad y vocación nacional para definir un rumbo autónomo, la realidad es que la Argentina, como la mayoría de los países, ahora designados como «emergentes» buscan atraer capitales externos. Lo hacen porque existen capitales excedentarios a escala global que buscan rentabilidad en múltiples territorios, entre otras cuestiones para alejarse de la crisis de valorización que hoy se presenta en los principales territorios de la explotación capitalista. Son capitales dispuestos a iniciar el ciclo de producción y circulación, tarea que se realiza a cambio de ganancias y condiciones para recrear el ciclo con más ganancias, acumulación y dominación social. Ese es el sentido de los acuerdos de YPF con Chevron y las conversaciones con Exxon, o de los compromisos con la empresa china CNNC (Compañía Nacional Nuclear China).

El debate que queremos suscitar es si la producción solo puede resolverse con la lógica de la ganancia, lo que supone, sí o sí, el papel de las transnacionales como originadores del proceso productivo. El debate es si los Estados Nacionales pueden impulsar otra política económica, que más que definirse como «emergentes en búsqueda de inversores», pudieran asumir el desafío de modelos productivos y de desarrollo diferenciados. Claro que eso supondría mayores acuerdos globales entre países no hegemónicos en la escena mundial. No alcanza con habilitar acuerdos múltiples que aprovechen las contradicciones entre EE.UU. y Europa, por ejemplo, o entre éstos y Japón.

Lo que sugerimos es volver a discutir el papel económico y productivo que pueden impulsarse desde acuerdos hasta ahora con importante dimensión política, como la UNASUR y la CELAC, por ejemplo, para

pensar en articulaciones intelectuales, de investigación y desarrollo de ciencia, tecnología y técnica para resolver la producción desde otra lógica a la que organizan los inversores externos ávidos de valorización. Es una discusión que también significa la crítica al orden global vigente y recrear variados mecanismos que se instalaron en Nuestramérica en los últimos años y relativos a una nueva arquitectura económica y financiera del sistema mundial. Es un debate necesario por otro orden ante el fracaso del surgido a fines de la Segunda Guerra Mundial. La crisis es la oportunidad, y claro, para nosotros, se trata de ir más allá de una crítica desde adentro del capitalismo para su rescate. Es quizá este el momento para proponer un orden alternativo, algo que sugiere la experiencia de cambio político que ensaya por más de una década Nuestramérica, y que con atención miran los indignados del mundo.

Buenos Aires, 29 de septiembre de 2012.



ACTUALIZACIÓN SOBRE LA CRISIS MUNDIAL

Acaba de presentarse el informe anual del FMI para 2012¹, algo así como su «memoria y balance», donde se insiste en la continuidad y gravedad de la «crisis financiera internacional», que nosotros preferimos caracterizar como «mundial y sistémica», no solo financiera e internacional.

Apuntamos a destacar que más allá de lo financiero y lo económico, la crisis se proyecta en otros campos, tales como los alimentos, la energía, el medio ambiente, entre otros asuntos; y que no debe considerarse un problema entre naciones (internacional), aún cuando la gestión de la economía es nacional, porque el problema es global y se asocia al funcionamiento del orden mundial.

Pero más allá de la caracterización, desde el FMI se insiste que la crisis se proyecta por lo menos una década, según Olivier Blanchard, el jefe de los economistas del FMI. Sostuvo que entre 2008 (estallido con la bancarrota en EE.UU., especialmente de Lehman Brothers) y 2018 es previsible la duración de la crisis mundial, con lo que aún restan varios años para ensayar los ajustes que promueve el organismo internacional y que sufren los pueblos del mundo. También para pensar en enfoques alternativos de política económica, incluso más allá y contra el propio régimen del capital.

Esa continuidad de la crisis es la razón por la cual la titular del FMI sostiene en el informe anual 2012 que «sigue faltando confianza, persisten las tensiones en los mercados financieros y la recuperación es aún

¹ Informe anual 2012. Trabajando juntos para apoyar la recuperación mundial, en <www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/ar/2012/pdf/ar12_esl.pdf>, consultado el 6/10/2012.

endible. Entretanto, el desempleo se mantiene en niveles inaceptables en demasiadas regiones y la estructura social está sometida a una presión creciente» y por ello llama a «reestablecer la estabilidad económica y financiera internacional» para el crecimiento.

Como vemos, el pronóstico es delicado y la convocatoria es sesgada hacia el ajuste, para estabilizar las cuentas macroeconómicas de los estados nacionales que evidencian situaciones críticas. Además hay preocupación por las tensiones que devengan en conflictos sociales. No lo dice el Fondo, pero la indignación crece a escala global.

MÁS CAPITAL AL FMI PARA EL AJUSTE Y EL FETICHE DEL CRECIMIENTO

Agregó Christine Lagarde, cuya asignación anual alcanza los 467.940 dólares (unos 183.200 pesos argentinos mensuales al cambio oficial), que «Los países miembros manifestaron su confianza (en el FMI) a través de una ampliación de los recursos por un valor de 456.000 millones de dólares».

Resulta increíble la apuesta y el compromiso de variados países con una organización corresponsable de una crisis que entre 2008 y 2009 consumió 25 billones de dólares en «salvatajes» estatales a grandes empresas y bancos. Gigantescos sueldos para gerentes de empresas, organismos y bancos contra el crecimiento del desempleo y la miseria, toda una realidad.

Esa ampliación de capital fue resuelta por el G20 en 2010, y el FMI utiliza esa mayor capacidad financiera para «asesorar y asistir» a países en problemas, tal como lo hizo con la región latinoamericana en los ochenta y los noventa con los regresivos resultados por nosotros conocidos en deterioro de la calidad de vida de la mayoría de la población.

Incrementar los recursos del FMI consolida una institución para el ajuste y el empobrecimiento de la población mundial, algo que el propio Fondo reitera y sugiere en sus diagnósticos. Claro que el promedio de ingresos de los altos funcionarios del Fondo está, según el informe del FMI, en 312.934 dólares al año, unos 122.500 pesos argentinos mensuales al cambio oficial. Nada mal para recetar ajustes que derivan en alarmantes datos de desempleo y miseria.

El diagnóstico del FMI señala las debilidades de la economía mundial, especialmente en la zona euro, y donde «la mayoría de las economías emergentes y países de bajos ingresos siguieron experimentando un crecimiento sólido».

Nada se dice acerca de que ese crecimiento significa, por ejemplo, excedentes en China destinados a la compra de bonos del tesoro de EE.UU.; o expansión de las remesas de utilidades de las transnacionales que operan en esos países emergentes, acrecentando el fenómeno de fuga de capitales desde los países emergentes a los desarrollados.

Se destaca en el informe del FMI como principales problemas el déficit fiscal y el elevado endeudamiento público. En el plano social sobresale el desempleo. Se califica la situación para 2012 como de «una frágil y tímida recuperación».

LA HETERODOXIA OPINA

Son los temas que en definitiva se discutieron en las jornadas monetarias del BCRA en la semana que pasó, ámbito que congrega buena parte del pensamiento económico heterodoxo mundial; y en el encuentro anual de Economía y Derechos Humanos que organiza la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, y que también convoca a heterodoxos y al pensamiento crítico regional y global.

En ambas ocasiones la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont, coincidió en que la crisis mundial «será larga» y que «la economía argentina crecerá bastante menos que el año pasado». La argumentación apunta a señalar el diferencial de crecimiento de la economía local respecto de la baja proyección de las economías del capitalismo desarrollado.

Es curioso cómo se sostiene el fetiche del crecimiento. La apelación del FMI y del BCRA es al crecimiento, como si ese crecimiento pudiera asignarse equitativamente al conjunto de la población. Las mismas autoridades económicas de la Argentina rastrean las causas de la inflación local en la concentración económica, fenómeno asociado a la propiedad privada y extranjera de las principales empresas fijadoras de precios. Son éstas las que captan lo principal de la renta social generada en la Argentina, más allá de los paliativos importantes de una política social masiva que se reconoce en 3,5 millones de asignaciones universales, o más de dos millones de jubilaciones sin aportes previos.

La extensión de la política social no define el núcleo de la acumulación capitalista, que sigue siendo predominante desde la ganancia, altamente concentrada en la cúpula del poder económico. Es un razonamiento válido para el país y para el mundo.

AJUSTE, DESEMPLEO Y TRANSICIÓN AL SOCIALISMO

La proyección para 2013 es de recesión europea y desaceleración del conjunto de la economía mundial, con elevadas tasas de desempleo. El informe del FMI destaca que «Al cierre del ejercicio 2012, más de 200 millones de personas en todo el mundo estaban sin trabajo, y en algunos países del sur de Europa más de la mitad de los jóvenes no pueden encontrar empleo».

Es interesante verificar cómo el FMI convoca al ajuste con un lenguaje ubicuo en los países con problemas (Europa principalmente) y destaca que el crecimiento en los emergentes se debe a ajustes previos.

Así como el FMI muestra al capitalismo desarrollado el espejo del ajuste de nuestro países en décadas anteriores; los pueblos ajustados en la coyuntura debieran observarse en el espejo de las resistencias que en Latinoamérica generaron las condiciones para los procesos de cambio político que hoy se viven y se estudian con interés en todo el mundo, razón que explica la presencia de intelectuales en variadas jornadas de debate económico que se realizan entre nosotros.

En rigor, no alcanza con análisis heterodoxos en el marco del capitalismo. El interrogante apunta a pensar más allá del capitalismo y en el tránsito de esta sociedad en crisis a otra, quizá en el rumbo del Socialismo del siglo XXI que sustenta la revolución bolivariana desde su afirmación electoral del 7 de octubre.

Buenos Aires, 6 de octubre de 2012.

ANUNCIOS DE CAMBIOS PARA EL MERCADO DE CAPITALES EN ARGENTINA

Casi en simultáneo con la aprobación, la semana pasada, de la inconstitucional reforma a la legislación de riesgos del trabajo, un instrumento solicitado por la Unión Industrial Argentina (UIA) y votado por el oficialismo y la algarabía del PRO (Partido de derecha que gobierna la Ciudad de Buenos Aires) en la Cámara de Diputados, el gobierno anuncia cambios en el mercado de capitales, más precisamente una reforma de la Ley de Oferta pública, que rige desde 1968.

Si los cambios de la «Ley corta» de riesgos del trabajo, que afecta los intereses de los trabajadores, eliminando la doble vía (indemnización por accidente o enfermedad, más acción judicial resarcitoria) significa una señal favorable a los empresarios; los cambios en el mercado de capitales sugieren mayor participación estatal en el financiamiento del capitalismo en el país. En el análisis de la noticia o de la política puede pensarse en algo así como una medida a favor del mercado, y otra de orientación proestatal.

EL MERCADO DE CAPITALES Y LA ACUMULACIÓN CAPITALISTA

Debe recordarse para el caso cuál era el objetivo del régimen legal de 1968, imposible de disociar respecto del propósito sustentado por la dictadura del General Onganía desde el golpe de 1966.

La finalidad de la política económica estaba orientada a modificar sustancialmente el patrón de acumulación derivado de la industrialización sustitutiva de importaciones (ISI) promovida desde los años treinta.

Ese propósito de modificación del orden económico social fue demorado una década como consecuencia de la resistencia de los trabajadores, dos *Rosariazos* mediados por el *Cordobazo* en 1969, y variadas puebladas que se sucedieron en esos tiempos y habilitaron la corta experiencia por la liberación nacional y social contra la dependencia capitalista durante 1973, y que culminó con el *Rodrigazo* a mediados de 1975 y el terrorismo de Estado desde marzo de 1976.

El objetivo de reestructuración de la economía, el Estado y la sociedad del Golpe de 1966 recién fue realidad una década después, con Martínez de Hoz y sus colaboradores inspirados en la escuela monetarista de la Universidad de Chicago en EE.UU. Sus consecuencias aún se hacen sentir en nuestros días, entre otras cuestiones con la institucionalización de la legislación financiera y el régimen de inversiones externas, instrumentos legales asociados al desarrollo del mercado de capitales y la inserción subordinada de la Argentina en el capitalismo mundial.

La función del mercado de capitales apunta a generar las mejores condiciones para la captación de recursos por el sector empresarial de la economía. Además del sector bancario, que oscilaba entre nacionalizaciones (1946 y 1963) y desnacionalizaciones (1955 y 1966) de los depósitos, se buscaba en 1968 estimular la tradicional actividad bursátil.

Una actualización importante y relativa al mercado de capitales se produjo en 1994, con la reforma previsional. Eran tiempo de la ofensiva neoliberal, del capital contra el trabajo. Eran los tiempos en que el equipo de la dictadura genocida destacaba la labor del gobierno constitucional en los noventa. El motivo esgrimido por Cavallo y Menem apuntaba a que sean los trabajadores con sus aportes y retenciones los que generaran una masa de financiamiento para la promoción de la iniciativa privada.

Así surgieron las AFJP, que no tuvieron el monopolio de la actividad por imperio de la lucha de trabajadores activos y pasivos, quienes arrancaron la convivencia del sistema de reparto con el régimen privado de capitalización. Este fue estatizado en 2009, en plena crisis de Bolsas y bancos en el mundo.

Vale mencionar que aún con la estatización, esos fondos previsionales aportados por los trabajadores son utilizados para estimular el mercado de capitales en la Argentina. Se estima que un 14% de los fondos previsionales están orientados en el financiamiento del sector productivo privado.

LOS CAMBIOS QUE SE VIENEN

Ahora se anuncian cambios que apuntan a mayor participación del Estado en el contralor de las actividades asociados al mercado de valores. Es una iniciativa convergente con similar accionar en el sistema mundial luego de la crisis iniciada entre 2007 y 2008, la que afectó la valorización de títulos y acciones en el sistema capitalista.

En el sistema capitalista, especialmente entre los países más desarrollados, se impone la creciente intervención estatal para estimular el nivel de actividad económica, que se encuentra menguado por impacto de la crisis mundial.

Los anuncios del Poder Ejecutivo apuntan en el sentido de ampliar las facultades de la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.) y restringir los «beneficios» fiscales y de contralor en manos de la Bolsa. La respuesta de disconformidad de los «mercados» se hizo notar con tendencias a la baja de las cotizaciones y con sospechas sobre la afectación del «libre mercado» que resulta de la intervención pública, como si fuera posible la libertad de mercado en condiciones de monopolio y transnacionalización de la economía.

Los anuncios sugieren modificar la autorregulación vigente en el mercado de valores; la regulación estatal y el fin del secreto bursátil; la ampliación de los operadores que puedan actuar como agentes de Bolsa, hasta ahora concentrados en muy pocos representantes con una millonaria inversión; y el cambio del carácter jurídico de la Bolsa de Comercio que pasaría a constituirse como una sociedad anónima y perdería así las exenciones impositivas vigentes por su calidad de entidad sin fin de lucro.

Todo ello está acompañado por nuevas regulaciones en el mercado del seguro. Se promueve la formación de un Fondo para inversiones productivas y de infraestructura que surge de orientar un 10% de los fondos administrados por las compañías de seguros, sea por las ART (entre 5 y 20% del total de sus carteras de seguros), los seguros de vida y retiro (entre el 12 y el 30% de las respectivas carteras), o los seguros generales y el reaseguro (entre el 10 y el 20% de cada cartera).

La expectativa apunta a consolidar hacia mediados de 2013 un valor del orden de los 7.000 millones de pesos para destinarlos a proyectos productivos y de infraestructura, elegibles por una comisión de funcionarios del Poder Ejecutivo.

Estas medidas intentan incidir sobre el nivel de actividad económica, y continúan el rumbo de utilización de los fondos previsionales ad-

ministrados por el ANSES. Existen inversiones productivas de los fondos previsionales por unos 30.000 millones de pesos, sobre un total de 215.000 millones de pesos. En el mismo sentido actúa obligar a los bancos a destinar un 5% de los depósitos para préstamos a pequeñas y medianas industrias. La idea es completar la presión sobre las aseguradoras para destinar una décima parte de unos 70.000 millones de pesos que existen en seguros, los que intentan valorizarse invirtiendo en títulos públicos, plazos fijos, fondos comunes de inversión, obligaciones negociables, acciones y ahora en proyectos productivos e infraestructura.

Son anuncios para mantener en actividad y con crecimiento al régimen capitalista de producción en el país, el que se encuentra afectado en la coyuntura por la desaceleración del presente año. Por ello, más allá del sentido de los cambios y los temores que genera entre especuladores e impunes inversores asociados a la evasión y elusión impositiva, los interrogantes de las medidas anticipadas remiten a qué tipo de producción es la que se debe promover, realizada por quiénes y con qué fin. Es algo que no debe quedar librado a las fuerzas del mercado, aún con mayor regulación estatal.

Buenos Aires, 29 de octubre de 2012.

ECONOMÍA Y POLÍTICA DETRÁS DEL 8N

Se produjo la anunciada protesta del 8N, y conviene comentarla desde un enfoque integrado de economía y política, o viceversa si se quiere, aunque por vocación y formación señalo que se trata, en definitiva, de un análisis a realizar desde la Economía Política. ¿Tiene intencionalidad política la manifestación? ¿Existen demandas económicas en la protesta? A ambos interrogantes contestamos afirmativamente.

Se salió a la calle con demandas políticas y económicas, asumiendo un formato instalado históricamente por el movimiento popular, que tantas críticas generaron en los mismos sectores que ayer obstaculizaron calles e imposibilitaron la circulación.

Pareciera que el piquete está bien en dependencia de quien lo lleve adelante. Habrá que recordarles a los manifestantes del 8N la situación de movilización y ocupación de calles y espacios públicos cuando a fines de mes salgan los trabajadores a protestar en la convocatoria de la CTA, la CGT, y otros agrupamientos para movilizarse contra la ley de riesgos del trabajo; la ley del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores, entre otras cuestiones; e incluso reivindicaciones políticas, por la libertad sindical y en crítica a la intromisión del Ministerio de Trabajo en la disputa política sindical.

Las movilizaciones son políticas y/o por reivindicaciones económicas; pero no es lo mismo reclamar por la eliminación a las restricciones del dólar que demandar un salario mínimo de 5.000 pesos mensuales, aunque ambas protestas se orienten al Poder Ejecutivo. De igual modo, no es asimilable la demanda política por libertad de comercio (del dólar) que el

reclamo por la libertad sindical (reconocimiento a la CTA y más de 2.000 organizaciones sindicales sin personería jurídica).

Pretendemos apuntar que existen diferentes tipologías de protestas sobre el gobierno, que economizando en el lenguaje señalamos que existen algunas planteadas por derecha y otras por izquierda, con lo que el espacio político no solo se define entre gobierno y oposición sistémica; sino que existe una política gubernamental que es cuestionada a dos puntas. En definitiva, la disputa reconoce tres espacios, aún cuando sea menos visible la opción crítica de izquierda.

LA DERECHA BUSCA SU BASE SOCIAL

No hay duda de que el 8N es una protesta por derecha contra el gobierno, aún cuando no todos los movilizados sean de derecha. Es una iniciativa impulsada, en carácter de responsables ideológicos, por sectores sociales asociados a las clases dominantes (medios monopólicos de comunicación, fundaciones, partidos, y organizaciones sociales y culturales).

Se trató de una masiva movilización inducida y orquestada por ámbitos (políticos, ideológicos, económicos, sociales, culturales) que promueven un agrupamiento para hacer coherente una política de gobierno con los objetivos de liberalización económica según el imaginario hegemónico en la década del noventa.

Detrás de las movilizaciones están los principales medios de comunicación (empresas cuyo objeto es la rentabilidad y que se sienten afectadas por la legislación de medios y la descapitalización y desmonopolización promovida), y varios ámbitos políticos e ideológicos favorables a una política explícita de alineamiento con el poder mundial, sea la política exterior de EE.UU., o el alineamiento sin reservas con los organismos internacionales (OMC, FMI, BM).

Es por ello que los reclamos se inspiran, por ejemplo, en la crítica a las restricciones a la compraventa de divisas, promoviendo la «libertad» de comercio. El libre cambio es la consigna por excelencia del régimen del capital desde la instauración de las políticas neoliberales.

Claro que la protesta arrastra a otros sectores sociales, no dominantes, ni socioeconómicamente hegemónicos, lo que le otorga masividad a la movilización y a la protesta. Insistamos que no todos los movilizados son adherentes a una política de derecha, y mucho menos sectores pudientes, pues de lo contrario nunca sería masiva. Lo que queremos enfatizar es que esos sectores sociales son hegemonzados por una lógica política de

las clases dominantes y sus instrumentos de mediación para el consenso. Los argumentos que arrastran a estos descontentos son variados, y entre ellos se destaca la inflación, que afecta principalmente a los sectores de menores ingresos.

También aparece la cuestión de la inseguridad personal, algo que trasciende la coyuntura y se proyecta como tema estructural de un capitalismo cada vez más orientado a la extensión del delito como forma de producción de valor y plusvalor (negocios de drogas, armas, trata de personas, etc.). Estos sectores sociales movilizadas, que ganan la calle, lo hacen contra los valores políticos que difunde el gobierno mediante su relato (el denominado «modelo»).

Es una movilización con múltiples demandas, pero concentradas en la crítica al gobierno y a sus proyectos, más allá de los recientes acuerdos parlamentarios entre el Gobierno y la oposición. Son acuerdos entre legisladores de los partidos de gobierno en la Nación y en la Ciudad de Buenos Aires, tal el caso de la ley de riesgos del trabajo, o la reorganización territorial de Buenos Aires para negocios inmobiliarios; o aun antes, la ley antiterrorista o la reapertura del canje de la deuda.

Esos acuerdos no impiden la disputa de consensos sociales para la competencia electoral. Por ello Macri y sus seguidores y aliados se sintieron parte de la iniciativa, y el gobierno intentó minimizarla. Todos saben que disputan política y orden económico social. La protesta se afirma en un sesgo ideológico «por la libertad» (de mercado, por ejemplo) y se expresa con algunos que manifiestan «aunque yo no tengo ahorros, pero si los tuviera quisiera poder invertir en lo que yo quiera, dólares o lo que sea». Es común escuchar estos comentarios instalados como valor ideológico por encima de la satisfacción de empleo, salario y condiciones de vida para más de un tercio de la población con problemas para lograr adecuadas condiciones de vida.

LA DISPUTA ES POR LA GESTIÓN DEL CAPITALISMO EN EL PAÍS

El gobierno expresa un sentido y un proyecto de gestión del capitalismo en la Argentina. Aludimos a la «reconstrucción del capitalismo nacional» formulada por Néstor Kirchner en la asunción presidencial de 2003, como a las recurrentes referencias de Cristina Fernández al objetivo capitalista de su gestión. Al mismo tiempo, vale destacar que se trata de un proyecto de gestión capitalista diferenciado del que expresa el gobierno porteño, más proclive a la ortodoxia neoliberal.

Las acciones cotidianas, y entre ellas la movilización del 8N, como otras, son iniciativas para disputar consenso social y confrontar por la

hegemonía de gobierno. Es la búsqueda por constituir el otro, el oponente al hegemónico que obtuvo el 54% hace un año.

Vale el comentario, más allá del dato nuevo en la coyuntura, que es el reconocimiento recíproco de las fuerzas relativas del kirchnerismo y el macrismo para negociar con beneficio mutuo, algo que se manifiesta en los acuerdos parlamentarios.

Todo pacto político constituye la búsqueda de tiempo para el logro de ventajas propias para renovar hegemonía en la gestión capitalista. Del mismo modo, las iniciativas como las del 8N, u otras, son acciones para consolidar base de masas en la confrontación política. Iniciativas políticas como la del 8N o las negociaciones para la gestión capitalista nada aportan al bienestar de los de abajo, sino que por el contrario los perjudica. Por todo ello es que pensamos que en el análisis de la coyuntura deben considerarse las diversas iniciativas políticas en curso, y no solo la del gobierno o la del agrupamiento del 8N. Una dualidad que sirve a ambos, más allá de quién vence a quién.

Pretendemos señalar que no se debe analizar la realidad en la superficie de los acontecimientos y lo que los principales interesados quieren mostrar: la disputa por la hegemonía de la gestión del gobierno del régimen del capital. El análisis debe completarse con la mirada orientada en la consideración de otras movilizaciones y acuerdos, que manifiestan voluntad por constituir procesos contrahegemónicos, es decir, más allá de la gestión capitalista.

En otras palabras, observar el tercero en discordia en la Argentina. No hay un solo otro y el gobierno; sino otros y el gobierno. Porque, en definitiva, no es solo el capitalismo, su evolución y su gestión; sino también múltiples procesos socioeconómicos y políticos que piensan y ejercitan la capacidad de propuesta pensando en mejorar la calidad de vida de los trabajadores y otros sectores populares pugnando por el contenido y el sentido del orden económico y social, más allá del neoliberalismo o del capitalismo.

México, 9 de noviembre de 2012.

SUSPENSIÓN DEL FALLO GRIESA: ¿Y AHORA QUÉ?

Finalmente se suspendió el fallo del juez Thomas Griesa, que establecía el próximo 15 de diciembre como la fecha de cancelación de parte de la deuda de la Argentina en *default*, unos 1.300 millones de dólares más intereses. La demanda había sido realizada ante tribunales de Nueva York por un «fondo buitres» (inversores que especulan sobre la base de problemas económicos de terceros). No debiera sorprender, pues se trata de una situación habitual dentro de la lógica capitalista más elemental.

La suspensión del fallo judicial fue producto de la apelación realizada por el gobierno argentino, sustentada en el carácter irracional de la sentencia del juez de primera instancia. Esta podía perjudicar a toda renegociación de deuda que se intentara en cualquier parte del mundo.

Ante la suspensión, el mercado de bonos en la Argentina recibió un importante impulso en las valorizaciones, ante lo que el Ministro de Economía de la Argentina se interrogó sobre qué había cambiado de un día para el otro. La alusión apuntaba a que el país era el mismo el día previo a la suspensión que luego de esta. El ministro se equivoca, ya que si se confirmaba la decisión judicial estadounidense, hubiera significado un elevado costo para el fisco e incluso la posibilidad de potenciar las dificultades derivadas del endeudamiento externo. El fallo en sus distintas instancias es parte de la política, o si se quiere, interviene en mantener o modificar el orden económico, a veces progresivamente y en otras, regresivamente. Se trata de una cuestión de economía política.

El problema es que la Argentina está pendiente de las decisiones que se tomen fuera de nuestras fronteras. Todo por haber cedido a los acree-

dores, tenedores de títulos de la deuda nacional, la posibilidad para litigar fuera del país. Es un asunto institucional que viene desde lejos, y que fue ratificado con los canjes de deuda de 2005 y 2010.

¿CÓMO SIGUE EL TEMA?

La suspensión no resuelve la cuestión de fondo, solo la posterga hacia febrero de 2013. Lo previsible es entonces el camino de la Justicia estadounidense, donde se disputará no solo la suspensión, sino la nulidad del irracional fallo. Algo a tramitar en el país hegemónico del capitalismo mundial, de una Justicia que no duda en garantizar las seguridades jurídicas de los inversores capitalistas, y donde solo resta apostar a la sensatez de un orden jurídico que no genere condiciones de legalidad de una obstrucción al propio sistema de deuda global. Habrá que considerar que la Argentina no juega sola esta disputa, y que los *hold out* también moverán sus piezas para cobrar lo más posible, que es la esencia de su negocio.

Otro camino es el de la política y la solidaridad internacional, tal como el pronunciamiento realizado por la UNASUR en su reunión reciente en Lima, y la convocatoria urgente para febrero del Comité de Finanzas de ésta organización regional para discutir sobre la Nueva Arquitectura Financiera. Es la única posibilidad para intentar superar los condicionantes que imponen los organismos internacionales, no solo a la Argentina.

Claro que la solidaridad política también se construye dentro del país, y en ese sentido fue poco feliz la comparación realizada por la presidenta, entre los jubilados que demandan al Estado por mejoras de sus ingresos previsionales y los «fondos buitres» que litigan contra el país. Una cosa son los jubilados en defensa de sus legítimos derechos previsionales, por aportes realizados durante su actividad laboral, y otra muy diferente la especulación financiera de los «buitres».

En un pronunciamiento colectivo que encabeza Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas y variadas personalidades del movimiento social, sindical, político, intelectual y cultural que se titula «La verdadera deuda es con el pueblo argentino» y donde se critica la situación de embargo de la Fragata Libertad y la sentencia del juez Griesa, se fundamenta que *«Es preciso enfrentar esta situación sobre la base de la Verdad y la Justicia, siendo que la deuda que reclaman los fondos especulativos es un crimen de lesa humanidad que hoy continúa vigente»*.

El texto afirma luego que «El pueblo argentino no tiene por qué pagar una deuda que no le fue consultada ni lo benefició y cuya legitimidad y licitud no han sido comprobadas». Por ello exigen que los gobiernos «el

derecho y la obligación de priorizar los derechos humanos por encima de cualquier reclamo comercial o financiero».

Terminan destacando que «Nuestro país debe recuperar su soberanía y deben ser juzgados y sancionados los responsables de haberla resignado...» para lo cual demandan «voluntad política» para:

1. Auditar-investigar la deuda de manera pública, integral y participativa, para separar la ilegítima de la legítima, comenzando con las pretendidas acreencias de los fondos llamados «buitres», y suspendiendo cualquier pago hasta su conclusión;

2. Anular todos aquellos contratos, leyes, tratados y acuerdos viciados de inconstitucionalidad, condicionalidades extorsivas y otros causales semejantes, en los que se establece la renuncia a la soberanía y la prórroga de jurisdicción a tribunales extranacionales, incluyendo entre otros, los bonos y la adhesión al CIADI;

3. Enfrentar a los especuladores impugnando los créditos fraudulentos e ilegítimos;

4. Juzgar y sancionar a quienes al emitir bonos ilegítima e inconstitucionalmente, entregaron la soberanía del país y los derechos y patrimonio popular, comenzando con el entonces presidente, Carlos Saúl Menem; el ministro de economía, Domingo Cavallo; los sucesivos procuradores del Tesoro; los bancos intervinientes, entre ellos el Bankers Trust y J. P. Morgan; y las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI.

El amplio arco social y político de repudio al accionar de inversores inescrupulosos requiere ser atendido por las autoridades y habilitar un accionar de fuerte consenso contra las secuelas de la deuda como uno de los más importantes condicionantes políticos y económicos en la coyuntura de la Argentina.

Más allá del accionar gubernamental, queda claro que es la sociedad la que debe asumir el debate respecto a éste y otros asuntos estratégicos sobre el orden económico y político, y sobre esa discusión inducir acciones políticas que aseguren la independencia, especialmente cuando se pretende un rumbo no condicionado por el poder mundial: las corporaciones transnacionales, los principales Estados capitalistas y los organismos internacionales. ¡Construir subjetividad contra el flagelo de la deuda se constituye en imperativo de la época!

Buenos Aires, 1° de diciembre de 2012.



LA ECONOMÍA ARGENTINA ENTRE 2012 Y 2013¹

EL BALANCE

Culmina 2012 con desaceleración de la economía y crecimiento de los precios (inflación), afectando más a los sectores vulnerables de la sociedad, producto de magros ingresos percibidos, sea por salario o por subsidios.

En el cuadro de beneficiarios con grandes ganancias aparecen los bancos, el sector de mayor rentabilidad en el mundo empresario. Completan el cuadro de ganadores el sector extractivo, con la minería y la soja principalmente, producto de precios internacionales en alza (promedio del año) y ampliación de la esfera productiva. También el sector automotriz, la siderurgia y metalurgia puede hacer balance positivo, aún con la merma respecto al récord de 2011.

Todos los sectores productivos mencionados asocian sus resultados a la inserción global subordinada (exportadora), pese a la crisis mundial. Los pronósticos a fines de 2011 anticipaban un año de bajo o nulo crecimiento. La ausencia de estadísticas confiables no permite identificar con certeza el nivel de caída del PBI en el país, siendo el principal dato la pérdida neta de empleos, por primera vez en la década.

La desaceleración supone menor producto e ingreso y, por la tanto, agudiza la disputa por su apropiación. Eso explica la presión patronal y de la política económica por intentar frenar la demanda de mejores ingresos de los trabajadores empleados y los perceptores de planes sociales. Además, la inflación contribuyó a deteriorar la capacidad de compra del

1 Escrito a pedido de la RedEco.

ingreso de la mayoría de la población. El resultado es un crecimiento de la conflictividad laboral y territorial, puesta de manifiesto en grandes movilizaciones sobre el final del año, especialmente el 20 de noviembre y el 19 de diciembre, en sendas convocatorias de un amplio espectro sindical liderado por la «unidad de acción» de la CTA y la CGT.

Esa situación de merma en la capacidad de generar riqueza de la economía argentina tiene impacto en las cuentas nacionales (el registro de la economía). Así se puede percibir un menor consumo, una baja en la inversión y menores resultados del intercambio comercial con el mundo.

En cuanto al consumo y la inversión, el esfuerzo continuó por el lado del sector público, limitado por restricciones estructurales definidas por el agotamiento del superávit fiscal que acompañó la gestión gubernamental en la década transcurrida.

El año 2012 registra modificaciones en los regímenes tributarios provinciales (impuesto inmobiliario, rural y urbano, patentes, sellos, etc.) para mejorar la ecuación de ingresos propios ante los problemas de financiamiento, tanto como el regreso de los estados provinciales al mercado de deuda, con alto costo de intereses e hipoteca de las finanzas provinciales, anticipando problemas en el futuro cercano.

Las restricciones externas por menor saldo comercial y fuga de capitales determinaron que se profundizaran algunas medidas sobre la disponibilidad de las divisas (moneda extranjera) que se anticiparon al final de 2011. Es importante en ese sentido la férrea administración sobre las divisas, restringiendo su utilización para el Estado, especialmente en el sostenimiento de la política de cancelación de la deuda, y aquellas actividades del sector privado que fueran imprescindibles en las relaciones con el exterior.

Así comprobamos cómo las reservas internacionales se redujeron de 47.000 millones de dólares a fines de 2011 a 43.000 millones a finales de 2012. En paralelo surgieron cotizaciones de las divisas muy por encima del precio establecido oficialmente, algo que impactó en cierta franja de productos importados que se comercializan en el mercado interno, afectando la capacidad de gasto de consumidores.

La novedad de 2012 fue la expropiación parcial de YPF, ampliamente aceptada por la sociedad. Las razones de la medida se encuentran en el déficit energético —del orden de los 10.000 millones de dólares por año entre 2011 y 2012—, esperando reproducir la situación en 2013 y quizá en los próximos años. La gestión estatal se concentró este año en acercar socios con tecnología para la extracción de hidrocarburos no convencionales, el *fracking*, altamente depredador y contaminante, destacando los acuerdos

con Chevron (EE.UU.) y el grupo Bidas (nacional asociado a capitales chinos). La actividad también transitó por la búsqueda de financiamiento a pequeños inversores, y principalmente a dependencias del Estado, sobre todo a la ANSES.

LA PERSPECTIVA

La economía argentina estará condicionada por la evolución de la crisis mundial del capitalismo, especialmente por la de los principales socios comerciales: China y Brasil. El gigante asiático es gran comprador de soja y en los últimos tiempos discontinuó compras masivas y privilegió el uso de su stock para inducir reducción de precios. Es una incógnita el impacto que pueda generar respecto del ingreso de divisas y el estímulo a la producción.

Por su parte, Brasil crece muy lentamente, y una evolución más favorable estimulará la producción industrial de nuestro país, especialmente de automotores, el sector más dinámico del ensamblado local. Además, en el vínculo con el exterior pesará el déficit energético, lo que insumirá cuantiosas divisas para la importación. Seguirá siendo una incógnita el ingreso de inversores asociados a YPF, del mismo modo que el financiamiento externo adecuado para los planes de producción de la petrolera de gestión estatal.

El sector externo continuará ocupando la agenda por las negociaciones asociadas al endeudamiento, siendo previsible una mayor carga financiera la potencial reapertura del canje y las negociaciones con el Club de París. El FMI intentará condicionar la política económica local, vía monitoreo de las cuentas públicas o por lo menos observando la metodología del organismo oficial de estadísticas.

En una mirada más local, el acento estará en la capacidad de sostener la expansión del nivel de actividad y el empleo, luego de un año de escaso crecimiento y de pérdidas, por primera vez en la década, de puestos de trabajo. Para ello se promoverán políticas activas del Estado nacional en el sector productivo y financiero, intentando inducir que los bancos canalicen sus depósitos en créditos a la producción, especialmente de Pymes.

Un problema puede presentarse desde el consumo, por el impacto de la inflación en los sectores de menores ingresos y el intento renovado de amenguar la demanda de actualización de ingresos, sea por salarios o por subsidios. El conflicto social agudizado resulta esperable en ese escenario.

El estrechamiento de la disponibilidad de recursos fiscales puede limitar el gasto y la inversión pública, dificultando la necesaria ecuación inversora en el PBI ante la falencia de inversores del sector privado. En

síntesis, los problemas externos e internos sumados en un año electoral, incidirán en la disputa social por el ingreso y la riqueza.

COROLARIO

La propaganda oficial se sustenta en los datos del crecimiento económico desde 2003, que en rigor comenzó en el segundo semestre de 2002. Los años 2009 y 2012 son la excepción, y en general se asoció el tema a la crisis mundial. En realidad, con crecimiento o no, siempre está la crisis, puesto que se crece por la crisis y se decrece también por la crisis.

Los precios de las *commodities* (soja u oro) crecen por la crisis y eso impacta en el crecimiento argentino. La recesión europea, o la desaceleración china y brasileña generan disminución de compras externas de productos argentinos y por eso la crisis gesta la desaceleración local.

Es complejo pero es así, la crisis propicia el ciclo de crecimiento o recesión. Es que la Argentina es parte del sistema capitalista y como tal participa de la crisis capitalista en curso.

El interrogante es si la sociedad argentina está condenada a «surfear» en la crisis capitalista o si puede pensar más allá del capitalismo.

Esto requiere de un sujeto social y político que luche por políticas anticapitalistas y antiimperialistas, algo necesario y posible por lo que vale la pena luchar, y es el camino elegido por pueblos que buscan su independencia en la región Nuestramericana, desde el socialismo cubano al socialismo siglo XXI propuesto por Venezuela o el socialismo comunitario sustentado por Bolivia.

Como el próximo es un año electoral, el debate político concentrará buena parte de la discusión civilizatoria en la Argentina y en ese sentido parece pertinente discutir el rumbo del país.

El gobierno defenderá su «modelo» de un «capitalismo serio o normal», contra el «anarco capitalismo», tal como definió oportunamente la presidenta. La oposición sistémica, procapitalista insistirá en las recetas del aperturismo neoliberal y el «libre comercio» en tiempos de transnacionalización.

¿Será posible que emerja una propuesta alternativa, más allá del sostenimiento del orden capitalista? Ese es nuestro horizonte cuando formulamos los deseos de felicidades para 2013.

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2012.